

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Tributario obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos.

BOLETÍN N° 14.111-05

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir el segundo informe sobre el proyecto de ley de la referencia iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes Cisternas y Jorge Pizarro Soto.

A una o más de las sesiones en que la Comisión trató el proyecto de ley, asistió, además de sus miembros, el Senador señor Pizarro.

Concurrieron, asimismo:

Del Ministerio de Hacienda, el Subsecretario, señor Alejandro Weber; la Coordinadora de Políticas Tributarias, señora Javiera Suazo; el Coordinador de Mercado de Capitales, señor Francisco Larraín; el asesor de Mercado de Capitales, señor Juan Pablo Loyola; el Asesor Tributario, señor Francisco De Sarratea, y el Coordinador Legislativo, señor José Riquelme.

De la Comisión para el Mercado Financiero, el Presidente, señor Joaquín Cortez; el Director General Jurídico, señor José Antonio Gaspar; el Director General de Regulación Prudencial, señor Luis Figueroa; el Director de Regulación de Bancos e Instituciones Financieras, señor Jaime Forteza; la Jefa Área de Comunicación, Educación e Imagen, señora Cristina Goyeneche; el Jefe División de Coordinación Normativa, señora Renzo Dapuzo, y el Comisionado, señor Augusto Iglesias.

De la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF), el Presidente, señor José Manuel Mena; el Gerente General, señor Luis Opazo, y el Fiscal, señor Juan Esteban Laval.

Los abogados, señores Ricardo Guerrero, Francisco Saffie, Alfredo Ugarte y Mario Silva.

Del Ministerio Secretaría General de la

Presidencia, el asesor legislativo, señor Marcelo Estrella.

La asesora del Honorable Senador Coloma, señora Carolina Infante.

La asesora del Honorable Senador García, señora Valentina Becerra.

El asesor del Honorable Senador Lagos, señor Reinaldo Monardes.

La asesora del Honorable Senador Montes, señora Lía Arroyo.

El asesor de la Honorable Senadora Rincón, señor Gonzalo Mardones.

Del Comité Demócrata Cristiano, los asesores, señora Valentina Muñoz y señor Julio Valladares.

- - -

Cabe hacer presente que, con fecha 23 de junio de 2021, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley, fijando como plazo para la presentación de indicaciones el 8 de julio del corriente.

A continuación, el día 7 de julio, se abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta las 12 horas del día 19 de julio, ocasión en la que se recibieron 10 indicaciones.

Posteriormente, el día 8 de septiembre, se abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta las 12 horas del día 23 de septiembre, ocasión en la que se recibieron 7 indicaciones.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: no hay.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 8 quater y A 10.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: 1 bis, 2 bis, 5 bis, 7, 8 bis, 8 ter y 9.

4.- Indicaciones rechazadas: 2.

5.- Indicaciones retiradas: 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 10.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Al comenzar la discusión, en **sesión de 4 de agosto de 2021**, la Comisión recibió al **abogado señor Francisco Saffie**, quien se refirió a las indicaciones presentadas al proyecto de ley en informe, comenzando por aquella introducida por el Senador Montes que modifica el número 2 del artículo 33 bis del Código Tributario, la cual, si bien no es ajena a la regulación actual, resulta importante porque vuelve a poner esta obligación de entregar información en el lugar jurídico que tuvo con la reforma del año 2014.

Explicó que estas obligaciones de entrega de información se aprobaron por primera vez en Chile el año 2014 respecto de inversiones que se realizaban desde Chile al extranjero o en Chile respecto de inversiones pasivas que se recibían y eso se incorporó al artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta denominado "Otras normas de entrega de Información".

Señaló que esas reglas son importantes porque permitían tener información respecto de inversiones en el extranjero y evitar la discusión de si estas eran elusivas o no, sino que, por el contrario, no se aplicaba impuestos a las inversiones que se realizaban desde las empresas chilenas al extranjero, pero sí era importante contar con esa información, precisamente para que no se realizaran dichas operaciones con fines elusivos.

Agregó que esa reforma se aprobó y se incorporó al artículo 14 de la ley de renta, pero en la reforma del año 2020 esas reglas desaparecieron y se llevaron después al artículo 33 bis del Código Tributario con un cambio muy relevante: dejaron de ser obligaciones de entrega de información y en cambio pasaron a ser una facultad del Servicio de Impuestos Internos que podía requerir esa información a medida que fuese necesario según la fiscalización.

Estimó que la indicación del Senador Montes repone el estatus normativo de las obligaciones de información exigiendo que sea una obligación de entrega de información por parte de los contribuyentes que realizan inversiones en el extranjero y además aquellos contribuyentes que constituyen *trust* en el extranjero o fundaciones en el extranjero.

Hizo presente que la indicación no propone un mayor cambio sustantivo respecto de la información que se entrega, pero ahora sería una obligación de los contribuyentes y no simplemente una facultad de la administración.

Luego, se manifestó contrario a la indicación número 2, del Ejecutivo, al artículo 62 bis del Código Tributario, ya que al tratarse de una indicación sustitutiva elimina por completo el objetivo del proyecto de ley, al introducir solo modificaciones procedimentales a la etapa judicial en la cual el Servicio de Impuestos Internos solicita al tribunal tributario y aduanero levantar el secreto bancario.

Agregó que eso es lo que establece el artículo 62 bis del Código Tributario en relación con el artículo 62 del mismo Código, toda vez que este último establece las condiciones en que se puede levantar el secreto bancario y el artículo 62 bis establece el procedimiento judicial para eso.

Puntualizó que si el proyecto del Ejecutivo es solamente eso sería insuficiente, de manera que el efecto procedimental de la indicación es importante, sin embargo, si fuese una indicación que solamente modificara el artículo 62 bis sin ser una modificación sustitutiva de la Moción, podrían incluirse, además, los cambios propuestos por el Ejecutivo.

Hizo presente que la Moción propuesta por los Senadores Lagos, Montes y Pizarro no termina con el secreto bancario y en su opinión eso está muy bien; lo que hace el proyecto es permitir y hacer posible que el Servicio de Impuestos Internos tenga herramientas para detectar cuándo tiene que solicitar al tribunal levantar el secreto bancario.

Añadió que si la indicación del Ejecutivo no fuera sustitutiva, es decir, se introdujeran modificaciones al artículo 62 bis para mejorar el procedimiento judicial de levantamiento del secreto bancario para hacerlo más expedito, podría discutirse y aceptar sustantivamente las propuestas del Gobierno, sin embargo, al tratarse de una indicación sustitutiva, en su opinión habría que rechazarla, porque modifica por completo el sentido del proyecto de ley.

Enseguida se refirió a la indicación número 3, presentada por la Senadora Rincón, en que agrega la palabra “cargos” a la idea de abonos y estimó que podría agregarse, haciendo presente que es la contracara de la exigencia de informar los abonos y en ese sentido se manifestó conforme con ello.

A continuación, se refirió las indicaciones números 4 y 5, de los Senadores señora Rincón y señor Montes, las cuales apuntan al mismo objetivo: reducir el monto de saldos que debe ser informado.

Precisó que en el caso de la Senadora Rincón ella plantea que sean 750 UF en lugar de 1.500 UF que propone el proyecto de ley, mientras que el Senador Montes hace una diferenciación, dejando las 1.500 UF cuando se trate de personas jurídicas y luego modifica a 500 UF o superior cuando se trate de personas naturales o de patrimonios de afectación en todos los casos.

Expresó que, como ocurre siempre cuando la ley hace referencia a montos u otros criterios respecto de los cuales se debe fijar un límite, la pregunta que cabe hacerse es hasta dónde se está conforme con una regla abstracta que fija un determinado monto.

Señaló que en derecho comparado los montos son menores a las 1.500 UF, indicando que Perú y Uruguay -que se asemejan a la legislación chilena- tienen montos inferiores y cercanos a las cifras que se sugiere en las indicaciones.

A continuación, se refirió a la indicación número 6, presentada por el Senador Montes, que ajusta el texto para que guarde correspondencia con la definición previa, sin embargo, opinó, falta una indicación concordante con la propuesta de la Senadora Rincón para que en caso de que se llegara a aprobar la indicación para bajar el monto a 750 UF, se efectúe una modificación concordante en la número 6, para redactar ese párrafo de manera que esté en concordancia con la cifra anterior.

En cuanto a la indicación número 7, de la Senadora Rincón, que propone incorporar un párrafo nuevo cuyo objetivo sería que las entidades financieras obligadas a informar al Servicio de

Impuestos Internos comuniquen a los contribuyentes esa obligación, observó que no queda claro quién se hace responsable de la información.

La **Honorable Senadora señora Rincón** explicó que mientras se encuentre pendiente la tramitación del proyecto de ley de protección de datos personales y en tanto se mejore el estándar en materia de tratamiento de datos sensibles y personales de los contribuyentes, resulta necesario incorporar una cláusula que permita asegurar que los datos del cliente bancario van a ser asegurados, de acuerdo con la directiva 95/46/CE de la Unión Europea sobre tratamientos de datos personales y libre circulación de datos.

El **señor Saffie** señaló que, con el fin de hacer más claro ese propósito, tal vez podría hacerse una referencia considerando que podría no ser necesario clarificar la persona responsable del manejo de datos dentro de las empresas, de manera que una referencia más abstracta al estándar que se está exigiendo pueda ser más clara para esta regla en particular.

La **Honorable Senadora señora Rincón** replicó indicando que, al no contar aún con legislación sobre el tratamiento de datos, no queda claro de qué manera podría hacerse responsable a quien maneja esos datos, teniendo en cuenta que se está hablando de información sensible.

Propuso que tal vez pudiera adecuarse la redacción en términos que se garantice que quien usa esta información se haga responsable.

El **señor Saffie** precisó que la obligación del Servicio de no utilizar la información está referenciada en la ley y que habría que buscar una redacción que permitiera clarificar o identificar exactamente quiénes van a ser esas personas responsables dentro de las empresas, si habrá algún procedimiento interno o algún tipo de referencia de ese estilo, de otra forma no se cumpliría con el propósito que se busca, considerando que si se establece que el banco es responsable, al no existir una legislación específica, se podría incumplir con la protección de esos datos por la referencia al manejo.

La **Honorable Senadora señora Rincón** manifestó su disposición a revisar la redacción de la indicación, sin perjuicio de considerar necesario incorporar una norma de esta naturaleza.

El **señor Saffie** concordó con lo señalado por la Senadora Rincón, precisando que su duda apunta a saber quién es la persona responsable del manejo de datos.

Luego, se refirió a la indicación número 8, de la Senadora Rincón, en que se agrega una referencia al Servicio Nacional de Aduanas para que también le entreguen información.

La **Honorable Senadora señora Rincón** precisó que la indicación dice relación con elevar el estándar del Servicio Nacional de Aduanas incorporándolo toda vez que constantemente está solicitando contar con mayores facultades de fiscalización, mayor dotación, mayor tecnología, cosa que no se ha hecho. Agregó que Chile se encuentra dentro de los países que está en el comercio de droga por parte del narcotráfico.

El **Honorable Senador señor Coloma** preguntó en qué lógica debiera incorporarse en el proyecto al Servicio Nacional de Aduanas.

La **Honorable Senadora señora Rincón** refirió que, desde la reforma tributaria del año 2010, se ha venido solicitando se le entregue al Servicio Nacional de Aduanas mayor preeminencia en el control de información, de tráfico, etc., a fin de prevenir evasión o elusión de obligaciones y desde esa perspectiva ese es el objetivo de esta indicación.

El **Honorable Senador señor Coloma** opinó que no ve relación entre la incorporación del Servicio Nacional de Aduanas y la idea matriz del proyecto, que presenta un objetivo distinto, considerando que la idea matriz es cómo los bancos pueden informar al Servicios de Impuestos Internos saldos que de alguna manera puedan determinar algún tipo de responsabilidad.

Añadió que distinto es que a propósito de esto se incorpore al Servicio Nacional de Aduanas cuando se está hablando de información de saldos, sin perjuicio de manifestarse disponible para analizar la materia.

La **Honorable Senadora señora Rincón** planteó que el objeto que el proyecto de ley persigue es lograr disminuir o controlar la evasión y todo aquello que diga relación con actividades ilícitas, y en ese sentido destacó que mucha actividad se está produciendo en materia de aduanas, de manera que si los bancos tuvieran que informar al Servicio Nacional de Aduanas de operaciones, muchas de las situaciones que pasan hoy en día por aduanas podrían revisarse, sin embargo, esa información hoy día no la está recibiendo ese Servicio.

El **Honorable Senador señor Lagos** consultó si el objetivo de la indicación sería que junto con informar al Servicio de Impuestos Internos tendría también que informarse al Servicio Nacional de Aduanas.

La **Honorable Senadora señora Rincón** respondió que se apunta a aquellas operaciones que sean de competencia del Servicio Nacional de Aduanas y que sean relevantes a fin de poder pesquisar actividades ilícitas y de evasión.

El **Honorable Senador señor Montes** señaló que hay datos concretos de tráfico de armas y drogas a través de aduanas, de manera que es un problema más global el del Servicio Nacional de Aduanas y compartió con la Senadora Rincón el hecho de que esa situación no puede continuar igual. Se refirió al caso en que se descubrió tráfico de armas a Bolivia a través de autos y todo ello pasando por la aduana, de manera tal que el problema es más serio y debe enfrentarse.

El **Honorable Senador señor Lagos** observó que, si bien está de acuerdo con el problema planteado por la Senadora Rincón y el Senador Montes respecto del Servicio Nacional de Aduanas, alberga dudas en cuanto a si la facultad que se le pretende entregar va a servir para esos efectos.

La **Honorable Senadora señora Rincón** manifestó que entregarle esta facultad al Servicio Nacional de Aduanas es muy necesario y ayudaría a controlar lo que ocurre hoy en día en materia de evasión.

El **Honorable Senador señor Montes** propuso que tal vez pudiera incorporarse esta materia como una obligación para el Servicio de Impuestos Internos de remitir cierta información al Servicio Nacional de Aduanas

La **Honorable Senadora señora Rincón** señaló que, si bien no tendría problemas en hacerlo, eso implicaría modificar las funciones del Servicio de Impuestos Internos y ello estaría fuera de la norma.

El **Honorable Senador señor Coloma** hizo presente que el proyecto de ley que se discute tiene un objetivo distinto.

El **Honorable Senador señor Montes** señaló que el proyecto busca que a través de la información se detecten señales de posibles problemas que deban ser investigados.

El **Honorable Senador señor Coloma** insistió en que la indicación no dice relación con el artículo 85 bis del Código Tributario.

El **Honorable Senador señor Montes** compartió la preocupación de la Senadora Rincón, toda vez que pareciera que existe cierto descontrol por parte del Servicio Nacional de Aduanas. Puso de relieve que tal vez habría que estudiar algún proyecto distinto de éste.

La **Honorable Senadora señora Rincón** señaló que dentro de los objetivos del Servicio Nacional de Aduanas se encuentra el resguardo de los intereses del Estado y de la ciudadanía fiscalizando operaciones de manera oportuna y exacta, determinando los derechos e impuestos vinculados a esto, por lo que ese Servicio tiene atribuciones en materia de evasión.

El **Honorable Senador señor Montes** solicitó a la Comisión considerar la posibilidad de presentar un proyecto para enfrentar el problema más inmediato y serio del referido Servicio.

El **Honorable Senador señor Coloma** precisó que a su juicio se puede hacer una norma específica respecto del Servicio Nacional de Aduanas, pero que estima que tal vez ese tema no tendría mucha relación con el objetivo que se plantea con el artículo 85 bis y en ese sentido pidió la opinión del señor Saffie.

El **señor Saffie** manifestó estar de acuerdo con pensar en una alternativa de carácter sistemático para regular esos problemas, y dijo ser partidario de no mezclar temas en la regulación, de modo que quizás fuera mejor crear una normativa paralela especial para el Servicio Nacional de Aduanas, que resuelva de mejor forma y conforme a sus competencias el tipo de problemas que se presenta hoy en día, teniendo presente la gravedad que representan.

Debido a ello estimó positivo pensar en alternativas para mejorar las competencias del mencionado Servicio y de manera sistémica, a fin de que no genere algún tipo de ruido en la discusión sobre este tipo de facultades del Servicio de Impuestos Internos el agregar al Servicio Nacional de Aduanas con algo que quizás no le sea propio.

La **Honorable Senadora señora Rincón** hizo hincapié en que el objetivo del proyecto es evitar la elusión y la evasión, no es darle normas al Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto, se debe analizar a quien se debe enviar la información para que puedan hacer su trabajo y ello no solamente involucra al Servicio de Impuestos Internos, sino que también al Servicio Nacional de Aduanas.

Agregó que, si el objetivo fuera discutir sobre las facultades del Servicio de Impuestos Internos, entonces el proyecto sería otro.

El **Honorable Senador señor Coloma** planteó que el objetivo del proyecto es crear herramientas para que el Servicio de Impuestos Internos pueda combatir la elusión y eso es distinto al narcotráfico, a la violencia, etc.

La **Honorable Senadora señora Rincón** enfatizó que también tiene que ver con el Servicio Nacional de Aduanas, toda vez que no se pagan los impuestos, no se pagan los derechos de internación, etc.

El **Honorable Senador señor Montes** propuso revisar el tema a fin de encontrar una mejor fórmula.

Asimismo, indicó que sería bueno tener la opinión del Gobierno respecto de la materia.

El **señor Saffie** continuó con la indicación número 9, que dice relación con la rectificación, ampliación, complementación o aclaración del Servicio, la que consideró pertinente, sin perjuicio que se debe determinar el ámbito de competencias institucional que va a depender de lo que se decida respecto del Servicio Nacional de Aduanas.

Finalmente, indicó que hay un artículo transitorio, en que la indicación número 10 propone agregar la palabra “cargos” de manera coherente con la propuesta inicial de la Senadora Rincón.

En definitiva, expresó que la indicación más conflictiva para los propósitos del proyecto es la indicación sustitutiva del Gobierno, toda vez que elimina el fin que se persigue con el mismo, sin perjuicio de que esas propuestas podrían recogerse en caso de que se agregaran como modificaciones al artículo 62 bis del Código Tributario, sin eliminar el nuevo artículo 85 bis que se propone incorporar en el texto aprobado en general por el Senado.

En **sesión de 10 de agosto de 2021**, el **Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Weber**, efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

ÍNDICE

- I. Resumen de la moción
- II. Análisis de la moción
- III. Fundamentos de las indicaciones del Ejecutivo
- IV. Contenido de las indicaciones

I. Resumen de la moción

- El proyecto busca implementar nuevas medidas legales que reduzcan la evasión y la elusión tributaria dado los efectos nocivos que éstas generan (diagnóstico compartido), estableciendo un deber para las instituciones financieras, de entregar anualmente información de sus

cuentacorrentistas al Servicio de Impuestos Internos (SII), sin que medie intervención alguna del Servicio.

- Se crea un artículo 85 bis, nuevo, en el Código Tributario que establece la obligación de bancos e instituciones financieras de entregar anualmente al SII la siguiente información respecto de titulares personas naturales, personas jurídicas y patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile:

- Saldo o valor de cuentas financieras;
- Sumas de abonos efectuados en las cuentas financieras;
- Movimiento diario, semanal o mensual igual o superior a UF 1.500.

- La moción señala que la información proporcionada al SII tendrá el carácter de reservada.

II. Análisis de la Moción

- Ante el diseño propuesto por la moción, se observan algunos riesgos de carácter constitucional y de aplicación de las normas:

- **Riesgos de carácter constitucional:**

- Eventual vulneración a la protección de la vida privada: se ordena entregar información de los contribuyentes sin su conocimiento y sin que medie intervención judicial, por la sola disposición de la ley.

- Posible afectación de las garantías del debido proceso: no existe intervención de parte de un tercero independiente (juez), que pueda velar por la protección de garantías constitucionales (normas del debido proceso). Esto puede derivar en una indefensión para el contribuyente.

Además, el proyecto no distingue entre personas con buen cumplimiento tributario y aquellos respecto de los cuales se justifica investigar sus antecedentes.

- **Riesgos respecto de la aplicación de las normas:**

- Si bien no se explicita, la moción replica el estándar internacional de intercambio automático de información entre autoridades tributarias aplicable a no residentes (conocido como estándar

común de reporte o “CRS”, del cual Chile forma parte) e intenta transformarlo en un mecanismo doméstico, situación para la cual no fue diseñado.

- Esta aplicación rígida de estándares internacionales puede llevar a utilizar términos ajenos a nuestro ordenamiento jurídico, generando consecuencias indeseadas, tales como:

- **Cuentas identificadas mediante certificado de deuda, o instrumento similar:** este concepto puede significar que no solo se informará al SII de los abonos, sino que también de las deudas.

- **Instituciones financieras:** actualmente no existe definición legal de instituciones financieras. Definirlas, conlleva la dificultad de limitar el marco de regulación y de fiscalización (¿cuándo es Inst. Financiera y cuándo no? ¿cuándo debe fiscalizar la CMF?). Por lo mismo, en la última reforma a la Ley de Bancos, se eliminó toda referencia a “instituciones financieras”.

- **Contrato de seguros:** la moción establece una nueva definición de contrato de seguro, diferente a la establecida en el Título VIII del Código de Comercio. Esto genera problemas tales como determinar cuál es la ley que se aplica y cómo diferenciar un contrato civil (corriente o común) de un contrato de seguro. La definición de contrato de seguro de la moción, no contempla elementos esenciales tales como la prima.

- Posible judicialización: se discute la compatibilidad del texto de la moción, con normas recientemente aprobadas, como el artículo 8 bis N°4 del Código Tributario (ley N° 21.210), que ordena que todas las actuaciones del SII deben ser fundadas tanto en el ámbito de los hechos como del derecho, expresando un razonamiento lógico y jurídico que justifiquen la razón del acto.

- El artículo 8 bis del Código Tributario busca proteger los derechos de los contribuyentes.

- Si bien el proyecto establece la recepción pasiva de información por parte del SII, el uso de esta información requiere necesariamente de acciones de procesamiento de dicha información, lo que entra en conflicto con el espíritu que inspiró la aprobación de la norma anteriormente señalada.

III. Fundamentos de las indicaciones del Ejecutivo

• Compartiendo el espíritu del proyecto en cuanto a avanzar en mejoras a las herramientas con las que cuenta el Servicio de Impuestos Internos para acceder a información de los contribuyentes, las

indicaciones del Ejecutivo proponen cambios, que velan por las garantías constitucionales de las personas, como la protección de sus datos personales, la privacidad y el derecho fundamental al debido proceso.

- **Protección de la privacidad.** El Tribunal Constitucional ha sostenido que existe una relación sustancial, clara y directa entre la dignidad de la persona y su proyección inmediata en su vida privada, lo que deriva en un ámbito reservado del individuo al cual no es lícito penetrar, sin el consentimiento del afectado o por una decisión de la autoridad, fundada en la ley. Según el TC, “merecen reconocimiento y protección excepcionalmente categórica tanto por la ley, como por los actos de autoridad” (STC N° 389; 521 y 5540);

- **Debido proceso (bilateralidad de la audiencia).** El derecho a tener conocimiento sobre el proceso y su efecto, y es consustancial al ejercicio pleno del derecho a la defensa. Se traduce en el derecho a un conocimiento oportuno de la acción, el derecho a formular las defensas y de rendir y controvertir la prueba (STC N° 747 y 1448).

- En virtud de lo señalado, la indicación del Ejecutivo propone solucionar el problema de fondo (mecanismo poco expedito para solicitar la información financiera ante la negativa del titular), sin crear un mecanismo de entrega automática de información (por el sólo ministerio de la ley).

- Así, se modifica el **artículo 62 bis del Código Tributario**, que regula el procedimiento de autorización judicial para acceder a la información bancaria por parte del SII.

- Cabe considerar que el SII ha recurrido solo 4 veces a los Tribunales Tributarios y Aduaneros para solicitar autorización judicial para acceder a información sujeta a secreto bancario (1). (1) *Cuenta Pública 2020 / Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros* (<https://www.atta.gov.cl/wpcontent/uploads/2021/04/CP-ATTA-2020-FINAL-para-web.pdf>).

IV. Contenido de las indicaciones

Medida 1: el SII estará obligado a requerir autorización judicial en caso de negativa del titular.

- El SII deberá presentar la solicitud ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde que reciba la información del banco de la falta de autorización por parte del titular.

- Con esta medida se pretende hacer efectivo el acceso a la información por parte del SII, de manera de garantizar que en

caso de negativa del titular, la autoridad tributaria pueda obtener la información vía autorización judicial.

- Interviene el Poder Judicial para garantizar la protección de las garantías constitucionales;

- Así, se resguarda el derecho constitucional a la privacidad;

- Se logra diferenciar aquellos contribuyentes con indicios de incumplimiento tributario;

- Se protegen los derechos de los contribuyentes, ya que el SII para solicitar información privada del titular, deberá emitir un acto o resolución fundada.

Medida 2: se disminuyen los plazos del procedimiento de autorización judicial.

- Se reduce el plazo actualmente vigente para que el Juez Tributario y Aduanero cite a audiencia de un máximo de 15 días a 8 días hábiles.

- El juez debe resolver la solicitud en la misma audiencia, eliminándose la posibilidad de que lo haga hasta el quinto día de celebrada.

- **Se agiliza el procedimiento.** En caso que el juez estime necesario abrir un término probatorio, la sentencia deberá dictarse dentro del término de 10 días contado desde el vencimiento del mismo (actualmente no existe plazo). Lo anterior evita que proceda el trámite de observaciones a la prueba y la citación a las partes a oír sentencia.

- Así, se propone acelerar el proceso de solicitud de autorización judicial.

- El contribuyente tendrá conocimiento de la acción dirigida en su contra, manteniendo la oportunidad de oponerse a la entrega de su información privada, garantizando su derecho a defensa y a la bilateralidad de la audiencia.

Medida 3: se establece una etapa probatoria excepcional y expedita

- Se incorpora que el término probatorio (que es de 5 días) será improrrogable y limitado a los puntos que el mismo tribunal designe.

- Se incorporan las reglas de la sana crítica para la ponderación de la prueba, debiendo expresar la sentencia las circunstancias específicas que se han tenido en consideración para formar la convicción del tribunal.

- La sentencia deberá señalar de manera expresa la información que el banco deba poner a disposición del SII.

0

Medida 4: se agiliza la tramitación del recurso de apelación

- Se establece que el recurso de apelación en todos los casos se verá en cuenta tan pronto se reciban los antecedentes. La norma actual señala que el recurso de apelación se tramitará en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contado desde el ingreso de los autos en la Secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos.

- Se mantiene que contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno.

- Se establece que el expediente será devuelto íntegramente al SII por el Tribunal Tributario y Aduanero una vez decretado el cumplimiento del fallo.

- Así, se evitan situaciones que puedan dilatar la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero.

El **Honorable Senador señor Montes** hizo presente la conveniencia de agendar otra sesión a efecto de poder discutir y argumentar con el señor Subsecretario, atendido que lo planteado en su exposición es algo que ya existe en la legislación de manera que, desde ese punto de vista, no sería necesario el proyecto que se discute. Recordó que lo que se busca con la iniciativa es poder avanzar en el trabajo contra la evasión, por lo que le solicitó revisar el proyecto de otra manera, atendido que ha señalado cuestiones que no son las que plantea el proyecto.

El **Honorable Senador señor Coloma** compartió plenamente lo expuesto por el Ejecutivo, no obstante lo cual estimó razonable continuar el análisis de la iniciativa, teniendo en cuenta que se han planteado dos visiones destinadas al mismo objetivo.

La **Honorable Senadora señor Rincón** pidió al señor Subsecretario estar presente en una próxima sesión, y le solicitó revisar el proyecto en los términos propuestos por el Senador Montes.

A continuación, la Comisión escuchó a la **Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, ABIF**, cuyo **Presidente, señor José Manuel Mena**, efectuó una presentación en formato ppt, del siguiente tenor:

Contenido del proyecto de ley

Marco General

- Los **bancos e instituciones financieras** sujetas a la fiscalización y supervisión de CMF y del Ministerio de Economía, deberán entregar la siguiente **información al SII** en marzo de cada año:

- **Saldos o valor de cuentas financieras y abonos mensuales** correspondientes al **año calendario inmediatamente anterior**.

- Esta información debe entregarse en la medida que dichos saldos o sumas de abonos registren un **movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a UF 1.500 UF**, sin atender al número de titulares a que pertenezcan.

- Se debe entregar información sobre los **titulares** de cuentas financieras, **controladores** de dichos titulares o **beneficiarios finales**, que sean contribuyentes personas naturales, jurídicas, patrimonios de afectación u otras entidades que tengan domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país. Tratándose de cuentas financieras abiertas por dos o más personas o entidades, se considerará como titulares a todas las personas o entidades registradas o identificadas como tales por la empresa del sistema financiero.

- La información deberá remitirse a más tardar **dentro de los 15 primeros días del mes de marzo de cada año**, y deberá indicarse el **saldo final que registre cada cuenta financiera en cada mes correspondiente al año calendario** que se informa, **y la suma de abonos de cada cuenta financiera efectuados en el mes**.

Comentarios

Marco Vigente: secreto y reserva bancaria

- El **secreto bancario** para las **cuentas corrientes y sus saldos** fue reconocido administrativamente en nuestro país aún antes de que lo estableciera la ley N° 7.498, de 1943, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques.

- La actual ley sobre cuentas corrientes (DFL 707, de 1982) también reconoce la “estricta reserva”, respecto del **movimiento de la cuenta corriente y sus saldos**.

- **El art. 154 de la Ley General de Bancos, actualizada con la última modificación a la LGB, regula el secreto y reserva bancaria:**

- El **secreto bancario** es aplicable a los **depósitos y captaciones** de cualquier naturaleza que reciban los bancos. Asimismo, es igualmente aplicable a las **cuentas de ahorro o a los depósitos a plazo**, ya que dicha protección se extiende a todas las sumas de dinero que, a cualquier título, pueda entregar el público como depósito o captación a un banco autorizado para ello.

- Las **demás operaciones de los bancos**, incluyendo en ellas los **préstamos y colocaciones en general**, están sujetas a **reserva**, es decir, a un grado menor de confidencialidad. Se trata de operaciones donde el banco no actúa como deudor.

- El **acceso a la información bancaria sujeta a secreto o reserva** por alguien **distinto a su titular** o a su representante legal (i.e., Ministerio Público, SII, UAF) requiere **siempre de control jurisdiccional** (justicia ordinaria, jueces de garantía, por ejemplo) y que, además, la solicitud de información se refiera a **antecedentes específicos** que tengan directa relación con una investigación sobre una persona determinada.

Proyecto de ley: requiere preservar debido proceso

- El proyecto de ley **contraviene los principios y normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico en materia de entrega a la autoridad tributaria de información sujeta a secreto o reserva bancaria:**

- Art. 19 N° 3° CPR: derecho al **debido proceso**, y

- Art. 19 N° 4 CPR: **derecho a la vida privada**.

- Art. 8 bis N° 3 del Código Tributario: las **actuaciones del SII** -constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización-:(i) deben indicar con precisión las **razones que motivan la actuación** que corresponda, (ii) deben ser **fundadas** (expresar los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión); (iii) deben entregar **información clara, sobre el alcance y contenido de la**

actuación; (iv) debe informar sobre la naturaleza y materia a revisar y el plazo para interponer alegaciones o recursos.

- Art. 61 del Código Tributario: **resguardo del secreto bancario** y secreto profesional.

- Arts. 62 y 62 bis del Código Tributario: **acceso a la información bancaria y procedimiento.**

- Art. 154 de la Ley General de Bancos: **regula el secreto y reserva bancaria.**

Marco del Debido Proceso: autorización judicial

- La autorización por parte de un órgano jurisdiccional en el marco del debido proceso para acceder a información bancaria sujeta a secreto o reserva, es un **principio básico de nuestro ordenamiento jurídico.**

- En lo más reciente, dicho principio fue **reconocido por el Tribunal Constitucional** (Rol TC 2240-18) en el control de constitucionalidad del Proyecto de Ley que Moderniza la Legislación Bancaria (2019):

- Se declaró **inconstitucional** el ajuste al artículo 62 del Código Tributario, que autorizaba al SII a solicitar la autorización para acceder a información sujeta a secreto o reserva bancaria a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, **sin previa notificación del contribuyente.**

- **Fundamentos del TC:** afecta la bilateralidad de la audiencia y el derecho a defensa jurídica y, con ello, la garantía de un justo y racional proceso, y el derecho a la privacidad.

- Lo expuesto, por lo demás, es consistente con los principios de finalidad, proporcionalidad y seguridad, contenidos en el proyecto de ley que regula la **protección y tratamiento de datos personales**, que se encuentra en primer trámite constitucional en esta Comisión de Hacienda, los cuales responden a los más altos estándares internacionales en la materia (Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea).

- El **derecho comparado** reconoce el resguardo de los derechos fundamentales de las personas frente a la autoridad administrativa en los procesos de captación de información cuando no existe una investigación (i.e., Tribunal de Derechos Humanos Europeo).

- Existe una **inconsistencia** cuando nuestro ordenamiento jurídico exige la intervención judicial para acceder a la información bancaria en el contexto de una **investigación o fiscalización** y, por otra parte, el proyecto de ley que prescinde de control jurisdiccional - no existe una finalidad específica y conocida de parte de la autoridad tributaria, salvo contar con información.

Propuesta

- El **acceso a la información** es importante para que la **autoridad tributaria cumpla con su mandato legal**, en especial, para combatir la evasión y elusión de impuestos.

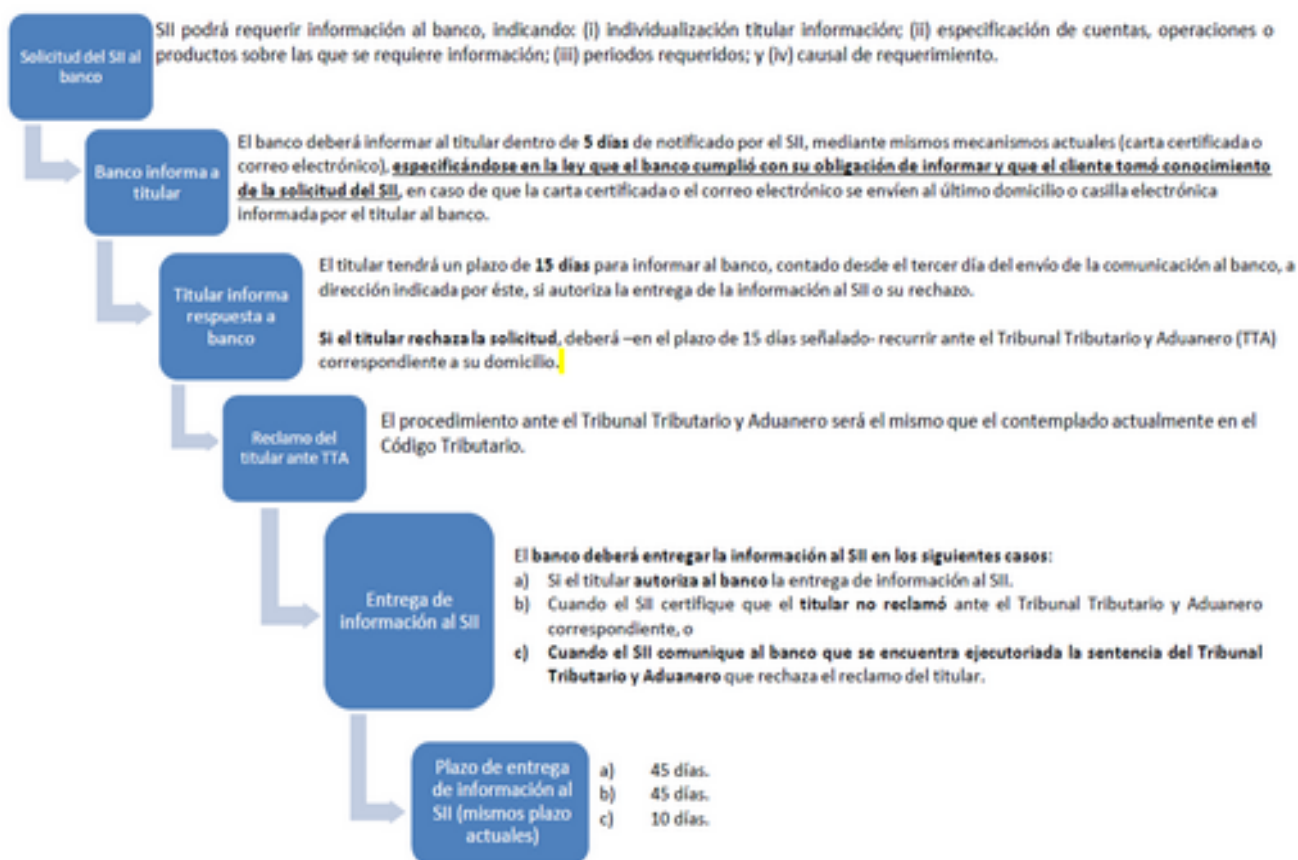
- Sin embargo, la consecución de dicho objetivo **no puede prescindir de los resguardos que nuestro ordenamiento jurídico otorga a sus ciudadanos en el contexto del acceso a la información bancaria sujeta a secreto o reserva:** derecho a la vida privada y debido proceso.

- Para lograr un **equilibrio entre el acceso a la información por parte del SII y el resguardo de las garantías constitucionales de los contribuyentes**, la Asociación de Bancos propone **perfeccionar los arts. 62 y 62 bis del Código Tributario**, que regulan el acceso a la información bancaria sujeta a secreto y reserva, cumpliendo con el estándar constitucional en esta materia.

- En concreto, proponemos evaluar un mecanismo **donde los titulares de la información puedan fundamentar su oposición a la solicitud de un requerimiento específico de información al Tribunal Tributario Aduanero**, en caso que el titular lo considere apropiado.

- Esta propuesta contrasta con el marco vigente, donde el SII es quien debe recurrir al Tribunal Tributario Aduanero para solicitar el acceso a la información sujeta a secreto y reserva bancaria.

Propuesta ABIF – modificación a los arts. 62 y 62 bis Código Tributario



El **Honorable Senador señor Montes** manifestó al señor Mena que el tema es delicado, porque no se ha buscado discutir el secreto bancario y el conjunto de argumentos entregado dice relación con abrir el secreto bancario y darle centralidad en el debate constitucional hoy en día, toda vez que la tendencia en países de la OCDE, así como en otras partes, va en un sentido contrario a lo que se ha planteado.

Destacó que lo único que se persigue con la iniciativa es un sistema para transparentar la información hacia el Servicio de Impuestos Internos que dé señales de lo que pudiera estar ocurriendo. Precisó que en ese sentido no hay debido proceso porque no existe proceso, sin perjuicio de que a partir de ahí se pueda iniciar un eventual proceso, pero para ello hay que seleccionar la información.

Expresó que al parecer lo que no se entiende bien es que simplemente se busca dar señales con información genérica y agregada.

En cuanto a lo que se planteó en materia de control jurisdiccional, observó que, si se decide iniciar un proceso respecto

de determinadas personas, ahí deberán considerarse los mecanismos jurisdiccionales que establece la norma.

Señaló al Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras que resulta complicado llevar las cosas a un extremo y planteó hacer llegar toda la información a los 155 integrantes de la Convención Constitucional, toda vez que se trata de un tema central, teniendo en cuenta que la cifra de evasión y elusión tributaria en Chile asciende a los US\$22.000 millones.

Finalmente, estimó que tal vez debieran aclararse algunos aspectos del proyecto, toda vez que no busca investigar, sino que dar señales para determinar si, a partir de eso, eventualmente se puede iniciar una investigación en algunos de los casos.

Posteriormente, la Comisión escuchó al **abogado señor Alfredo Ugarte**, quien compartió lo señalado por el Senador Montes en cuanto a que, tanto en la presentación del señor Subsecretario como en la del Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, hay una confusión respecto de lo que es el proyecto en estudio con lo que sería un proyecto que regulase derechamente el acceso a la información a través del levantamiento del secreto bancario.

Manifestó que tal vez sería mejor enfrentar el término del secreto bancario para efectos tributarios y no continuar con este tipo de legislación que en el fondo no enfrenta un problema real que involucra más de US\$22.000 millones, es decir 7 u 8 puntos del PIB de acuerdo a los últimos estudios, en evasión y elusión. Enfatizó que se deben generar los mecanismos para terminar con estas prácticas.

En seguida, efectuó una exposición, en formato ppt, del siguiente tenor:

(Minuta presentación Comisión de Hacienda del H. Senado)

I. CONTEXTO DE LAS EXPOSICIONES REALIZADAS HASTA ESTA FECHA EN LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO:

1) Todos los expositores coinciden en el alto índice de elusión y evasión tributaria que existe actualmente en el país, teniendo presente que estimaciones realizadas en los últimos meses por especialistas en la materia como el ex Director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, nos señalan que en materia de renta la elusión y la evasión podría estar en un rango superior al 30% y en materia de IVA

estaríamos en rangos superiores al 20% en la actualidad. Los fundamentos señalados en la moción parlamentaria coinciden a este respecto de modo uniforme.

2) Hay coincidencia plena en la necesidad de atacar y combatir con la mayor fuerza posible esta situación que nos afecta para la cual señalan que habría que establecer y normar las medidas pertinentes con la finalidad de tener “una efectiva regulación para combatir tales situaciones”.

3) Se ha hecho una referencia a que los mayores elusores en el país sería la informalidad, la actividad de los altos patrimonios con compañías off shore, trust y fundaciones de interés privado, el abuso de los precios de transferencias en las operaciones transfronterizas y otros.

4) Por su parte, la UAF nos ha señalado e informa en los antecedentes respectivos expuestos en su página web, que una de las principales causas y agentes usados para blanqueo de capitales y operaciones fraudulentas son realizadas a través de los bancos o instituciones financieras (según informes de la UAF año 2020, el reporte de operaciones sospechosas (ROS) corresponde en más de un 50% respecto de operaciones bancarias y el reporte de operaciones en efectivo (ROE) en más de un 80% proviene de las mismas instituciones), y como tal esta realidad constituye el principal soporte de estructura para este accionar que nos trae como consecuencia la elusión y la evasión.

5) Conjuntamente con lo anterior, llama la atención que ninguna de las exposiciones que se han presentado ante esta comisión ha desarrollado, explicado y mencionado los antecedentes, causas, origen y problemas que afectaron gravemente a Estados Unidos en relación a bancos europeos (término del secreto bancario para efectos tributarios), en especial el UBS que significaron la dictación de la regulación denominada FATCA aprobada el 18 de Marzo de 2010, con lo que se puso una barrera casi infranqueable para efectos de seguir utilizando la banca europea en operaciones de elusión y evasión de impuestos, esta legislación implicó el recolectar impuestos impagos de 34.500 residentes americanos que habían eludido o evadido impuestos, quienes tuvieron que pagar a la administración federal de Estados Unidos tales impuestos no declarados ni pagados y que el puro Banco UBS llegara a un acuerdo con el DOJ americano en donde tuvo que pagar sanciones en operaciones ocultas de 4.450 titulares de cuentas en dicho banco y, en definitiva, pusiera fin al secreto bancario de esa entidad financiera.

Como se podrá observar, bajo estas premisas de hecho, se dio el dominio y poder de la administración tributaria al Estado Americano para poner fin al secreto bancario para efectos tributarios en esas jurisdicciones. (<https://www.uaf.cl/prensa/estadisticas.aspx> /

https://www.uaf.cl/descargas/estadisticas/Informe_Estad%C3%ADstico_2020.pdf

6) Igual situación a la anterior se ha dado en el derecho comunitario de la Unión Europea, en donde se han dictado un sinnúmero de directivas y regulaciones que pusieron fin al secreto bancario para efectos tributarios, entre ellos, a título de ejemplo, destacamos:

Directiva 2011/16/UE DEL CONSEJO de 15 de febrero de 2011 relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.

Directiva (UE) 2016/1164 DEL CONSEJO de 12 de julio de 2016 por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.

Directiva (UE) 2018/822 DEL CONSEJO de 25 de mayo de 2018 que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

OCDE (2017), “Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras”, segunda edición, Éditions OCDE, Paris.

7) Del mismo modo a lo ya expresado, nada se ha dicho en las presentaciones ya referidas sobre los estándares OCDE y el trabajo de la OCDE para efectos de institucionalizar el intercambio automático de información bancaria financiera, tanto a nivel interno de los Estados miembros como entre los Estados a nivel internacional, a fin de poner fin a este flagelo de la evasión y la elusión. Llama la atención que nada se haya expresado respecto de la agenda BEPS y su plan de acción N°12, que es precisamente el establecimiento del estándar común de comunicación automática de información de cuentas financieras y bancarias y el establecimiento de un modelo de reglas de divulgación obligatoria para acordar un estándar común de información automática.

A este respecto resulta importante destacar que en febrero de 2014 la OCDE publicó el estándar común de comunicación automática de información de cuentas financieras (*Common Reporting Estándar CRS*).

8) La OCDE, organismo internacional al que pertenecemos ha recomendado ir avanzando en ese sentido y ya hemos visto que Estados con secretos bancarios muy estrictos como Suiza, han

dado acceso a las administraciones tributarias de forma directa. Chile, está incumpliendo dicho estándar, tanto es así que su nota en los informes sobre transparencia fiscal del Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información, disminuyen su calificación por la imposibilidad del Servicio de Impuestos Internos de acceder directamente a la información bancaria de los contribuyentes, sin la necesidad de solicitar autorización de Tribunales.

Somos de la opinión que como país debemos cumplir con el estándar OCDE por las razones ya indicadas, las que son claramente de interés público o general, como son los graves perjuicios que acarrearán a la recaudación tributaria, la elusión y evasión que se ven fortalecidas por la inaccesibilidad directa del SII a la información bancaria de los contribuyentes.

A esta respecto también llama la atención que ninguna de las exposiciones sostenidas ante esta Comisión hayan hecho referencia al hecho de que el tratado de doble tributación que se encuentra aprobado y suscrito con Estados Unidos (USA) no ha podido entrar en aplicación, precisamente porque conforme a la normativa legal de dicho país, éste exige el término del secreto bancario como requisito previo de la entrada en operación, toda vez que es una exigencia que la administración tributaria del Estado pueda acceder a las cuentas corrientes y operaciones bancarias.

9) Finalmente, sería interesante destacar tres aspectos que han sido importantes en las exposiciones para respaldar la mantención del secreto bancario y oponerse en términos algunos más generales y otros más específicos, en cuanto a este proyecto en discusión, pero fundamentalmente para mantener el secreto bancario en Chile:

a) Los fallos que se mencionan fundamentalmente referidos al Tribunal Constitucional son del 19 de julio de 2011, en lo relativo al STC, la causa Rol 1528, en donde se omite indicar que hubo un voto disidente. El otro fallo indicado, el STC Rol 349, de 30 de abril de 2002, y el último del Tribunal Constitucional, de 18 de Diciembre de 2018, Rol 5540-18, es decir todos los fallos mencionados ya tienen su tiempo, han transcurrido sus años y las condiciones tanto doctrinarias como de hecho y los tratados y convenios internacionales que se han suscrito a la fecha durante esos años hacen cambiar diametralmente el escenario y los criterios de análisis a aplicar.

b) No se señala de modo expreso y de manera acotada que de lo que se trata en la práctica y en los hechos es el regular el término del secreto bancario para efectos tributarios, y no el término de la institución en sí.

c) La alusión a anteriores pronunciamientos del

Tribunal Constitucional de hace ya un tiempo, hace necesario resaltar lo señalado en cuanto a que la redacción del texto que fue presentado y que no fue aprobado por el Tribunal Constitucional no expresaba ni señalaba en su redacción de forma clara y categórica que la norma a que se hacía referencia para efectos de su constitucionalidad debía quedar circunscrita y se refería exclusivamente a la alteración o cambio del secreto bancario sólo para efectos tributarios, lo que desgraciadamente en la redacción de aquel proyecto no fue reparado.

10) Por último, se insiste reiteradamente en el derecho a la intimidad de los contribuyentes, su privacidad y protección de sus datos personales, pero referidos a las personas físicas o naturales, así, en dicho sentido, al parecer, ¿se les quiere aplicar igual criterio a las sociedades, o sea derecho a la intimidad, privacidad y protección de datos personales? Pues nada se dice al respecto.

II. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, EJERCICIO DE LA FACULTAD DEL PODER FISCALIZADOR Y TRIBUTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO.

A este respecto es necesario hacer presente que en esta materia confluyen dos bienes jurídicos que se contraponen y que es necesario establecer y dilucidar de forma previa:

1) Por un lado está el poder de la administración tributaria del Estado en cumplir con el mandato legal que le ha otorgado de velar por la correcta aplicación de las leyes tributarias, el pago de los impuestos debidos y la correcta recaudación del Estado, atacando y evitando por todos sus medios legales y poder que le otorga la ley, los actos, maniobras y planificaciones agresivas elusivas o que constituyen evasión, siendo en consecuencia esta función el objeto jurídico protegido, en donde la administración tributaria del Estado debe cumplir con sus competencias, funciones y mandato legal.

2) El anterior bien jurídico protegido choca con un segundo bien jurídico, también protegido, esto es la intimidad y reserva de las personas en relación a sus movimientos y actuaciones en su vida económica, esto es el secreto bancario, el cual evidentemente gozará de protección legal en la medida que no constituya, en su ejercicio, un accionar evasivo o elusivo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o el cometer delitos tributarios.

Así colisionados estos dos bienes jurídicos protegidos no puede ser posible que el bien jurídico denominado secreto bancario impida la realización, cumplimiento y ejercicio de las competencias propias de la autoridad fiscalizadora para efectos de que no se dañe el principal bien jurídico económico del Estado (que es como se financia), esto

es la correcta declaración y debido pago de los impuestos como la recaudación de los mismos.

Es un error pretender como lo ha querido señalar parte de los economistas neoliberales de que el contribuyente se encuentra en un mismo plano y situación de igualdad que la autoridad fiscalizadora del Estado, eso no es posible ni es real y dado que precisamente para ese efecto que existen establecidos todos los derechos, procedimientos y Tribunales Tributarios para resguardar y proteger a los contribuyentes si esa autoridad administrativa se excede o extralimita en el ejercicio de sus funciones, pero no es al revés, en ningún caso, de que sea el derecho del contribuyente al secreto bancario el que impida el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la autoridad tributaria del Estado, pues no están en un plano de igualdad, siendo ello una necesidad para evitar la elusión y la evasión.

III. DEL ARTICULADO DEL PROYECTO. SUS PRINCIPALES DEBILIDADES Y FALENCIAS.

1) Al no ser un proyecto que derechamente vaya a regular y legislar sobre el término del secreto bancario para efectos tributarios poniéndonos acorde al estándar OCDE y el derecho americano y comunitario europeo, este proyecto es una especie de mecanismo que simplemente es una forma de rodear por el lado el problema sin asumirlo, lo que en concreto aportará muy poco, pues solamente entregará información genérica y al bulto, no segmentada, no diferenciada por tipos de perfiles de riesgo y como el mismo proyecto se encarga tanto de señalar en su parte expositiva como normativa, como dando una explicación, como pidiendo permiso, “este proyecto no otorga nuevas facultades al Servicio de Impuestos Internos” (como si fuera una falta hacerlo), y en definitiva ese hecho transforma al Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo al texto del proyecto, en un mero buzón de recepción de antecedentes, sin poder solicitar puntos, partidas o aspectos concretos que requieran para el cumplimiento de sus competencias.

2) En la definición o conceptualización de operaciones o cuentas financieras no se consideran ni incluyen ningún tipo de operación de administración de portafolios, de instrumentos derivados, operaciones trianguladas bursátiles, operaciones de confianza bancaria y mandatos ni otras que pueden significar cargos en una o más determinadas cuentas.

En esto es muy importante tener presente que nada se dice ni regula en relación a los holding empresariales, grupos de sociedades filiales o coligadas y en ningún momento se aborda la problemática para efectos de un mayor control y fiscalización de lo que tributariamente se denomina consolidación fiscal, en donde los grupos

holding o grupos de interés empresarial, para este tipo de efectos e información, control y fiscalización se consideran solo una entidad, quedando obligados a consolidar todos los antecedentes y actuar como solo un contribuyente para cumplir con su obligación de entregar información.

3) De más está volver a insistir lo que ya se ha dicho en que mientras en el Derecho comunitario europeo en los países anglosajones y en prácticamente la generalidad de los países OCDE, la cifra respecto sobre la cual se debe y tiene la obligación de informar es aquella que supera los USD10.000 por operación, aquí se establece un límite de UF1.500.- reconociendo que hay indicaciones presentadas a la fecha en orden a bajar ese monto señalado.

4) Una vez más, lo que ya a uno lo hace pensar que hay algo más allá del mero olvido, es como una constante en el último tiempo, se ha preterido en esta normativa al Servicio Nacional de Aduanas (olvidada en la reforma tributaria del 2014, en la reforma de la reforma del 2015 y en el proyecto de modernización del 2020), teniendo presente que en materia de operaciones internacionales, operaciones transfronterizas, negociaciones de importación y exportación y formación de grupos de interés económico en el comercio exterior, es fundamento más que necesario el dotar al Servicio Nacional de Aduanas de las facultades y competencias del caso, teniendo presente que esta institución fiscaliza y controla cerca del 30% de los recursos que recauda el Estado por concepto de impuesto. Afortunadamente la Senadora Ximena Rincón ha presentado una indicación que repara esa omisión.

CONCLUSIÓN:

1) El presente proyecto nos evoca la tendencia en nuestro país a no querer abordar de frente los problemas y sus soluciones y nos recuerda aquella frase “Jurel tipo Salmón” en donde se quiere regular algo a sabiendas que no es lo que corresponde, aplicando el criterio en la medida de lo posible, y no asumiendo derechamente las herramientas que se deben otorgar a la administración tributaria del Estado para terminar con la elusión y evasión en Chile o reducirla a su más bajo nivel.

2) Desgraciadamente, nuevamente tropezamos con la misma piedra y no nos damos cuenta que estamos generando normas que sólo el día de mañana entrarán e impedirán entrar a regular derechamente el término del secreto bancario para efectos tributarios y a este efecto recordemos una vez más lo ocurrido el año 2014 con la norma general antielusiva, en donde la misma fue desnaturalizada, transformada en un mero procedimiento judicial, manteniéndole el nombre de Norma Antielusiva, en que a la fecha luego ya de ocho años, no ha existido un sólo caso en aplicación y ha sido imposible poder restablecer, hasta esta fecha, su carácter y naturaleza administrativa de una verdadera NGA privando

hasta el momento a la administración tributaria del Estado de la principal herramienta de control y fiscalización para el cumplimiento de las leyes tributarias, en especial la elusión de los impuestos.

3) De persistirse en querer aprobar este proyecto en la forma presentada y no rectificarlo y complementarlo, necesariamente, en cuanto a su articulado actual, se deberían corregir al menos sus falencias y debilidades y otorgarle facultades a la administración tributaria para poder interactuar con los bancos e instituciones financieras teniendo facultades para solicitar aclaraciones, rectificaciones, complementaciones y poder contar con información adicional para el control de la evasión y la elusión.

Posteriormente, la Comisión escuchó al **abogado señor Mario Silva**, quien efectuó una exposición, en formato ppt, del siguiente tenor:

OBLIGACION ENTREGA DE INFORMACION

RESUMEN VISITA ANTERIOR

•FACILITAR EL ACCESO DE INFORMACIÓN

POR EL SII:

- Masividad de información
- NO hay protección de privacidad e intimidad

•PREVENCIÓN Y COMBATE EVASIÓN Y

ELUSIÓN:

- Unanimidad política
- Herramienta poco usada

•CASOS COMPARADOS:

- Perú y Uruguay masividad
- Países OCDE acceso total, pero sin masividad

VISION DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS

•ACCESO DIRECTO DEL SII A INFORMACION

BANCARIA

- Sinceremos el Secreto Bancario
- Si el SII desea más detalles debe ir al Art 62Bis

CT

- Probablemente seguirá igual que hoy su

utilización

•RESULTADO PRACTICO PROBABLE:
LIQUIDACIONES CENTRALIZADAS

Declaración de Renta •Saldos y Abonos llegan al SII cruce con

•Para defenderse el contribuyente va a tener que mostrar seguramente su cuenta bancaria

•Sinceridad

•SOLUCIÓN: SOLICITUD ESPECIFICA

•Con motivo de una fiscalización

•Programas de Fiscalización (Reformas Tributarias)

RESGUARDOS
•MANTENCION DE LA MASIVIDAD: VARIOS

•Mencionar expresamente que, si con motivo de la información se inicie un proceso de fiscalización se debe recurrir al art 62 bis (facilidad para obtención).

•Solo casos de, por ejemplo, contribuyentes de difícil fiscalización u otros casos graves SII solicita acceso inmediato juez tenga facultad de otorgar.

DEL SII:
•UNIDAD ESPECIAL DE DIRECCIÓN NACIONAL

•Manejo de información de manera secreta, esta Unidad informa a los funcionarios que deban conocer (Repatriación de Capitales).

•Registro de funcionarios que tengan acceso.

Hizo presente que, respecto a lo que se dijo respecto de que el problema de la aprobación del tratado entre Chile y Estados Unidos para evitar la doble tributación era que no había acceso a la información bancaria de los contribuyentes. estimó que ello no es así.

En ese sentido, explico que hay un tema político que ha dificultado las cosas, pero también hay un problema técnico que se produjo en Estados Unidos y que dice relación con un impuesto que, en

realidad, es una normativa que realiza una especie de renta líquida imponible paralela respecto de operaciones con el exterior y con relacionados.

Continuó señalando que cuando se dictó esa norma que no es muy antigua, se produjo un corte entre los tratados antiguos y los tratados nuevos y en el caso de Chile, éste quedo en el grupo de tratados que contienen normas que entran en conflicto con esta legislación interna de Estados Unidos y ello es un problema técnico que se debe ajustar y decidir qué hacer con estos tratados en términos si incluir o no este impuesto, y de qué manera para luego definir si aprobarán los tratados con estas modificaciones o si se respetarán las normas aprobadas.

En consecuencia, señaló que el problema de la aprobación del tratado entre Chile y Estados Unidos para evitar la doble tributación se debe a las consideraciones políticas y de carácter técnico mencionadas y no a la falta de acceso a la información bancaria de los contribuyentes por parte del Fisco, toda vez que, para efectos prácticos en Chile se encuentra vigente la normativa FATCA.

Finalmente y antes de referirse a las conclusiones de su presentación señaló que Estados Unidos tiene una normativa muy expansiva para averiguar la información bancaria de sus contribuyentes en el exterior, pero respecto de personas que tienen cuentas en ese país que no son contribuyentes nacionales de Estados Unidos no hay acceso a la información acerca de esas personas operando en la práctica casi como un paraíso fiscal toda vez que aun cuando Europa u otros países han solicitado información bancaria a Estados Unidos respecto de contribuyentes que no son nacionales de ese país, no se ha entregado la información solicitada.

RIESGOS Y CONCLUSIONES

•INFORMACION MUY SENSIBLE:

•Indicaciones

•Conclusiones

•Sincerar el Secreto Bancario y proteger al contribuyente.

•Directrices OCDE

•SII TENGA FACIL ACCESO, PERO NO MASIVO;
SI ES MASIVO MEDIDAS DE PROTECCION PARA EL CONTRIBUYENTE

El **señor Ugarte** se refirió a lo señalado por el señor Silva en cuanto a la aprobación del tratado entre Chile y Estados Unidos para evitar la doble tributación, y aclaró que una de las razones y quizás la más importante, no es que no se tenga acceso a la información bancaria de los contribuyentes, sino que el servicio de rentas interno norteamericano y la política de ese país exige que la administración tributaria del Estado chileno tenga acceso a la información, siendo efectivo que hay también un componente político presente.

El **Honorable Senador señor Montes** agradeció todas las presentaciones, destacando que en democracia el debate es bienvenido porque ayuda a clarificar ideas y el sentido de las cosas.

Señaló que el proyecto que actualmente se discute tiene una preocupación fundamental que es la de evitar la evasión y deseó que ojalá ese fuera un desafío compartido en forma unánime, pero como lo planteó el señor Silva cada vez que se propone una iniciativa de este tipo se presentan múltiples dificultades.

Destacó que en la reforma del año 2014 se dieron pasos, se llenaron vacíos, pero claramente muchas cosas quedaron pendientes y algunas materias que tenían un sentido en el camino se fueron desnaturalizando y no hubo posibilidad de avanzar todo lo que se quería en la dirección que se buscaba.

Observó que es claro que frente a la evasión todos los estudios dicen que hay un elemento clave, que es la información, de tal manera que la evasión se enfrenta con información y dentro de eso es determinante la información bancaria, porque permite dar señales.

Sostuvo que lo que se propone a través de la iniciativa es que haya señales para que el Servicio de Impuestos Internos tenga acceso a los movimientos, a la magnitud de los mismos, la que puede variar de un mes a otro o de un año a otro y si con motivo de esa información se inicia un proceso de fiscalización se debe recurrir al artículo 62 del Código Tributario, como lo señaló el señor Silva.

Hizo presente que para enfrentar la evasión esta no es la única propuesta, pero es muy central, y respecto de las operaciones de 700 empresas chilenas que realizan operaciones en paraísos fiscales señaló que había una norma en la ley que obligaba a entregar una información mucho más expedita y directa al Servicio de Impuestos Internos, la que se eliminó y que con el proyecto se busca reponer.

Agregó que se ha incorporado la figura del denunciante anónimo en la Comisión para el Mercado Financiero y estimó que no habría razón alguna para que no exista en materia tributaria.

Respecto de lo señalado por el señor Ugarte en cuanto a que aplicar la norma anti elusión no puede requerir de autorización judicial, acotó que ello es parte de la dificultad para hacerla operativa y lograr los efectos que se quisiera.

En cuanto a lo planteado por el señor Silva acerca del levantamiento del secreto bancario para efectos tributarios, pero sólo para un objetivo específico y acotado a una persona, aclaró que, con el proyecto, no se ha planteado levantar el secreto bancario, precisamente porque no se quiso levantar un debate constitucional en esa materia, sino que se consideró legislar sobre la materia en plazos cortos, dada la situación que está viviendo el país.

Apuntó que durante mucho tiempo el país tuvo altos ingresos fiscales, pero que el de ahora es momento de restricciones y la evasión debe atacarse con decisión por muchas razones, dentro de las cuales está la necesidad de recursos.

Precisó que levantar el secreto bancario para efectos tributarios y para objetivos específicos es algo que existe de alguna forma y en ese sentido podría perfeccionarse la norma, si se quiere, pero es algo que existe hoy día, lo nuevo que trae consigo el proyecto radica en el hecho de tener un sistema de señales.

Respecto de lo que se señaló acerca de la masividad, observó que el argumento que se da en contra de los riesgos de afectar privacidad es un tema que debe enfrentarse y en ese sentido habrá que considerar medidas para que no se afecte la privacidad y fortalecer los mecanismos para que eso no ocurra.

Por otra parte, precisó que la masividad no es el total, no es universal, sino que se trata de todos aquellos sobre cierto nivel, y se han presentado indicaciones que tienen por objetivo diferenciar las personas de las empresas, por lo tanto, habría que estudiar si el riesgo de afectación es tan alto, porque si así fuese debiese evaluarse cuáles son los puntos y corregirlos.

En cuanto a la forma en que se entrega la información, estimó que el Servicio de Impuestos Internos ha dado un ejemplo desde hace ya varios años cuando se ve que hoy entrega las contabilidades pre hechas a muchas empresas, cuestión que no se pensó iba a ser posible debido a la cantidad de empresas e información, pero en tiempos de inteligencia artificial, obviamente se debe aplicar mecanismos más allá de lo jurídico y ver de qué manera se pueden vincular.

Agregó que con el nivel de desarrollo tecnológico existente no es posible que en Chile no se sepa cuántas empresas hay, qué producen, quiénes son los dueños y cuál es su situación en general, teniendo presente que a propósito de la pandemia que afecta al país no se sabe cuántas son las pymes y el conflicto que ha habido para poder determinar cuáles reciben apoyo público o no.

Consideró que la forma en que se entrega la información hay que dejarla sujeta a un reglamento y habrá que ir incorporando inteligencia artificial y tendrá que ir desarrollándose, entendiendo que el proyecto contempla que el Servicio de Impuestos Internos lo plantee.

Estimó importante guardar las grabaciones de las sesiones que la Comisión ha dedicado al análisis de la iniciativa en informe, porque es un tema que se está abriendo y hay un conjunto de posiciones que llevan a cambiar de una medida de información para enfrentar la evasión a discutir el secreto bancario.

Recalcó al señor Silva que no hay unanimidad, hay diferencias y eso está bien en democracia y ha habido dificultades para saber lo que realmente ocurre por parte del Servicio de Impuestos Internos debido a deficiencias institucionales, ya que, pese a ser una de las instituciones más avanzadas y modernas del país, le falta mucha tecnología, sobre todo en el departamento de grandes contribuyentes, y también normas que le permitan tener acceso a la información.

Manifestó que con lo que se ha dicho -y particularmente el señor Silva, quien es partidario de enfrentar a fondo el secreto bancario- podría ser una opción ir directamente en esa dirección, pero esa será una discusión que no se resolverá en la Comisión, sino que lo tendría que ver la Convención Constitucional.

Expresó que lo que se busca con el proyecto es avanzar con algo previo mucho más limitado, acotado, que considera se encuentra dentro de la normativa actual y que permite que el Servicio de Impuestos Internos se vaya preparando para un nuevo escenario que vendrá.

Por último, agradeció las intervenciones que plantean distintas inquietudes, pero en la dirección de avanzar en la materia, por existir conciencia de que tal como están las cosas no pueden seguir.

El **Honorable Senador señor Lagos** expresó que, como señaló el Senador Montes, el objetivo del proyecto no es generar un debate desde el punto de vista de lo que puede implicar, sin embargo, a medida que se han ido escuchando las distintas exposiciones y más allá de

haber sido autor del proyecto junto a los Senadores Montes y Pizarro, habrá que tener mucho cuidado y tal vez hacer una sintonía muy fina y acotada respecto de las indicaciones, y se manifestó abierto a esa posibilidad, sin perjuicio de defender el fondo del proyecto.

Precisó que se está tratando de avanzar hacia una institucionalidad distinta de la que existe hoy, que permita abordar la necesidad de contar con más recursos públicos sin tener que descansar solamente en elevar la carga tributaria.

Agregó que cuando se habla de evasión y elusión se persigue que aquellos que debieran legítimamente pagar la cuota que les corresponde al erario fiscal lo hagan, teniendo en cuenta que en todas partes se produce evasión y elusión; la pregunta que cabe hacerse es cómo poder ir evitando eso.

Hizo presente que la administración del Presidente Biden, en Estados Unidos, anunció hace cuatro meses un paquete tributario muy grande que debe ser aprobado por el congreso de ese país y junto con el paquete tributario anunciado está apoyando al servicio de impuestos internos norteamericano con una cifra de US\$80.000 millones en un lapso de 10 años, de manera que le va a suplementar a ese servicio -para perseguir la elusión y la evasión- el equivalente al presupuesto nacional chileno, lo que estiman les permitirá recaudar adicionalmente US\$800.000 millones.

Agregó que la gran mayoría de los países OCDE ya ha recorrido este camino y hoy día se discute sobre impuestos globales, el piso mínimo de tributación, dónde se van a pagar los impuestos de las empresas transnacionales, etc., de tal manera que el mundo se mueve en esa dirección.

Puntualizó que el proyecto puede requerir perfeccionamientos o acotar alguno de los temas señalados por los señores Ugarte y Silva, sobre todo aquel referido a abordar derechamente el secreto bancario o definir si se transitará por el camino que propone la iniciativa.

Observó que cuando estas discusiones se dilatan terminan estallando y pasarían a ser una materia de la Convención Constitucional, de manera que se llegaría a un extremo en que ciertas institucionalidades serían procesadas de una manera distinta y en un cuadro más complejo debido, por ejemplo, al atraso en el secreto bancario, al atraso en la carga tributaria, en la reforma de pensiones o a que no se dan los votos que se requieren porque no se genera el clima. Subrayó que el tema tributario va a ser crucial.

Añadió que hay que estudiar las exposiciones efectuadas, por cuanto pueden ayudar a clarificar muchos temas que se han discutido y solicitó más tiempo a fin de procesar lo que se ha planteado, incluyendo lo expuesto por el Gobierno y también por el Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, toda vez que no puede ocurrir que saliera de la Comisión un proyecto liviano, que no haga una diferencia, porque precisamente lo que se requiere es un proyecto que genere un cambio y que perjudicará a quienes no están pagando impuestos, pero es una obligación que deben cumplir.

El Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, señor Mena, manifestó que la banca se encuentra en la línea de combatir la evasión y asociado a eso aseveró que a su juicio la evasión se encuentra principalmente en el mundo de la informalidad, y que es por eso que la banca busca conocer a sus clientes, porque aquellos que son informales y que no tienen una relación entre sus ingresos y sus movimientos son los que se informan a la UAF, lo que tiene ya muchos años de operación, entendiendo que esa información le permite al Estado poder dirigirse en contra de aquellos que realizan evasión.

Añadió que la primera definición de la Asociación es conocer al cliente, en términos de saber qué giro tiene y cuáles son sus ingresos, lo que debe tener una relación con sus movimientos.

Asimismo, expuso que en estos años se ha creado toda una estructura en cuanto a que los bancos cumplan con aquellos acuerdos que el país tiene como, por ejemplo, la normativa FATCA que entrega un conjunto de información, de manera que los países que se relacionan con Chile y que tienen clientes en los bancos chilenos reciben permanentemente la información que se les entrega.

En lo que se refiere a cuál es la relación entre Estado y contribuyente, en cuanto a cuáles son los derechos de este último y cuáles son sus deberes, señaló que históricamente en Chile en esta relación ha habido participación del Poder Judicial, de hecho, apuntó, hay un control judicial cuando hay una investigación, de manera que la pregunta que cabe hacerse es, cuando ni siquiera hay una sospecha, si acaso no habrá ningún control judicial.

Explicó que su propuesta es que se busque una vía expedita para facilitar el acceso a la información, pero manteniendo algún resguardo respecto de los derechos que tiene también el contribuyente. Llamó la atención acerca de los efectos en cuanto a las implicancias sobre los clientes y sobre el esquema de operaciones financieras.

Por último, manifestó que ha habido argumentos expresados con mucha emocionalidad, en los cuales se puso intencionalidad

en sus palabras, descalificándole incluso al señalar que ha usado argumentos de economistas neoliberales y en ese sentido aclaró que no es ni economista ni neoliberal.

La **Honorable Senadora señora Rincón** expresó que concuerda en la necesidad de revisar la información entregada por los expositores y el señor Subsecretario de Hacienda. Puso de relieve que es fundamental avanzar en una legislación que permita terminar con prácticas que incumplen las obligaciones tributarias o que falsean y ocultan información con el objeto de no pagar impuesto.

El **Honorable Senador señor Montes** recalcó que se está tratando de avanzar en materia de evasión y que el proyecto en discusión es uno dentro de otras iniciativas que se presentarán y que obviamente se debe conjugar bien los derechos de las personas con la responsabilidad del Estado.

Añadió que hay muchos indicios que dan cuenta de situaciones que no están bien, y en esa materia destacó lo ocurrido entre la UAF y Carabineros, en que se habría iniciado una investigación, pero respecto de lo cual cabe preguntarse por qué no llegó desde los bancos correspondientes la información oportunamente a la UAF.

Asimismo, opinó, acerca del caso del ex Comandante en Jefe del Ejército, señor Fuente-Alba, cabe preguntarse cómo habiendo movido \$4.000 millones de distintas maneras esa información, que pareciera que circuló por los bancos, tampoco llegó a la UAF.

Hizo presente que eso debe perfeccionarse, porque está fallando y, de hecho, quien más valoró la iniciativa fue justamente el Director de la UAF, quien busca tener más fuentes de información.

Refirió que cuando se dice que si no hay sospecha no habría control judicial, se debe precisar que se trata de tener un sistema de señales para poder constituir las sospechas de otra manera cómo lo podría hacer el Servicio de Impuestos Internos, salvo que esté en una investigación determinada y es por eso también que se busca tener otras figuras como el denunciante anónimo, porque se sabe que en las operaciones en paraísos fiscales hay problemas y esto es algo que se prohíbe en Estado Unidos cuando en Chile no se prohíbe operar a través paraísos fiscales.

Reiteró que se trata de dar elementos para que el sistema pueda configurar sospechas y pueda definir investigaciones y fiscalizaciones, y ahí tendrá que pasar por todos procesos propios de una investigación del Servicio de Impuestos Internos.

Expresó que ojalá, luego de la caída en la economía que vendrá para el país en los años venideros, se puedan perfeccionar instituciones. Recordó que cuando se estableció el FUT nunca se vio todas las implicancias que tenía, lo que recién se hizo a partir del año 2014 a través de una reforma, y actualmente, sobre el tema de la evasión hay que poner mucha atención, porque es excesivo lo que ocurre a ese respecto, habiendo muchas fortunas que se van haciendo de una manera que la sociedad tiene la responsabilidad de controlar.

En **sesión de 30 de agosto de 2021**, la Comisión escuchó al **Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, señor Joaquín Cortez**, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Contexto: Objetivo

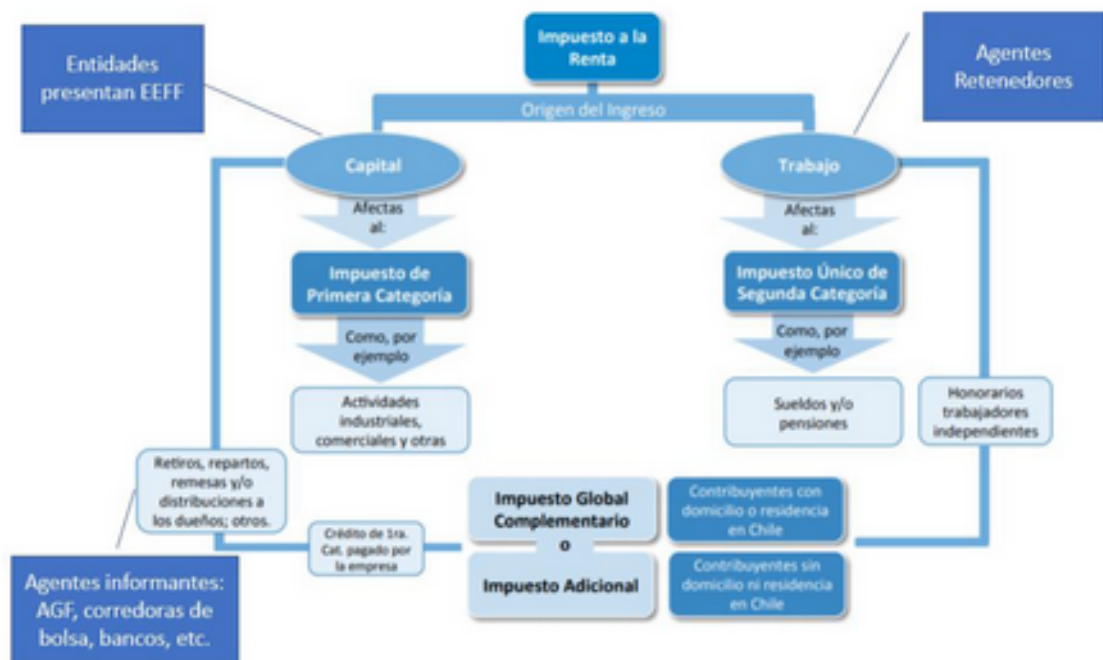
- Los agentes retenedores e informantes emiten certificados que avalan las rentas declaradas y sirven para tener un soporte al aprobar la propuesta de Declaración de Impuestos Anuales a la Renta o fundamentar los datos en caso de no utilizarla.

- Personas naturales o jurídicas con rentas al margen de la información aportada por agentes retenedores, informantes y EEFF, podrían declarar montos de rentas inferiores a lo realmente percibido.

- Las cuentas de depósitos no constituyen renta y, por lo tanto, los bancos e instituciones financieras fiscalizadas por la CMF o el Ministerio de Economía no las informan.

- Sin perjuicio de lo anterior, bancos y algunas otras instituciones financieras, sí informan la rentabilidad de depósitos al SII, en su rol de agentes informantes.

Proceso actual SII



Secreto bancario en la Ley General de Bancos

- El **art. 154 de la LGB** declara sujetos a secreto los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos, quienes sólo pueden dar a conocer antecedentes sobre ellos a su titular, a quien éste haya autorizado, o a quien lo represente legalmente. La infracción a la obligación de secreto tiene sanción penal.

- La justicia puede pedir información sobre operaciones sujetas a secreto o reserva en las causas que esté conociendo.

- Asimismo, la ley N° 19.913 permite, con autorización de un Ministro de Corte, levantar el secreto bancario para investigar operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento al terrorismo.

Experiencia internacional

Secreto bancario heterogéneo entre países.

- Existen países sin secreto bancario, como son Australia y Canadá; otros moderados, como USA y UK; otro con más restricciones como Chile; e incluso algunos con un grado mayor de secretismo, como, por ejemplo, Luxemburgo.

- De hecho existe un índice internacional de secreto bancario, que evalúa la cantidad y calidad de las leyes o regulaciones pertinentes:

1. La disponibilidad de información relevante.
2. El efectivo acceso a la información por parte de la autoridad.
3. Las consecuencias de violar el secreto bancario (multas/penas de prisión).



Fuente: Financial Secrecy Index realizado por la Tax Justice Network (Julio, 2020)

Impacto en Chile

El número de cuentas y personas (naturales + jurídicas) afectadas por el proyecto de ley sería bajo.

Cuentas/Personas	Cantidad	Abono \geq 1.500 UF's	Saldo \geq 1.500 UF's
Cuentas	49.373.802	3,2%	0,6%
Personas	17.437.836	8,2%	1,7%

Cuentas/Personas	Cantidad	Abono \geq 750 UF's	Saldo \geq 750 UF's
Cuentas	49.373.802	3,8%	1,3%
Personas	17.437.836	9,7%	3,7%

- Con un corte sobre UF 1.500 o 750, podrían ser reportados 1,5 o 1,7 MM de personas y 1,6 o 1,9 MM de cuentas, respectivamente.

Comentarios

1. Los organismos internacionales como el FMI y la OCDE, recomiendan avanzar en mejorar la entrega de información por parte de las Instituciones financieras a la autoridad tributaria para efectos de fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias.

2. Los bancos y otras instituciones financieras fiscalizadas por la CMF cuentan con sistemas de información que permitirían llevar a cabo la exigencia operacional a que se refiere el proyecto de ley.

3. Se sugiere realizar una descripción precisa de los productos que son objeto de reporte. Se sugiere utilizar terminología que se ajuste a las categorizaciones vigentes. Tales como las que define el Banco Central de Chile en su Compendio de Normas Financieras: Normas sobre la Captación e Intermediación (III.B.1), Cuentas a la Vista (III.B.1.1), Cuentas de Ahorro a Plazo (III.E.1), Cuentas de Ahorro la Vista (III.E.2), Cuentas de Ahorro a Plazo para la Vivienda (III.E.3), Cuentas de Ahorro a Plazo con giros Diferidos (III.E.4), Cuentas de Ahorro a Plazo para la Educación Superior (III.E.5). Además, Cuenta Única de Inversión (Seguros), Anualidades (Seguros) y Cuenta de Custodia (Depósito Central de Valores).

04) Es necesario precisar qué se entiende por institución financiera. En ese sentido, se sugiere precisar en el texto del Oproyecto de ley los sujetos obligados a reportar a partir de la definición de los productos o servicios financieros que se buscan o pretende que sean informados al SII. El proyecto de ley aborda tanto productos de inversión como de captación, así como la simple custodia.

5) Es conveniente establecer a nivel legal los datos que deberían ser proporcionados al SII: RUT o cédula del titular; tipo de producto; número identificación del producto; saldo y suma de abonos. Esto es necesario pues, por el secreto bancario (art. 14 de LGB), no se podría introducir estas definiciones a través de una norma.

El Honorable Senador señor García agradeció la presentación y planteó que, si bien se señala que se debe definir bien lo que se va a entender por institución financiera, también se habla de productos financieros. Preguntó si lo que sugiere la CMF es respecto de la institución financiera definida en la legislación o si la observación está referida a los productos financieros, como se señaló en la presentación.

El Honorable Senador señor Pizarro consultó también respecto de la definición de institución financiera y agregó que, atendido que el proyecto se circunscribe a las cuentas corrientes, se parte de la base de que cuando se habla de instituciones financieras se habla de

aquellas que tienen cuentas corrientes, que son los bancos y algunas otras entidades, de manera que para definir qué es institución financiera lo que determinaría ello sería la cuenta corriente que se busca que se informe.

El Honorable Senador señor Coloma destacó la sugerencia de orientar más exactamente el sentido de lo que se persigue con el proyecto, y añadió que la iniciativa no está radicada en cuentas corrientes, por lo que estimó especialmente útil tener claridad al respecto.

Hizo presente que se ha discutido básicamente si esto tiene que ver con el secreto bancario y se ha planteado, en general, que no, no obstante lo cual él estima que sí, porque al abordar esta iniciativa se aborda también lo referido al secreto bancario, de manera que solicitó una reflexión más amplia acerca de esa vinculación que existe o no entre el proyecto que se discute y las normas a las que hizo referencia el Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Cortez, en su presentación.

El Honorable Senador señor Lagos agradeció la presentación del señor Cortez, que consideró además específica, y le solicitó repetir las cifras que dio referidas a cuántas cuentas impactaría esta iniciativa, -que de acuerdo con lo expuesto serían una cifra total de aproximadamente 50 millones de cuentas corrientes- considerando el umbral que se propone en la moción de 1.500 UF, de manera que preguntó a qué porcentaje corresponde, porque al parecer sería relativamente bajo, a fin de tener una idea con las cifras que hoy se conocen.

El Honorable Senador señor Montes manifestó que era similar el efecto respecto de 1.500 UF y de 750 UF y que no se producían mayores cambios. Solicitó que el señor Cortez se refiriera a ese punto.

Asimismo, preguntó si cuenta con datos para diferenciar personas de empresas.

El **señor Cortez** respondió señalando que los números agrupan a personas naturales y jurídicas.

Agregó que personas con saldos de más de 1.500 UF representan el 1,7% y un 0,6% de las cuentas, mientras que en abonos superiores a 1.500 UF el número de cuentas sube un 3,2% y respecto de personas aumenta a 8,2%

El Honorable Senador señor Coloma consultó qué número de personas se verían afectadas por esta iniciativa.

El **señor Cortez** contestó que 1,5 millones de personas serían reportadas y aproximadamente 1,6 millones de cuentas.

El **señor Gaspar** explicó que las precisiones sugeridas apuntan a dos aspectos. Señaló que el informe de la Comisión respecto de la propuesta del artículo 85 bis alude, por una parte, a quiénes serían los obligados a reportar, refiriéndose a bancos e instituciones financieras, entendiéndose como tales las sujetas a la fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Indicó que el comentario apunta precisamente a que no hay actualmente en la legislación un concepto de institución financiera, no obstante, hubo un concepto antiguamente en la ley general de bancos y sociedades financieras, pero, no existe uno claro y unívoco respecto de qué se entiende por institución financiera, y por ello se recomienda precisar cuáles serían los entes fiscalizados, para evitar cualquier duda acerca de esta obligación que se está incorporando.

En cuanto a la vinculación de los productos financieros, hizo presente que, al revisar el texto que está en el informe de la Comisión, se observa un concepto no solamente exclusivo a las cuentas corrientes, sino que a varios productos que se denominan como cuentas financieras, aludiendo a cuentas de depósitos, de custodia, contratos de seguro con o sin valor de rescate, contratos de anualidades, etc., y luego trata de explicar este proyecto cuáles son estas cuentas financieras referidas.

Precisó que, por consistencia, se sugiere aludir a los productos incorporados por la normativa del Banco Central, que son precisamente los productos que se entiende son de interés para este proyecto de ley, más que la noción de cuentas financieras, cuentas de depósitos o cuentas de custodia, que son conceptos que pueden prestarse a confusión y por lo mismo se recomienda, en cuanto a los productos, unirlos a los conceptos que señaló el Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero.

En respuesta a lo planteado por el Senador Coloma explicó que, efectivamente, la cuenta corriente es un producto exclusivo de un banco, es por antonomasia el producto que define a un banco como tal, pero los otros productos, como bien señala el proyecto, pueden ser ofrecidos por otras entidades y por ello la sugerencia de precisar cuáles son las entidades fiscalizadas para que no quede un concepto que actualmente no está definido en la legislación, y también cuáles son los productos conforme a la regulación pertinente que, de acuerdo a lo que se señaló, es la normativa del Banco Central.

Finalmente, en lo referido a la vinculación con el secreto bancario regulado actualmente en la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques y también en el artículo 154 de la ley general de bancos, que se refiere a cuáles son las operaciones que están afectas al secreto bancario, explicó que se alude a operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciben los bancos en virtud de esta ley.

Observó que, por la extensión, la ley general de bancos se refiere no solamente a los depósitos en cuentas corrientes, sino que a depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciba un banco. Entonces, como el proyecto de ley apunta a tener acceso a la información, en las condiciones que se establece en esta iniciativa, de distintos productos que pueden ofrecer los bancos, es esta vinculación con esta excepción la que genera la necesidad de que la información que se proporcione esté expresamente definida en la ley, para que así pueda ser realmente una excepción a la prohibición contenida en el artículo 154 de la ley general de bancos.

El Honorable Senador señor Montes solicitó a los representantes de la CMF colaboración con la Comisión en precisar los términos, atendido que ello puede servir para hacerlos más rigurosos.

El Subsecretario de Hacienda, señor Weber, señaló que la presentación de la CMF fue muy ilustrativa de algunas de las cuestiones que había presentado el Ejecutivo como preocupaciones respecto del proyecto.

Añadió que la mirada del Ejecutivo es un tanto distinta respecto de los contenidos centrales de la moción. Hizo presente que cuando se mira la legislación chilena y las recomendaciones internacionales, como por ejemplo del foro global de la OCDE, se señala que los países pueden avanzar respecto de las instituciones fiscalizadoras como el Servicio de Impuestos Internos, a efectos de que pueda acceder a la información de titulares de cuentas sin, necesariamente, la autorización de ese titular, pero ello como una acción activa de la institución fiscalizadora y no por defecto acceder en forma automática a la información de aquellas personas que tengan cuentas con saldos sobre cierto monto hacia arriba.

Destacó que al mirar la información que entrega la Comisión para el Mercado Financiero se habla de una cantidad importante de personas que va entre 1,4 y 1,7 millones, y en ese sentido lo que ha hecho el Ejecutivo en sus indicaciones es poner de manifiesto de una u otra manera que se está discutiendo sobre el secreto bancario y así queda implícita e incluso explícitamente en la presentación de la CMF, y por tanto al Ejecutivo le preocupa la protección de la privacidad y que se lleve a cabo el debido proceso.

Agrego que, debido a ello, en las indicaciones propuestas por el Ejecutivo se establecen mecanismos expeditos para que el Servicio pueda acceder a la información de los cuentacorrentistas.

Hizo presente que comparte las observaciones de la CMF respecto de la precisión de algunos términos, como por ejemplo el de institución financiera, a fin de evitar cualquier malentendido.

Observó que la opinión del Ejecutivo sobre esta iniciativa es distinta de aquello que está presentado y que sus indicaciones buscan, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos esté obligado a requerir autorización judicial en caso de la negativa del titular de entregar información; además se busca disminuir los plazos del procedimiento de autorización judicial, se establece una etapa probatoria excepcional y expedita y se agiliza la tramitación del recurso de apelación.

Observó que respecto de la discusión de la sesión anterior entendió que fue de carácter macro, respecto del diseño de política pública, sin perjuicio de cualquier precisión que se requiera y recalcó que la mirada del Ejecutivo respecto al proyecto es distinta del espíritu que está señalado en la moción, no obstante expresó su disposición a seguir discutiendo sobre la materia, manifestando su voluntad en cuanto a que los organismos fiscalizadores accedan a mejor información y que pueda abordarse el tema de fondo.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que entiende que el Ejecutivo no comparte la mirada del proyecto y que una de sus indicaciones va en la línea de solicitar la resolución o la autorización judicial previa. Preguntó, respecto del monto que está establecido para la información, si el Ejecutivo tiene alguna opinión respecto de la cifra de las 1.500 UF y si piensa que dicha cifra se debe disminuir o aumentar.

El señor Subsecretario respondió señalando que para el Ejecutivo esto no dice relación con los montos, sino que tiene que ver con el procedimiento para acceder a la información, por cuanto el Servicio de Impuestos Internos tiene que hacer una gestión activa para poder acceder a la información de las personas dueñas de estos datos.

El Honorable Senador señor García planteó que el esquema del proyecto de ley presentado por los senadores Lagos, Montes y Pizarro establece que las instituciones financieras informen al Servicio de Impuestos Internos en el marco de estos saldos de 1.500 UF anuales.

Añadió que, en el esquema de las indicaciones del Ejecutivo, entiende que el Servicio de Impuestos Internos le solicita al contribuyente acceso a sus cuentas corrientes y si el contribuyente niega el

acceso entonces el Servicio tiene que recurrir a tribunales y ello deberá hacerse en la forma y en los plazos que se proponen en la indicación. Pidió que eso se explicase con mayor detalle.

Recordó que uno de los expositores invitados durante la discusión en general de este proyecto sugirió que no se operara con una especie de barrido, sino que se analizara el tema caso a caso, cuando el Servicio esté necesitando la información o cuando tiene sospechas de situaciones irregulares, etc.

Consideró razonable esa sugerencia y solicitó pudiera precisarse cómo es el esquema de las indicaciones que está presentando el Ejecutivo.

Sostuvo que, a su entender, los esquemas son distintos, por una parte, en la moción se habla de que todos los saldos y movimientos en el marco de los montos ya mencionados deben ser informados al Servicio de Impuestos Internos.

Por otra parte, señaló que entiende que en el esquema de las indicaciones del Ejecutivo sería el Servicio el que le pide al contribuyente que entregue los datos, ya sea porque lo está auditando o lo está fiscalizando, porque tiene dudas, porque hay inconsistencias, etc., de manera que ya no sería para todos los casos sino que respecto de aquellas situaciones que el Servicio está fiscalizando y si el contribuyente se niega el Servicio tiene que recurrir a tribunales, por lo que su pregunta apunta a entender si ese es el esquema.

El Honorable Senador señor Montes se refirió a lo señalado por el Subsecretario de Hacienda y por el Senador García, expresando que la propuesta del Ejecutivo es lo que hoy día existe en la ley, por cuanto si el Servicio de Impuestos Internos quiere investigar debe solicitar la información al titular de la cuenta y si éste no responde, deberá hacerlo a través de tribunales.

Agregó que lo que está tratando de hacer el Ejecutivo es disminuir los plazos, teniendo en cuenta que esto a veces demora 3 o 4 meses o incluso más, sin embargo, ese no es el tema de este proyecto porque con ese esquema esta iniciativa no tendría sentido.

Puso de relieve que lo que se busca es que el Servicio de Impuestos Internos tenga información que le permita discernir dónde debe trabajar más, es decir, del conjunto de datos, aquellos que le generen dudas o inquietudes y que lo lleven a investigar determinadas realidades que no coincidan con los datos que tiene, de manera que teniendo toda esa información, del millón y medio de cuentas que se mencionó y contando con un procedimiento a través de la tecnología existente para

procesar información, va a poder determinar donde hay que preocuparse más y recién ahí viene la etapa a la que se refirió el Subsecretario de Hacienda del debido proceso.

Resaltó que el proceso se inicia una vez detectada la información, una vez fijados los problemas en la información y recién ahí se aplican las normas generales del Servicio de Impuestos Internos.

Hizo presente que la información de la cual se está hablando es información general, global y no de las operaciones mismas, por tanto, si el Servicio tiene dudas a partir de los datos que provea esta ley recién ahí podrá decidir iniciar una investigación y solicitará información específica sobre cada una de las operaciones y si el titular no entrega dicha información deberá obtenerla a través de un juez u otro procedimiento.

Debido a lo anterior, señaló que el proyecto no dice relación con el debido proceso, porque no hay proceso, sino que solamente hay antecedentes para que el Servicio pueda discernir o evaluar.

Se refirió a la entrevista aparecida en un medio de comunicación de una vocera de la OCDE, quien habría señalado que esta obligación debiera existir toda vez que Chile es un país que tiene muy poca información de esta naturaleza en el sistema, y ella plantea que esto existe en muchos países y que es muy necesario para el Servicio de Impuestos Internos poder tomar decisiones a partir de señales más claras.

El Honorable Senador señor Coloma refirió que el objetivo del proyecto nace de la lógica de evitar evasión, eso es lo que plantea en su orientación, y básicamente parte de un elemento que consiste en que hay determinada información que puede ser relevante para el Servicio de Impuestos Internos y que es complejo o engorroso poder obtener.

Expresó que ese primer problema, a su juicio, quedó desvirtuado por varios expositores anteriores que plantearon que los tribunales nunca habían rechazado una solicitud del Servicio sobre esa materia, lo que es la mejor garantía de que hay un sistema que funciona.

Añadió que lo que hace el Ejecutivo es entender que, si el problema es la preocupación por una eventual lentitud, entonces se pretende acelerar el proceso, de manera de otorgar plazos más breves y que pueda funcionar de mejor manera.

Indicó que los mocionantes plantean un elemento nuevo, diferente, en orden a extenderlo a todas las cuentas corrientes y

apuntó que de acuerdo a las cifras entregadas por el Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, quien mencionó una cifra de un millón y medio de cuentas corrientes a informar, parece razonable el planteamiento del Ejecutivo que va al tema de fondo, por cuanto hace más ágil el acceso a la información sin construir un sistema en el cual habrá que informar un millón y medio, toda vez que procesar esa cantidad es de una complejidad muy grande.

Estimó pertinente lo que hace el Ejecutivo, que es resolver de una manera distinta un problema que, si bien no resulta plenamente compartido por la experiencia práctica, sí podría generar una facilitación respecto de lo que finalmente el proyecto busca y por ello consideró relevante el análisis de la información, datos y de los tamaños relativos, considerando la magnitud de la que se está hablando y desconociendo también la cantidad de cuentas corrientes que existe y por eso consideró importante mejorar los plazos que planteó el Ejecutivo respecto de la eventual evasión que puede ocurrir, considerando además que hasta ahora no ha habido problemas de negativas por parte de los tribunales.

El **Honorable Senador señor Lagos** dijo entender el argumento referido a que un millón y medio de cuentas corrientes que serían informadas con movimientos puede generar un tema, pero observó que eso ya está ocurriendo, toda vez que hoy día Chile tiene compromisos para informar afuera a otras jurisdicciones internacionales y seguramente otros países están haciendo lo mismo, de manera que los servicios de impuestos internos de distintos lugares están recibiendo un número significativo de información, toda vez que no es solamente la información que Chile envía al extranjero sino las que otros países también envían a otros miembros de la OCDE.

Puntualizó que una cosa es cómo se procesa esa información, lo que puede ser complejo y habrá que definir cuál será el criterio del Servicio de Impuestos Internos, pero que el hecho de que se trate de un millón y medio no es óbice para poder avanzar en esta materia.

El **Honorable Senador señor Montes** reiteró lo señalado por el Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero acerca de que el sistema se encuentra en condiciones de hacerlo y aclaró que el Servicio de Impuestos Internos hace ya muchos años que maneja todas las operaciones de compra venta y las adjudica a distintos contribuyentes y les hace un pre balance o pre contabilidad, de manera tal que se tiene un sistema con ese nivel de capacidad que es de mucho más que 1,7 millones operaciones que tiene que ordenar y procesar.

Destacó que el Servicio tiene los sistemas para operar de esa manera, por lo tanto, el objetivo que se persigue se podría cumplir.

La Coordinadora de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda, señora Suazo, hizo algunas aclaraciones en relación con las preguntas formuladas, señalando en primer lugar, que efectivamente Chile como país miembro de la OCDE y miembro del foro global, desde el año 2018 se encuentra adscrito al sistema de intercambio automático de información respecto de cuentas financieras de no residentes, es decir, desde el año 2018 las instituciones financieras le entregan información al Servicio de Impuestos Internos respecto de residentes en el exterior y el Servicio la comparte con las jurisdicciones de residencia de esos contribuyentes.

De la misma forma, señaló, en Chile se recibe la información de las cuentas financieras por parte de las autoridades tributarias extranjeras de los residentes en Chile que tienen cuentas en el exterior.

Indicó que lo anterior responde a un estándar internacional que se ha trabajado durante los tres últimos años en la OCDE y en el foro global y Chile ha sido uno de los primeros países de la región en implementarlo y añadió que ahora el gran desafío que se enfrenta junto a otros países -incluso desarrollados- es cómo el Servicio de Impuestos Internos puede hacer un uso óptimo de esa información para que el fin de mejorar la recaudación y la fiscalización efectivamente se cumpla con el uso de esta información masiva que se recibe y que se entrega.

La moción que se ha presentado lo que hace es replicar de alguna manera este modelo, pero para fines domésticos, y la visión del Ejecutivo es que existe un diagnóstico en que para efectos de fiscalización, de mejorar la recaudación y para combatir la elusión y la evasión tributaria, se puede mejorar el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria, pero en aquellos casos en que exista una investigación, en que existan indicios de incumplimientos tributarios que justifiquen la violación de la privacidad y de los datos personales de los contribuyentes.

Observó que no solamente el señor Subsecretario, sino que otros expositores, al momento de estudiar la moción, dieron cuenta que sólo en cuatro oportunidades, desde el año 2010, el Servicio ha solicitado al tribunal tributario y aduanero el acceso a la información financiera de contribuyentes que se han negado a entregarla y frente a eso fue que se construyó la indicación del Ejecutivo, que en lo sustantivo obliga al Servicio de Impuestos Internos a continuar con el procedimiento de requerir la información en aquellos casos en que haya

negativa del titular, además de hacer el procedimiento lo más expedito posible.

Adicionalmente, puntualizó, respecto del estándar internacional denominado estándar común de reporte, CRS por su sigla en inglés, y que Chile cumple desde el año 2018, que ha sido evaluado como *large compliance*, lo que significa que el país se encuentra en su penúltimo escalón para poder cumplir totalmente y ser absolutamente *compliance*, de manera que Chile se encuentra muy bien evaluado.

Destacó que la recomendación es precisamente que Chile puede dar un paso en términos de mejorar el acceso de la autoridad tributaria a la información financiera, estableciendo una causal excepcional que hoy día no existe, de tal manera que la autoridad tributaria pueda acceder a la información sin notificar al titular en dos casos, siendo uno de ellos que exista una urgencia suprema y el otro que existan indicios que hagan pensar que el hecho de notificar al titular podría frustrar la investigación, sin embargo ello implicaría modificaciones al artículo 62 del Código Tributario y la moción que se propone en este caso no solucionaría esas recomendaciones que el Ejecutivo espera poder cumplir.

El Honorable Senador señor Montes manifestó que luego de oír a la señora Suazo, echó de menos una dimensión de la reflexión, que es la referida a la evasión, toda vez que el estudio de Michel Jorratt señala que hay US\$22.000 millones que de una u otra manera no pagan el impuesto que corresponde.

Añadió que lo que se está buscando es que el sistema tenga más información para, a partir de eso, recién empezar a definir qué se va a investigar más a fondo por cuanto esto no es para investigar, sino que es un sistema de señales para el Servicio de Impuestos Internos, que le permitan tomar decisiones de cómo jerarquizar o priorizar qué hacer.

Manifestó su preocupación porque, a pesar de que hubo un acuerdo escrito y firmado en el año 2020 con el Ministro de Hacienda de esa época, en que se pidió se hiciera una investigación sobre exenciones y evasión, lo que luego un equipo chileno ratificó, aún no hay un proyecto sobre revisión y eliminación de exenciones tributarias.

Expresó que el problema de la evasión es mucho más grave que aquello que ocurre en torno a las exenciones.

Finalmente, reiteró que el proyecto no busca simplemente proveer de información, sino que tener mejores señales para actuar, porque de una u otra manera existe un exceso de evasión.

El **Honorable Senador señor Coloma** señaló que se parte de la base del estudio del señor Jorratt, que algunos pueden compartir y otros no, precisando que a su juicio sus resultados no fueron evidenciados en la realidad una vez que lo hizo en esta misma Comisión.

Agregó que lo señalado por la señora Suazo genera algo bien importante respecto de cuál es el verdadero sentido de las recomendaciones de la OCDE, porque algunos hacen parecer que Chile estuviera en el cadalso, cuando el sentido de las recomendaciones va en una lógica diferente, de manera que pareciera que se está tratando de legislar en base a un informe que da cuenta de una realidad que es completamente controvertida, a partir de datos internacionales, que tampoco son los mismos pero que pueden coexistir.

Hizo presente que no quiere decir que no sea interesante la discusión, pero llamó a tener una mente abierta hacia otros estudios que pueden no coincidir y también respecto de lo que realmente plantea la OCDE.

El **Honorable Senador señor Lagos** manifestó aceptar que haya quienes no estén de acuerdo con las recomendaciones que propone el estudio del señor Jorratt pero, asimismo, solicitó pudiera mostrarse otro estudio que indique que la evasión no existe en Chile o que es muy baja.

Añadió que parece que en Chile hay evasión y elusión y en ese sentido deberá avanzarse en legislación y normas que permitan reducir aquello, y al observar la experiencia internacional en otras jurisdicciones se aprecia que la legislación en esos países le da más atribuciones a los servicios fiscalizadores que proveen de mayor información que la que provee Chile, y esto ocurre tanto a nivel de países desarrollados como de países emergentes, puesto que no todos son iguales, pero el grueso de los países de la OCDE tiene eliminado el secreto bancario, además cuentan con mayor información, el servicio de impuestos internos en países como Estados Unidos tiene mucho poder, y ahora se le está entregando más atribuciones y se le están aumentando los recursos, porque ahí hay una fuente de evasión y de elusión que al final del día se traduce en no poder financiar bienes públicos.

Por lo tanto, reiteró que puede discutirse si el estudio de Jorratt es el mejor o no, pero sería bueno que alguien pusiera otro sobre la mesa a fin de conocer otras estimaciones, a menos que se piense que no se requiere.

Señaló que existe la necesidad de contar con una legislación y ese es el aporte que se ha hecho con la moción e invitó a leer la entrevista realizada a la vocera del equipo de transparencia en estas

materias de la OCDE, en que todo apunta a ir reduciendo el grado de discrecionalidad y a dar más información y transparencia, que es lo que se busca con este proyecto.

El **señor Guerrero** se refirió a lo señalado por el Ejecutivo en base al estándar de información y a propósito de la entrevista que dio la encargada del foro global, recordó que fue parte del proceso, en el Ministerio de Hacienda, cuando se implementó este estándar de intercambio automático de información financiera con el resto de los países y cuando se aprobó el proyecto de ley que lo permite y que hoy día lo habilita en el Código Tributario. En esa ocasión se dio esta discusión y no hubo problemas en su implementación.

Destacó que lo que busca la moción en estudio es replicar este estándar respecto de los residentes locales, entendiendo que el problema de la elusión y la evasión hoy es importante en el país y que se busca dotar a la administración tributaria de facultades que existen en prácticamente la gran mayoría de los países del mundo y no solamente de la OCDE.

Puntualizó que, en Latinoamérica, países como Argentina, Brasil, Ecuador, México, Uruguay y Perú tienen estos estándares y están intercambiando información con las autoridades tributarias de manera automática y en ese sentido no se busca violar de ninguna forma el secreto bancario.

Observó que, como señaló el Senador Montes en su intervención, el Servicio de Impuestos Internos va a recibir la información y posteriormente tendrá que realizar cruces de esa información, que no es una información sujeta al secreto bancario, porque no permite conocer los movimientos de las cuentas corrientes, no permite conocer la intimidad del individuo, sino que el Servicio va a recibir un número que tendrá que cruzar con la declaración de renta del contribuyente y de la misma forma como describió la señora Suazo, en que hoy se recibe esa información a nivel internacional, al Servicio se levanta una alerta y puede iniciar los procesos de fiscalización y eso es todo lo que busca la moción, en términos de avanzar y estar al día con un estándar mínimo a nivel internacional y que ya fue aprobado con anterioridad por el Congreso Nacional a propósito de no residentes en el país.

La **señora Suazo** manifestó estar de acuerdo con lo señalado por el señor Guerrero respecto al estándar internacional, sin perjuicio de que resulta importante aclarar que este estándar internacional Chile lo cumple, atendido que se encuentra adscrito y es regularmente evaluado.

Añadió que existen otros países en que la autoridad tributaria cuenta con más fácil acceso a la información financiera de los contribuyentes y que el Ejecutivo comparte ese diagnóstico y por ello está proponiendo mejorar el acceso a esa información.

Puntualizó que lo que no existe en los países OCDE ni en los países del foro global es un estándar internacional que Chile tenga que seguir o que pueda seguirse en cuanto a que esa entrega automática de información se implemente domésticamente, por cuanto ello es una innovación y una creación de la moción y no es un estándar internacional, no hay ninguna recomendación al respecto.

Manifestó tener la disposición para mejorar la fiscalización para reducir la elusión y la evasión, sin perjuicio de estimar que son otras las herramientas que tiene el Servicio de Impuestos Internos que pueden mejorarse, pero no es recomendable replicar la entrega de información que es un estándar internacional para contribuyentes no residentes a contribuyentes domésticos, porque el espíritu de esa normativa se basa en que son contribuyentes no residentes, por tanto la autoridad tributaria no tiene visibilidad de las inversiones que tiene alrededor del mundo y por eso el foro global creó ese estándar, pero no con la intención de que se implemente domésticamente por los países.

El Honorable Senador señor Lagos señaló que en la OCDE cuando hay recomendaciones en general son recomendaciones que se adoptan a partir de un consenso alcanzado en torno a ellas y cuando no se llega a esos consensos no se transforman en lineamientos. Los criterios se van estableciendo a medida que se logran consensos entre los miembros, de esta manera van surgiendo mayores grados de exigibilidad y de compartir ciertas políticas.

Manifestó que entendiendo lo expresado por la señora Suazo en cuanto a que no hay una norma específica en la OCDE que establezca lo que se propone a través de la moción, al margen de lo que la OCDE recomiende como las mejores prácticas o como la necesidad de hacer algo, sí se observa que los miembros de la OCDE individualmente considerados tienen estándares domésticos mucho más exigentes que los chilenos y con más atribuciones en los servicios de impuestos internos.

Por lo tanto, indicó que su punto no es que la OCDE obligue a contar con ciertos estándares, sino que cuando se observa lo que hace la mayoría de los miembros en su legislación nacional y se agrega lo que se trata de empujar desde la OCDE, más allá de existir o no consenso, eso permite saber dónde se ubica Chile a ese respecto.

El Honorable Senador señor Montes consideró que debiera concordarse que el tema de la evasión es un problema nacional

importante y que hay que buscar soluciones y es por ello que estima que la señora Suazo no le dio la jerarquía que tiene el tema de la evasión.

Manifestó que tal vez debiera acordarse por ley un mandato para que en 3 o 4 meses el Ministerio de Hacienda haga un estudio sobre evasión, especialmente de impuesto a la renta, porque de compraventa e impuestos indirectos se tiene, pero respecto de impuesto a la renta se han planteado distintas ecuaciones que ha usado el señor Jorratt para ver la relación entre las transacciones y el impuesto a la renta y de ahí surgen un conjunto de hipótesis ligados a cuentas nacionales.

En cuanto a qué hacer con la evasión, sería importante tener un acuerdo, porque la moción propone una medida que ayuda, que es básica para contar con más antecedentes para poder definir el plan de fiscalización que fue lo señalado por el Director del Servicio de Impuestos Internos en sesiones anteriores

Puso de relieve lo expuesto por el Director de la UAF, quien planteó que lo propuesto en el proyecto es necesario, y la Comisión para el Mercado Financiero, que indicó que es posible hacerlo y propuso precisar algunos términos, por lo que le cuesta entender el razonamiento del Ejecutivo y por ello solicitó se dijera qué otras alternativas se proponen para enfrentar la evasión además de esta.

Manifestó que se ha planteado la figura del denunciante anónimo, con objeto de extenderlo desde el mercado de valores a los temas tributarios y también se ha propuesto que la norma anti elusión se puede aplicar sin tener que recurrir a la autorización de los tribunales, porque eso es lo que permite que funcione rápido, por cuanto no hay que esperar la decisión de un juez.

Adicionalmente señaló que Chile tiene 700 empresas operando hoy en día a través de paraísos tributarios y debieran buscarse mecanismos para poder saber lo que está ocurriendo.

Consideró extraño que frente a una duda el Servicio de Impuestos Internos tenga que preguntarle al titular si puede investigarlo, atendido que la autoridad debiera tener instrumentos para poder reaccionar oportunamente y de manera expedita.

Hizo presente que este proyecto es modesto y moderado toda vez que simplemente permite al Servicio contar con cierta información que puede manejar y a partir de eso determinar qué hacer y qué casos debe investigar y fiscalizar.

Recalcó que el tema de fondo es qué se piensa de la evasión y cómo enfrentarla.

El Honorable Senador señor Coloma manifestó que obviamente la evasión es un problema severo y se ha buscado durante muchos años a través de distintos instrumentos, mecanismos y formas reducirla lo más posible y si bien no todos ellos han resultado exitosos e incluso algunas medidas han generado incentivos errados o burocracias complejas, otros sí han sido bastante positivos, como la boleta electrónica, que generó una formalización impensadamente alta. Acotó que, sin embargo, otras medidas que se pensó podrían haber ayudado resultaron ser desincentivadoras de inversión y eso es complejo.

Agregó que el tema no es quién está a favor de la evasión o en contra de ella, sino que, desde su perspectiva, existe una vinculación del proyecto con la afectación del secreto bancario.

Enfatizó que respecto a cómo hacer funcionar el sistema en forma adecuada sin colocar un nivel de cortapisas que haga imposible trabajar en un país, debiera buscarse un justo equilibrio de no llenar de burocracia el sistema.

Observó que el estudio de Jorratt parte de un supuesto que a su juicio es, a lo menos, discutible, respecto de la cantidad de recursos por concepto de evasión, que no ha sido ratificado por otro estudio y sí ha sido contradicho por otras personas, agregando que además enfrenta un problema de una forma que no es de la naturaleza del problema que se plantea, porque si los tribunales rechazaran constantemente las solicitudes del Servicio de Impuestos Internos se entendería, pero ha quedado claro que no ha sido el obstáculo de fondo.

Puso de relieve que la recomendación de la OCDE referida a compartir la información con el resto del mundo tenía por finalidad saber dónde estaban globalmente los activos y no como una política pública, de manera que señalar que ya que se aprobó y que por lo tanto debe aplicarse en la legislación interna no le parece, porque no fue ese el sentido con que se planteó por parte del Ejecutivo en su momento y tampoco fue lo que decía el proyecto cuando tuvo que aprobarse, porque se entendió que eso superaba otra dificultad que era la falta de información mutua en materia internacional que podía haber respecto de determinadas situaciones, por lo que decir que eso entonces tiene que aplicarse internamente donde hay otro nivel de información teniendo en cuenta que el Servicio de Impuestos Internos es un ente robusto, destacando que en esta Comisión se ha optado por unanimidad la política de un mayor robustecimiento del Servicio, tanto en materia de funcionarios, de atribuciones, etc.

Debido a lo anterior es perfectamente legítimo decir que la naturaleza del problema no se ajusta a la naturaleza de la decisión y a las referencias que se usan para fundamentarlas y en ese

sentido planteó que puede ser mejor facilitar al organismo para que en materia de plazos estos pueden hacerse mucho más breves y ese es el tema de fondo.

Manifestó que es de su interés que el país funcione lo mejor posible y con los mecanismos más adecuados para poder enfrentar las vulneraciones, cosa que se ha hecho con bastante fuerza y energía en el transcurso de los años.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que si bien el debate resulta atractivo e interesante, tenía entendido que la citación a la sesión era para conocer las indicaciones y tratar de avanzar con el proyecto, el cual tiene un objetivo acotado que busca dar mayor facilidad al servicio para acceder a información sin alterar el secreto bancario.

En **sesión de 6 de septiembre de 2021**, la **Comisión para el Mercado Financiero, CMF**, hizo llegar una propuesta de redacción del siguiente tenor:

“PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Incorpórase en el Decreto Ley N° 830, de 1974 un artículo 85 bis nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 85 bis. Las entidades financieras señaladas en este artículo, deberán proporcionar al Servicio información sobre los saldos de productos o instrumentos de captación, inversión o servicio de custodia que se indican a continuación, así como las sumas de abonos que mantengan sus titulares que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile o se hayan constituido o establecido en el país.

Para los efectos de este artículo se entiende por:

a) Entidades financieras.

Estarán obligadas a reportar los Bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito sujetos a la fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, y las Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

También deberán reportar las compañías de seguro y las entidades privadas de depósito y custodia de valores.

b) Producto.

La información requerida corresponde a los siguientes productos o instrumentos: cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósito a la vista o vales vista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista, cuentas de ahorro a plazo para la vivienda, cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos, y cuentas de ahorro a plazo para la Educación Superior reguladas por el Banco Central de Chile conforme al artículo 35 N°1 de su ley orgánica.

Además, se entienden incluidas las cuentas de custodia reguladas en la Ley N°18.876 que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores.

También deberá reportarse información respecto de los contratos de seguros con cuenta de inversión o ahorro, o valor de rescate, o que garanticen un capital al término de un plazo, además de contratos de rentas privadas, ya sean vitalicias o temporales.

c) Estado de vigencia del producto

Deberá consignarse la vigencia del producto o instrumento reportado. En caso de que el producto o instrumento no esté vigente, deberá informarse además la fecha de cierre de este.

d) Identificación del titular.

Se entregará el rol único tributario (RUT) del titular que sea contribuyente persona natural, jurídica, patrimonios de afectación u otras entidades que tengan domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país. Tratándose de un producto suscrito por dos o más personas o entidades, se considerará como titulares a todas aquellos registradas o identificadas como tales por la entidad financiera. En este último caso, se repetirá la información reportada tantas veces como titulares tenga el producto.

e) Periodo de reporte

El informe deberá contener el mes y año calendario al que está referida la información reportada.

f) Monto reportado

El monto reportado incluirá saldos, valor, prima y sumas de abonos que corresponda según el producto informado.

Por abono se entenderá la totalidad de transferencias, pagos o cualquier otra cantidad en favor del titular,

independientemente de quién lo haya efectuado. Por saldo, se entenderá el valor o situación final de la cuenta al cierre de cada día, una vez efectuados los cargos y abonos.

El monto reportado, se informará en pesos chilenos y corresponderá a un único valor por cada producto del titular en cada periodo que se reporte.

g) Información a reportar

Las entidades financieras deberán realizar un reporte que contenga la siguiente información: identificación de la entidad financiera, identificación del titular, periodo de reporte, el producto, número de registro interno del producto, monto, estado de vigencia del producto, y fecha de cierre del producto, cuando corresponda. Esta información deberá ser proporcionada por la entidad financiera para todos los productos de un mismo titular, cuyo saldo agregado, para algún día del periodo reportado, o abonos mensuales, asociado al mismo periodo, sea igual o superior a 1.500 Unidades de Fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan.

El límite de 1.500 Unidades de Fomento se debe determinar según el valor de ésta para el último día del periodo que se informa. Los montos que se encuentren expresados en dólares de los Estados Unidos de América, o en otra moneda distinta del peso chileno o pactada en un índice de reajustabilidad, se deberá realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, publicado el último día hábil del periodo reportado, o del índice de reajustabilidad en su caso.

h) Plazo de entrega de la información.

La información que da cuenta este artículo deberá ser remitida al Servicio de manera anual, a más tardar dentro de los 15 primeros días del mes de marzo de cada año, respecto de los montos asociados al año calendario anterior.

i) Obligaciones del Servicio.

La información a la que accederá el Servicio, con motivo de lo dispuesto en este artículo, tendrá el carácter de secreto o reservada, según el caso, conforme las reglas establecidas en los artículos 35 y 206, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 154 de la ley general de bancos, y no podrá ser divulgada en forma alguna, pudiendo ser utilizada únicamente para cumplir con los objetivos de fiscalización que le son propios.

j) Sanciones.

El incumplimiento de entregar la información al Servicio de manera oportuna y completa por parte de una entidad financiera, será sancionado con una multa equivalente a 1 unidad tributaria anual por cada titular respecto de los cuales se infrinja cualquiera de los deberes señalados. Con todo, la multa total anual a pagar por cada institución no podrá exceder de 500 unidades tributarias anuales. Notificada la institución de su incumplimiento, total o parcial, por parte del Servicio, y transcurrido el plazo de un mes desde dicha notificación sin que ésta haya entregado la información requerida, no será aplicable el límite a la multa antes señalada.

Artículo Transitorio:

La obligación de informar, a que se refiere el artículo único de esta ley, se aplicará respecto de los montos identificados a partir del tercer mes siguiente a la fecha de la publicación de esta ley.”.

El Director General Jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero, señor José Antonio Gaspar, se refirió a la propuesta acompañada señalando que, de acuerdo a lo expuesto por la CMF en la sesión anterior, se introdujeron precisiones terminológicas buscando ajustar el contenido de la propuesta incluida en el informe de la Comisión de Hacienda que fue aprobado en general por la Sala del Senado.

Agregó que esas precisiones tienen básicamente dos grandes focos, que apuntan a determinar cuáles son las entidades que estarían sometidas a la obligación de información y los productos que se reportarían.

Explicó que las entidades comprendidas en el texto son básicamente los bancos e instituciones financieras fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero y por el Ministerio de Economía Fomento y Turismo, debido a lo cual se hizo el ajuste a fin de determinar cuáles son las instituciones financieras fiscalizadas por la CMF y por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que se busca estén obligadas a reportar, y en ese sentido se señala en la propuesta que son los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, las compañías de seguros y las entidades privadas de depósito y custodia de valores, atendido que hay productos mencionados en el texto del proyecto que aluden a productos de seguros y otros a cuentas de custodia, razón por la cual se hace referencia a estas entidades fiscalizadas.

Destacó que, por ello, más que a instituciones financieras se hace referencia a estas entidades financieras que se busca definir.

Luego señaló que, apuntando a los productos o instrumentos y recogiendo el contenido de la iniciativa se adaptó ésta a la normativa del Banco Central que describe los productos y por ello se incluye la terminología de cuentas corrientes, depósitos, cuentas a la vista, cuentas de ahorro en general, las cuentas tanto bancarias a la vista como de ahorro incluidas.

Agregó que, como hay mención en el proyecto a algunas cuentas de custodia, la CMF entendió que había que hacer referencia a las cuentas de custodia de las entidades que establece la ley que regula la custodia de valores, ley N° 18.876.

Indicó que, como también se menciona a los contratos de seguros, en la propuesta de la CMF se hace referencia a la terminología de los productos de contratos de seguros que involucra, que son aquellos en los cuales hay un componente de inversión, ahorro o rentas como la vitalicia, sea la definitiva o la temporal, y no aquellos contratos de seguros sobre siniestros.

Respecto de los datos de identificación del titular, señaló que se intentó ampliar el abanico en términos de comprender todos los tipos de titulares posibles, sea persona natural, persona jurídica, patrimonios de afectación u otras entidades que tuvieran RUT y también la situación en que hubiera dos o más titulares.

Hizo presente que, en la misma lógica de la obligación de reportar acerca de los productos, se busca precisar lo referido a los abonos, también qué ocurre si una cuenta se cancela, se consideran los periodos a reportar, asimismo, se mantuvo el límite de 1.500 UF que se señaló en el proyecto de ley ajustando la fórmula de cálculo del valor de la UF y también la forma de expresar los productos asociados a moneda extranjera o anualidades.

En cuanto a los plazos, precisó que hay ajustes vinculados a la categoría de productos, considerando que en la iniciativa se habla de saldos, abonos y sumas y se propone englobarlos a montos asociados al producto.

En lo que se refiere a las obligaciones del Servicio de Impuestos Internos se estableció que esto es una excepción, de manera que quede claro y no haya dudas.

Finalmente, señaló que se propone una referencia respecto de la entrega de información maliciosamente falsa, la cual ya se encuentra sancionada, sin perjuicio que es materia a revisar por la Comisión.

El **Honorable Senador señor Coloma** preguntó si lo señalado por el señor Gaspar es un aporte de la CMF sólo sobre la redacción o comprende también el contenido de la iniciativa.

El **Honorable Senador señor Montes** expresó que la moción tenía una forma de describir las entidades, los productos y otros elementos y que la CMF, a través del señor Gaspar, estimó que había imprecisiones respecto de la terminología en relación con la que se encuentra contenida en otras normas y en ese sentido efectuó una colaboración.

Agregó que preparan una indicación en que algunos de los aspectos de la propuesta de la CMF se incorporan plenamente y otros parcialmente, mientras otros aspectos no serán considerados, materia a la que se referiría posteriormente el señor Guerrero.

Puntualizó que la propuesta de la CMF no significa que dicho organismo haya suscrito plenamente el proyecto.

El **señor Guerrero** expresó que, como señaló el Senador Montes, se recibió una propuesta de la Comisión para el Mercado Financiero que mejora considerablemente y precisa los términos del articulado propuesto, de manera tal que en la indicación que se trabaja se incorpora esta propuesta modificando particularmente los términos de manera de precisar cuáles son las entidades obligadas a informar, que como bien describía el señor Gaspar deben ser tanto bancos como cooperativas de ahorro y crédito, separando el rol de fiscalización tanto de la CMF cómo del Ministerio de Economía Fomento y Turismo.

Añadió que se recoge la propuesta de la CMF referida a identificar, ya no como cuentas sino que como productos e instrumentos a reportar, de tal manera que la indicación que se presentará busca homologar todo el articulado con objeto de darle coherencia a esta nueva terminología, en términos de hablar de productos e instrumentos a reportar y ya no de cuentas, entendiendo que la CMF es el órgano experto que ha identificado cuáles son las distintas cuentas que podrían ser susceptibles de reporte.

Refirió que se recogen las sugerencias relativas a nuevas letras, no obstante que ciertos textos ya estaban incluidos, entendiendo que ordenan de mejor manera el articulado y se establece específicamente en la propuesta que se presentará cuál es la información que se debe reportar específicamente por parte de las entidades financieras, la identificación del titular que se debe entregar, el periodo en el cual se debe entregar la información, el monto que se debe reportar, el estado de vigencia del producto, todo ello recogiendo una de las observaciones de la CMF y en

ese sentido, puntualizó que lo que se hace es mezclar lo que propone la CMF con la propuesta original.

Expresó que se intentó recoger los aportes de la CMF y se fue incorporando la terminología sugerida de tal manera que, cuando se presente la indicación que se propone, se verá que se corrige y se homologa a lo largo de todo el documento el concepto de entidades financieras y se definen éstas de acuerdo con la propuesta de la CMF.

Luego, expuso, la letra referida a los productos e instrumentos a reportar se modifica completamente y se reemplaza por la propuesta de la CMF, teniendo en cuenta que se entiende por productos e instrumentos a reportar todas aquellas cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista, vale vista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista, cuentas de ahorro a plazo para la vivienda, etc., que es la terminología que sugiere la CMF.

Agregó que, en la letra c), que se refiere a la información a reportar, se agrega una sugerencia de la CMF en términos de identificar en el primer párrafo de esta letra cuál debiera ser el contenido del reporte que deben informar las distintas entidades financieras, y se establece que este reporte deberá contener la entidad financiera, la identificación del titular, el periodo del reporte, el tipo de producto que se reporta, el número de registro, el monto, el estado de vigencia del producto y la fecha del cierre del producto cuando corresponda.

Precisó que en el párrafo primero, que pasará a ser párrafo segundo, solamente se modifica la terminología y el que era párrafo segundo pasa a ser una nueva letra sobre monto reportado y a continuación lo mismo respecto de la cancelación o cierre, que pasa a ser una nueva letra que se crea sobre el estado del producto e inversiones a reportar, que fue lo que señaló anteriormente el señor Gaspar.

Enseguida la letra d), referida a la identificación del titular o titulares, controladores y beneficiarios finales, se agrega en cuanto a la terminología referida a hablar de productos e instrumentos a reportar y no de cuentas financieras, asimismo se agrega la sugerencia de incorporar el rol único tributario de quienes estén obligados a reportar.

Luego, en lo que dice relación con el periodo de entrega de información, tal como se señaló anteriormente, se homologa el lenguaje sugerido y respecto del monto reportado se une a un párrafo sugerido por la CMF en conjunto con otro que ya existía.

En cuanto al estado de vigencia del producto e instrumentos a reportar que venía de la actual letra c) y la moneda a informar

se ajusta la terminología sugerida también y en lo que respecta a las obligaciones del Servicio se mantiene la redacción.

Respecto de las sanciones, indicó que se recogen los cambios terminológicos y se mantiene la especificación del tipo de sanción en caso de que ésta sea maliciosamente falsa o incompleta.

Por último, hizo presente que en el artículo transitorio se hace una modificación para ajustarlo a la nueva terminología en términos de no hablar de sumas, sino que de montos en su conjunto que los engloba.

Puntualizó que ese sería el contenido de lo que se presentará como indicación, reconociendo el aporte que ha hecho la Comisión para el Mercado Financiero que mejora la redacción del proyecto y lo enriquece.

El Honorable Senador señor García preguntó tanto al señor Gaspar como al señor Guerrero respecto de las obligaciones del Servicio, por cuanto el texto que propone la CMF señala que “la información a la que accederá el Servicio con motivo de lo dispuesto en este artículo tendrá el carácter de secreta o reservada”, de tal manera que se agrega a la expresión secreta, teniendo en cuenta que el texto original sólo contenía la expresión “reservada”.

Añadió que, si el mayor cambio está en agregar “secreto o reservada según el caso, conforme a las reglas establecidas en los artículos 35 y 206”, resulta muy importante, en su opinión, ya que no se encuentra en el texto original la frase que dice “sin perjuicio de lo indicado en el artículo 154 de la ley general de bancos”.

Observó que el señor Guerrero señaló que se mantiene la redacción, pero no le quedó claro si se refiere a la redacción propuesta por la CMF o la propuesta que mencionó el señor Guerrero, la cual no hace alusión al artículo 154 de la ley general de bancos ni tampoco agrega la palabra “secreto” y consideró importante esa redacción que se estaría estableciendo respecto de las obligaciones del Servicio.

El **señor Guerrero** respondió señalando que lo que busca esta letra respecto del carácter de reservada, dice relación con los funcionarios del Servicio y en ese sentido el Código Tributario en el artículo 35 y en el artículo 206 establece obligaciones de reserva de información para los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, y no se hace referencia en esta letra a determinar cuál es el carácter de la información que va a recibir el Servicio.

Añadió que con este proyecto no se están modificando las normas de secreto y reserva, tal como se ha señalado en las distintas presentaciones, toda vez que el Servicio de Impuestos Internos va a recibir una información acerca de cuáles son los saldos, lo que se va a traducir en este número de saldo o abono, y que será recibida por los funcionarios quienes tienen la obligación de reserva que establece el Código Tributario y eso es lo que busca esta norma, ratificar que ellos no pueden divulgar la información que reciben, por eso no sería necesario incorporar o hacer referencia a la ley general de bancos, entendiendo que no hay una referencia respecto de la calificación del tipo de información en cuanto a si es secreta o reservada de acuerdo a lo que establece la ley general de bancos, sino que se habla de las obligaciones que establece el Código Tributario para los funcionarios del Servicio.

El **señor Gaspar**, en respuesta a lo planteado por el Senador García, señaló que en términos generales hay coincidencia con lo señalado por el señor Guerrero, en términos de que el objetivo de esta disposición es la calificación del deber del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información, en que la terminología más adecuada es de “reservada” para los efectos de la función propia del Servicio y no altera lo que es la institucionalidad del secreto o reserva bancaria para la generalidad de las situaciones que dicen relación con la información.

Agregó que se sugirió agregar en el proyecto a fin de que no hubiera lugar a dudas que se regula los deberes del Servicio respecto de la información y no afecta a lo señalado en el artículo 154 de la ley general de bancos, que se entiende es una institución que no se vería afectada por esto, sin perjuicio de lo que la Comisión defina respecto de esta normativa, compartiendo lo que señaló el señor Guerrero en cuanto a que esto es la regulación de la obligación del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información y que se sugirió agregar la mención a lo indicado en la ley general de bancos para que quedara claro que no afecta el resto de la aplicabilidad de la regulación del secreto o reserva bancaria.

La **señora Suazo** manifestó que de acuerdo con lo que ha señalado la CMF en sesiones anteriores, esta información sí estaría sujeta a las obligaciones de la ley general de bancos y que esta norma que sugiere incluir busca dejar eso en evidencia.

Señaló que el señor Guerrero sostiene que esta información no está sujeta a secreto o reserva de acuerdo con la ley general de bancos.

El **señor Guerrero** precisó que no se ha dicho que esta obligación no está sujeta al deber de reserva de acuerdo con la ley general de bancos, toda vez que se considera que esta es información reservada y no secreta, que es distinto.

Estimó que no sería necesario incluirlo en el articulado, entendiendo que la norma está en el Código Tributario y tampoco está modificando reglas respecto al secreto o reserva bancaria, lo que se deja tal como está establecido hoy día en la ley general de bancos, razón por la que se consideró que incorporarlo no tenía mucho sentido, teniendo en cuenta que lo que busca esta obligación es que el Servicio quede sujeto al deber de guardar la reserva y la norma del artículo 154 no tiene que ver con obligaciones de funcionarios sino que habla de la calificación del tipo de información, de su naturaleza de información que entregan las entidades a propósito del secreto o la reserva bancaria.

El **señor Gaspar** manifestó que existe una diferencia con el señor Guerrero, pero que ésta no afecta al fondo del proyecto toda vez que la CMF estima que hay cierta información que sí está sujeta a secreto bancario, que es la información a la cual se está accediendo, y por eso la necesidad de una ley para que pueda accederse a esta información.

Debido a lo anterior se propuso incorporar la mención a que no se altera lo que dispone el artículo 154 de la ley general de bancos, a objeto de que no quede ninguna duda en cuanto a que no altera en términos generales lo que dispone esa norma.

Destacó que comparte con el señor Guerrero que lo que se busca regular principalmente por esta letra es el deber que tiene el Servicio de Impuestos Internos cuando accede a esta información en términos que se mantiene reservada, es decir sujeta a la confidencialidad por cuanto no puede divulgarla el Servicio.

Puntualizó que la Comisión para el Mercado Financiero estima que parte de la información a la cual se está accediendo está sujeta no solamente a reserva bancaria, sino que también a secreto bancario, sin perjuicio de que lo que aquí se está regulando es principalmente el deber que tiene el Servicio al recibir esta información y al uso que le puede dar a la misma.

El **Honorable Senador señor Pizarro** manifestó que parte del debate que se ha sostenido, aun cuando no es el objetivo del proyecto, dice relación con la vulneración o no del secreto bancario y eso ha sido parte también de las intervenciones que se han escuchado en la Comisión y de la información que se ha publicado en algunos medios, que han llevado a pensar que se trataría de un proyecto que busca prácticamente terminar con el secreto bancario.

Puso de relieve la importancia de que no quede ninguna duda en el proyecto de que cuando se habla de reserva se

establece respecto de los funcionarios del Servicio y también respecto de la información que se hace la excepción de entregar, respecto a determinados montos, que normalmente deberá estar sujeta al secreto o reserva bancaria, lo cual deberá quedar claro en el proyecto con el objeto de evitar las suspicacias y desconfianzas que se han generado en este debate.

El **Honorable Senador señor Montes** recordó que en la indicación referida a los *trust* hubo reparos en algunos párrafos respecto de su admisibilidad, frente a lo cual harán una propuesta que elimina esas frases, para evitar la discusión al respecto. Reiteró, asimismo, que se había solicitado al Ejecutivo que evaluara si está dispuesto a hacerse parte en incorporar ese artículo, teniendo en cuenta que era lo existía desde el año 2014 y que, producto de la modificación del año 2020, fue eliminado.

El **Honorable Senador señor Coloma** hizo presente que él también presentaría tres nuevas indicaciones, de las cuales las más importantes son, a su juicio, la que dice relación, con las personas respecto de las cuales se ha enviado la información al Servicio de Impuestos Internos y la referente al secreto que todo esto involucra.

Agregó que estarían en armonía con los textos que se han conversado y básicamente tienen por objeto salvaguardar que el sujeto cuya información es divulgada sepa que fue divulgada y el secreto que supone cualquier uso que después se haga de esa información.

El **Honorable Senador señor Montes** reiteró al Ejecutivo la solicitud de reflexionar respecto de la introducción del artículo 33 bis, a fin de determinar de qué manera continuar con el tratamiento de la materia.

A continuación, la Comisión se abocó al estudio de las indicaciones.

ARTÍCULO ÚNICO

Incorpora en el decreto ley N° 830, de 1974, un artículo 85 bis, nuevo.

En el artículo único recayeron las siguientes indicaciones:

ooo

La **indicación número 1, del Honorable Senador señor Montes**, reemplaza el número 2 del artículo 33 bis del Código Tributario, relativo a “Normas especiales de información sobre determinadas inversiones”, por el siguiente:

“2. Normas especiales de información sobre determinadas inversiones.

A. Los contribuyentes acogidos a las disposiciones del artículo 14 de Ley sobre Impuesto a la Renta deberán aplicar, respecto de las inversiones que hayan efectuado, las siguientes reglas:

a) Inversiones en el extranjero: deberán informar al Servicio hasta el 30 de junio de cada año comercial, mediante la presentación de una declaración en la forma que éste fije mediante resolución, las inversiones realizadas en el extranjero durante el año comercial anterior, con indicación del monto y tipo de inversión, del país o territorio en que se encuentre. En caso que estas inversiones fuesen en acciones, cuotas o derechos, se deberá informar el porcentaje de participación en el capital que representan de la sociedad o entidad constituida en el extranjero. Respecto de las inversiones en el extranjero, se deberá informar el destino de los fondos invertidos, así como cualquier otra información adicional que dicho Servicio requiera respecto de esas inversiones. En caso de no presentarse esta declaración, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tales inversiones en el extranjero constituyen retiros de especies o cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deben imputarse al valor o costo de los bienes del activo, ello para los efectos de aplicar la tributación que corresponda de acuerdo al artículo 21, sin que proceda su deducción en la determinación de la renta líquida imponible de primera categoría. Cuando las inversiones a que se refiere esta letra se hayan efectuado directa o indirectamente en países o territorios que califiquen como de baja o nula tributación conforme a lo dispuesto en el artículo 41 H, además de la presentación de la declaración referida, deberán informar anualmente, en el plazo señalado, el estado de dichas inversiones, con indicación de sus aumentos o disminuciones, el destino que las entidades receptoras han dado a los fondos respectivos, así como cualquier otra información que requiera el Servicio sobre tales inversiones, en la oportunidad y forma que establezca mediante resolución. En caso de no presentarse esta declaración, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tales inversiones en el extranjero constituyen retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de dinero de la misma forma ya señalada y con los mismos efectos, para los fines de aplicar lo dispuesto en el artículo 21. En todo caso, el contribuyente podrá acreditar que las inversiones fueron realizadas con sumas que corresponden a su capital o a ingresos no constitutivos de renta, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que cuando el capital propio tributario del contribuyente excede de la suma de su capital y de los referidos ingresos no constitutivos de renta, tales

inversiones se han efectuado, en el exceso, con cantidades que no han cumplido totalmente con los impuestos de la presente ley, procediendo entonces la aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 21. La entrega maliciosa de información incompleta o falsa en las declaraciones que establece esta letra, se sancionará en la forma prevista en el primer párrafo, del número 4 del artículo 97 del Código Tributario.

b) Inversiones en Chile: las empresas, entidades o sociedades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en Chile que obtengan rentas pasivas de acuerdo a los criterios que establece el artículo 41 G, no podrán ser utilizadas en forma abusiva para diferir o disminuir la tributación de los impuestos finales de sus propietarios, socios o accionistas. De acuerdo a lo anterior, cuando se haya determinado la existencia de abuso o simulación conforme a lo dispuesto en los artículos 4° bis y siguientes del Código Tributario, se aplicará respecto del monto de tales inversiones la tributación dispuesta en el artículo 21, sin perjuicio de la aplicación de los impuestos que correspondan a los beneficiarios de las rentas o cantidades respectivas y las sanciones que procedieren. En todo caso, el contribuyente podrá acreditar que las inversiones fueron realizadas con sumas que corresponden a su capital o a ingresos no constitutivos de renta, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que cuando el capital propio tributario del contribuyente excede de la suma de su capital y de los referidos ingresos no constitutivos de renta, tales inversiones se han efectuado, en el exceso, con cantidades que no han cumplido totalmente con los impuestos de la presente ley, procediendo entonces la aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 21. No obstante lo anterior, cuando se determine que los actos, contratos y operaciones respectivos se han llevado a cabo maliciosamente con la finalidad de evitar, disminuir o postergar la aplicación de los impuestos global complementario o adicional, ello será sancionado conforme a lo dispuesto en el primer párrafo, del número 4 del artículo 97 del Código Tributario.

B. Los contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en el país, sean o no sujetos del impuesto a la renta, que tengan o adquieran en un año calendario cualquiera la calidad de constituyente o “settlor”, beneficiario, “trustee” o administrador de un “trust” creado conforme a disposiciones de derecho extranjero, deberán informar anualmente al Servicio, mediante la presentación de una declaración en la forma y plazo que este fije mediante resolución, los siguientes antecedentes:

a) El nombre o denominación del “trust”, fecha de creación, país de origen, entendiéndose por tal el país cuya legislación rige los efectos de las disposiciones del “trust”; país de residencia para efectos tributarios; número de identificación tributaria utilizado en el extranjero en los actos ejecutados en relación con los bienes del “trust”, indicando el país que

otorgó dicho número; número de identificación para fines tributarios del “trust”; y, patrimonio del “trust”.

b) El nombre, la razón social o la denominación del constituyente o “settlor”, del “trustee”, de los administradores y de los beneficiarios del mismo, sus respectivos domicilios, países de residencia para efectos tributarios; número de identificación para los mismos fines, indicando el país que otorgó dicho número.

c) Si la obtención de beneficios por parte de él o los beneficiarios del “trust” está sujeta a la voluntad del “trustee”, otra condición, un plazo o modalidad. Además, deberá informarse si existen clases o tipos distintos de beneficiarios. Cuando una determinada clase de beneficiarios pudiere incluir a personas que no sean conocidas o no hayan sido determinadas al tiempo de la declaración, por no haber nacido o porque la referida clase permite que nuevas personas o entidades se incorporen a ella, deberá indicarse dicha circunstancia en la declaración. Cuando los bienes del “trust” deban o puedan aplicarse a un fin determinado, deberá informarse detalladamente dicho fin. Cuando fuere el caso, deberá informarse el cambio del “trustee” o administrador del “trust”, de sus funciones como tal, o la revocación del “trust”. Además, deberá informarse el carácter revocable o irrevocable del “trust”, con la indicación de las causales de revocación. Sólo estarán obligados a la entrega de la información de que se trate aquellos beneficiarios que se encuentren ejerciendo su calidad de tales conforme a los términos del “trust” o acuerdo y quienes hayan tomado conocimiento de dicha calidad, aun cuando no se encuentren gozando de los beneficios por no haberse cumplido el plazo, condición o modalidad fijado en el acto o contrato.

Cuando la información proporcionada en la declaración respectiva haya variado, las personas o entidades obligadas deberán presentar, en la forma que fije el Servicio mediante resolución, una nueva declaración detallando los nuevos antecedentes, ello hasta el 30 de junio del año siguiente a aquel en que los antecedentes proporcionados en la declaración previa hayan cambiado.

Para los fines de este número, el término “trust” se refiere a las relaciones jurídicas creadas de acuerdo a normas de derecho extranjero, sea por acto entre vivos o por causa de muerte, por una persona en calidad de constituyente o settlor, mediante la transmisión o transferencia de bienes, los cuales quedan bajo el control de un “trustee” o administrador, en interés de uno o más beneficiarios o con un fin determinado.

Se entenderá también por “trust” para estos fines, el conjunto de relaciones jurídicas que, independientemente de su denominación, cumplan con las siguientes características: i) Los bienes del “trust” constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio

personal del “trustee” o administrador; ii) El título sobre los bienes del “trust” se establece en nombre del “trustee”, del administrador o de otra persona por cuenta del “trustee” o administrador; iii) El “trustee” o administrador tiene la facultad y la obligación, de las que debe rendir cuenta, de administrar, gestionar o disponer de los bienes según las condiciones del “trust” y las obligaciones particulares que la ley extranjera le imponga. El hecho de que el constituyente o “settlor” conserve ciertas prerrogativas o que el “trustee” posea ciertos derechos como beneficiario no es incompatible necesariamente con la existencia de un “trust”.

El término “trust” también incluirá cualquier relación jurídica creada de acuerdo a normas de derecho extranjero, en la que una persona en calidad de constituyente, transmita o transfiera el dominio de bienes, los cuales quedan bajo el control de una o más personas o “trustees”, para el beneficio de una o más personas o entidades o con un fin determinado, y que constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio personal del “trustee” o administrador.

En caso de no presentarse la referida declaración por parte del constituyente del “trust”, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la constitución del “trust” constituye abuso o simulación conforme a lo dispuesto en los artículos 4° bis y siguientes del Código Tributario, aplicándose la tributación que corresponda de acuerdo a la calidad de los intervinientes y la naturaleza jurídica de las operaciones. La entrega maliciosa de información incompleta o falsa en las declaraciones que establece esta letra, se sancionará en la forma prevista en el primer párrafo del número 4 del artículo 97, del Código Tributario.

C. Sanciones. El retardo u omisión en la presentación de las declaraciones que establece esta letra, o la presentación de declaraciones incompletas o con antecedentes erróneos, además de los efectos jurídicos a que se refieren los números precedentes, será sancionada con multa de diez unidades tributarias anuales, incrementada con una unidad tributaria anual adicional por cada mes de retraso, con tope de cien unidades tributarias anuales. La referida multa se aplicará conforme al procedimiento establecido en el artículo 161 de este Código.”.

El **Honorable Senador señor Montes** expresó que el objetivo de la indicación es reponer lo que se estableció en la reforma tributaria del año 2014 y que se eliminó inadvertidamente en la modificación legal de enero del año 2020.

Agregó que se busca nuevamente contar con información respecto de operaciones e inversiones en territorios de fiscalidad favorecida o paraísos fiscales.

El Honorable Senador señor Coloma manifestó tener un problema inicial con la indicación, porque escapa de la idea matriz de la iniciativa, que es la entrega de información de entidades financieras al SII. Estimó que excede los límites del proyecto al pretender que inversionistas, además de entregar datos, justifiquen las inversiones que realizan. Consideró que se trata de una iniciativa diferente en sí misma.

El señor Saffie señaló que la indicación continúa la línea del proyecto de ley en cuanto a hacer exigencias de información, con las consiguientes relaciones con normas tributarias ya existentes, como el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta o la norma general antielusión, pero sin crear normas tributarias o hechos gravados.

Añadió que el hecho de realizar una operación en el exterior no puede ser considerado de por sí como evasión o elusión, por lo que se resolvió fortalecer la información que se debe entregar sobre las mismas, y eso es lo que se está reponiendo normativamente.

Recordó que en el año 2020 se cambió la regulación ubicándola en el artículo 33 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero quedó como una facultad del SII, resultando redundante porque la facultad de fiscalización siempre existe y no es efectiva, porque se trata de operaciones que el Servicio no conoce, y lo relevante es que exista la obligación del contribuyente de informar. En este caso específico, dar transparencia a actos que en su origen son esencialmente opacos, como ocurre con los trust.

Sostuvo que las únicas enmiendas respecto de lo existente en el año 2014 son concordancias para trasladar la norma desde la Ley sobre Impuesto a la Renta al Código Tributario.

El Honorable Senador señor Coloma consideró que la indicación sería inadmisibles por escapar a las ideas matrices.

El Coordinador Legislativo del Ministerio de Hacienda, señor Riquelme, planteó que las ideas matrices abordan formas de combatir la evasión y la elusión mediante un deber de información sobre las instituciones financieras. En el caso de la indicación, se trata de información que ya no es entregada por bancos e instituciones financieras sino por contribuyentes.

La Coordinadora de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda, señora Suazo, señaló que se incorpora una sanción con remisión al artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta e implica la aplicación de un impuesto lo que es parte de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El **señor Saffie** sostuvo que no existe un hecho gravado nuevo sino la aplicación natural de una norma existente y las consecuencias del incumplimiento de los deberes de información.

El **Honorable Senador señor Coloma** expresó que las ideas matrices no se pueden extender a todo tipo de información.

Agregó que es inadmisibles la aplicación del impuesto sanción del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta en base a una indicación que no es del Presidente de la República.

El **Honorable Senador señor Montes** pidió que se analicen con detención los aspectos que podrían ser inadmisibles y que el Ejecutivo los recoja para perfeccionar la norma.

--La indicación número 1 fue retirada por su autor.

o o o

La indicación número 1 bis, de los Honorables Senadores señores Lagos y Montes, reemplaza el número 2 del artículo 33 bis del Código Tributario por el siguiente:

“2. Normas especiales de información sobre determinadas inversiones.

A. Los contribuyentes acogidos a las disposiciones del artículo 14 de Ley sobre Impuesto a la Renta deberán aplicar, respecto de las inversiones que hayan efectuado, las siguientes reglas:

a) Inversiones en el extranjero: deberán informar al Servicio hasta el 30 de junio de cada año comercial, mediante la presentación de una declaración, las inversiones realizadas en el extranjero durante el año comercial anterior, con indicación del monto y tipo de inversión, del país o territorio en que se encuentre. En caso que estas inversiones fuesen en acciones, cuotas o derechos, se deberá informar el porcentaje de participación en el capital que representan de la sociedad o entidad constituida en el extranjero. Respecto de las inversiones en el extranjero, se deberá informar el destino de los fondos invertidos. En caso de no presentarse esta declaración, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tales inversiones en el extranjero constituyen retiros de especies o cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deben imputarse al valor o costo de los bienes del activo, ello para los efectos de

aplicar la tributación que corresponda de acuerdo al artículo 21, sin que proceda su deducción en la determinación de la renta líquida imponible de primera categoría. Cuando las inversiones a que se refiere esta letra se hayan efectuado directa o indirectamente en países o territorios que califiquen como de baja o nula tributación conforme a lo dispuesto en el artículo 41 H, además de la presentación de la declaración referida, deberán informar anualmente, en el plazo señalado, el estado de dichas inversiones, con indicación de sus aumentos o disminuciones, el destino que las entidades receptoras han dado a los fondos respectivos, así como cualquier otra información que requiera el Servicio sobre tales inversiones, en la oportunidad y forma que establezca mediante resolución. En caso de no presentarse esta declaración, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tales inversiones en el extranjero constituyen retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de dinero de la misma forma ya señalada y con los mismos efectos, para los fines de aplicar lo dispuesto en el artículo 21. En todo caso, el contribuyente podrá acreditar que las inversiones fueron realizadas con sumas que corresponden a su capital o a ingresos no constitutivos de renta, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que cuando el capital propio tributario del contribuyente excede de la suma de su capital y de los referidos ingresos no constitutivos de renta, tales inversiones se han efectuado, en el exceso, con cantidades que no han cumplido totalmente con los impuestos de la presente ley, procediendo entonces la aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 21. La entrega maliciosa de información incompleta o falsa en las declaraciones que establece esta letra, se sancionará en la forma prevista en el primer párrafo, del número 4 del artículo 97 del Código Tributario.

b) Inversiones en Chile: las empresas, entidades o sociedades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en Chile que obtengan rentas pasivas de acuerdo a los criterios que establece el artículo 41 G, no podrán ser utilizadas en forma abusiva para diferir o disminuir la tributación de los impuestos finales de sus propietarios, socios o accionistas. De acuerdo a lo anterior, cuando se haya determinado la existencia de abuso o simulación conforme a lo dispuesto en los artículos 4° bis y siguientes del Código Tributario, se aplicará respecto del monto de tales inversiones la tributación dispuesta en el artículo 21, sin perjuicio de la aplicación de los impuestos que correspondan a los beneficiarios de las rentas o cantidades respectivas y las sanciones que procedieren. En todo caso, el contribuyente podrá acreditar que las inversiones fueron realizadas con sumas que corresponden a su capital o a ingresos no constitutivos de renta, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que cuando el capital propio tributario del contribuyente excede de la suma de su capital y de los referidos ingresos no constitutivos de renta, tales inversiones se han efectuado, en el exceso, con cantidades que no han cumplido totalmente con los impuestos de la presente ley, procediendo entonces la aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 21. No obstante lo anterior, cuando se determine que los actos, contratos y operaciones respectivos se han llevado a cabo

maliciosamente con la finalidad de evitar, disminuir o postergar la aplicación de los impuestos global complementario o adicional, ello será sancionado conforme a lo dispuesto en el primer párrafo, del número 4 del artículo 97 del Código Tributario.

B. Los contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en el país, sean o no sujetos del impuesto a la renta, que tengan o adquieran en un año calendario cualquiera la calidad de constituyente o "settlor", beneficiario, "trustee" o administrador de un "trust" creado conforme a disposiciones de derecho extranjero, deberán informar anualmente al Servicio, mediante la presentación de una declaración, los siguientes antecedentes:

a) El nombre o denominación del "trust", fecha de creación, país de origen, entendiéndose por tal el país cuya legislación rige los efectos de las disposiciones del "trust"; país de residencia para efectos tributarios; número de identificación tributaria utilizado en el extranjero en los actos ejecutados en relación con los bienes del "trust", indicando el país que otorgó dicho número; número de identificación para fines tributarios del "trust"; y, patrimonio del "trust".

b) El nombre, la razón social o la denominación del constituyente o "settlor", del "trustee", de los administradores y de los beneficiarios del mismo, sus respectivos domicilios, países de residencia para efectos tributarios; número de identificación para los mismos fines, indicando el país que otorgó dicho número.

c) Si la obtención de beneficios por parte de él o los beneficiarios del "trust" está sujeta a la voluntad del "trustee", otra condición, un plazo o modalidad. Además, deberá informarse si existen clases o tipos distintos de beneficiarios. Cuando una determinada clase de beneficiarios pudiere incluir a personas que no sean conocidas o no hayan sido determinadas al tiempo de la declaración, por no haber nacido o porque la referida clase permite que nuevas personas o entidades se incorporen a ella, deberá indicarse dicha circunstancia en la declaración. Cuando los bienes del "trust" deban o puedan aplicarse a un fin determinado, deberá informarse detalladamente dicho fin. Cuando fuere el caso, deberá informarse el cambio del "trustee" o administrador del "trust", de sus funciones como tal, o la revocación del "trust". Además, deberá informarse el carácter revocable o irrevocable del "trust", con la indicación de las causales de revocación. Sólo estarán obligados a la entrega de la información de que se trate aquellos beneficiarios que se encuentren ejerciendo su calidad de tales conforme a los términos del "trust" o acuerdo y quienes hayan tomado conocimiento de dicha calidad, aun cuando no se encuentren gozando de los beneficios por no haberse cumplido el plazo, condición o modalidad fijado en el acto o contrato.

Cuando la información proporcionada en la declaración respectiva haya variado, las personas o entidades obligadas deberán presentar, una nueva declaración detallando los nuevos antecedentes, ello hasta el 30 de junio del año siguiente a aquel en que los antecedentes proporcionados en la declaración previa hayan cambiado.

Para los fines de este número, el término “trust” se refiere a las relaciones jurídicas creadas de acuerdo a normas de derecho extranjero, sea por acto entre vivos o por causa de muerte, por una persona en calidad de constituyente o settlor, mediante la trasmisión o transferencia de bienes, los cuales quedan bajo el control de un “trustee” o administrador, en interés de uno o más beneficiarios o con un fin determinado.

Se entenderá también por “trust” para estos fines, el conjunto de relaciones jurídicas que, independientemente de su denominación, cumplan con las siguientes características: i) Los bienes del “trust” constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio personal del “trustee” o administrador; ii) El título sobre los bienes del “trust” se establece en nombre del “trustee”, del administrador o de otra persona por cuenta del “trustee” o administrador; iii) El “trustee” o administrador tiene la facultad y la obligación, de las que debe rendir cuenta, de administrar, gestionar o disponer de los bienes según las condiciones del “trust” y las obligaciones particulares que la ley extranjera le imponga. El hecho de que el constituyente o “settlor” conserve ciertas prerrogativas o que el “trustee” posea ciertos derechos como beneficiario no es incompatible necesariamente con la existencia de un “trust”.

El término “trust” también incluirá cualquier relación jurídica creada de acuerdo a normas de derecho extranjero, en la que una persona en calidad de constituyente, transmita o transfiera el dominio de bienes, los cuales quedan bajo el control de una o más personas o “trustees”, para el beneficio de una o más personas o entidades o con un fin determinado, y que constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio personal del “trustee” o administrador.

En caso de no presentarse la referida declaración por parte del constituyente del “trust”, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la constitución del “trust” constituye abuso o simulación conforme a lo dispuesto en los artículos 4° bis y siguientes del Código Tributario, aplicándose la tributación que corresponda de acuerdo a la calidad de los intervinientes y la naturaleza jurídica de las operaciones. La entrega maliciosa de información incompleta o falsa en las declaraciones que establece esta letra, se sancionará en la forma prevista en el primer párrafo del número 4 del artículo 97, del Código Tributario.

C. Sanciones. El retardo u omisión en la presentación de las declaraciones que establece esta letra, o la presentación

de declaraciones incompletas o con antecedentes erróneos, además de los efectos jurídicos a que se refieren los números precedentes, será sancionada con multa de diez unidades tributarias anuales, incrementada con una unidad tributaria anual adicional por cada mes de retraso, con tope de cien unidades tributarias anuales. La referida multa se aplicará conforme al procedimiento establecido en el artículo 161 de este Código.”.

En **sesión de 30 de septiembre de 2021**, el **señor Saffie** explicó que en esta indicación se recogen los comentarios efectuados en la sesión anterior para evitar las discusiones sobre posibles inconstitucionalidades o problemas de competencia.

Agregó que la técnica legislativa utilizada consiste en reemplazar el texto eliminando aquellas partes que fueron sugeridas de manera de hacerlo más claro y por ello que resulta tan extensa.

Precisó que no se trata de un texto nuevo, sino que es el mismo texto presentado en la indicación anterior, pero con las eliminaciones sugeridas en las sesiones anteriores y estimó que esta técnica mantiene un mejor historial en lugar de utilizar la expresión “elimínese”.

0

El **Honorable Senador señor Montes** indicó que esta norma existía y en la reforma de enero del año 2020 se cambió su carácter de tal manera que ya no es una obligación de las personas que realizan operaciones, sobre todo en paraísos tributarios, sino que opera a solicitud del Servicio de Impuestos Internos.

Añadió que actualmente el Servicio se encuentra dedicado a tratar de controlar a 700 empresas que operan en paraísos tributarios pero lo que se busca es que proporcionen la información de sus movimientos porque eso permitiría al Servicio de Impuestos Internos hacer mejor su trabajo como se encontraba planteado en la reforma del año 2014 cuyo carácter cambió luego de la reforma del año 2020.

La **Honorable Senadora señora Rincón** consultó si esta indicación cabe o no dentro de las ideas matrices del proyecto.

El **Honorable Senador señor Coloma** observó que tal como lo planteó en la sesión anterior esta indicación no dice relación con las ideas matrices del proyecto.

Señaló que efectivamente, como ha señalado el Senador Montes hubo un cambio y esto fue modificado hace un año en una ley especial que tuvo por objeto la modernización tributaria sin embargo hoy día no se está hablando de eso, sino que el proyecto trata un tema distinto que dice relación con ciertas obligaciones bancarias, básicamente con la

institución del secreto bancario.

Consideró que más allá de si influye o no en el artículo 21 del Código Tributario y más allá de que pueda ampliar por esta vía la base del impuesto, lo que requeriría del patrocinio del Gobierno, hay un tema de idea matriz importante de precisar y que en el caso de esta indicación se escapa teniendo en cuenta que en nuestra legislación la idea matriz es precisa de manera tal que no puede legislarse sobre cualquier materia vinculada a impuestos.

El **señor Saffie** replicó que cuando se analizó esto en la sesión anterior se dijo que efectivamente esta indicación quedaba comprendida en la idea matriz, precisamente en la discusión que se sostuvo con el Senador Coloma, toda vez que se trata de una medida anti elusión de entrega de información.

Precisó que el origen histórico es el que ha señalado el Senador Montes de reponer una regla en términos de hacerla obligatoria en lugar de facultativa de la Administración.

La **Honorable Senadora señora Rincón** hizo presente que su pregunta anterior se debió a que cuando intentó incluir al Servicio Nacional de Aduanas en esta iniciativa, se le indicó que esta materia estaba fuera de la idea matriz y en este caso puntual estima que se estaría en la misma situación.

Refirió que si bien el objetivo que se persigue es claro no lo están las ideas matrices, entonces se genera un problema por cuanto el objetivo del proyecto es incorporar en el Código Tributario un nuevo artículo 85 bis por medio del cual se establezca la obligación de los bancos e instituciones financieras de entregar información respecto de saldos y abonos mensuales correspondientes al año calendario inmediatamente anterior en la medida que dichos saldos o sumas de abonos registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 Unidades de Fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan.

El **señor Guerrero** compartió lo expuesto por el señor Saffie en cuanto a que en principio esta materia estaría dentro de las ideas matrices del proyecto, entendiendo que lo que se busca es generar herramientas para el combate a la elusión y a la evasión y en ese sentido este cambio se enmarca en una facultad que hoy día tiene el Servicio a fin de que sea una obligación para el contribuyente a propósito de la última reforma tributaria.

En cuanto a la relación de la indicación con las ideas matrices señaló que es una materia que deben decidir los miembros de

la Comisión.

El Coordinador Legislativo del Ministerio de Hacienda, señor Riquelme, planteó que a juicio del Ejecutivo esta indicación en particular resulta contraria a las ideas matrices, teniendo en cuenta que la idea matriz del proyecto fue entendida como el deber que tienen las instituciones financieras de reportar cierta información al Servicio de Impuestos internos y a través de ese instrumento combatir la evasión y la elusión.

Agregó que si la idea matriz fuera solamente combatir la elusión y la evasión tributaria en términos genéricos, se podría abrir una discusión enorme, teniendo en cuenta que el año 2001 se debatió un proyecto de ley durante el gobierno del ex Presidente Lagos que tenía por objeto solamente medidas para combatir la elusión y la evasión que se tradujo en un lato debate en el Congreso Nacional y en que se introdujeron varios cambios en el artículo 97 del Código Tributario referido a diferentes infracciones y delitos tributarios de tal manera que el proyecto en estudio siempre fue entendido como algo más acotado.

El Honorable Senador señor Lagos propuso dejar esta indicación pendiente de votación para poder analizarla y continuar con el resto de las indicaciones de manera de poder ir avanzando en esta materia.

El Honorable Senador señor Coloma agregó a su inquietud respecto de la inadmisibilidad de la indicación la referencia que ahí se hace al artículo 21 del Código Tributario, que amplía los hechos gravados que hoy existen, haciendo presente que, desde su perspectiva esta materia no dice relación con la idea matriz y en ese sentido concordó con el hecho que respecto de la no inclusión del Servicio Nacional de Aduanas se argumentó de la misma manera.

En **sesión de 23 de noviembre de 2021**, el **Honorable Senador señor Coloma** reiteró que considera inadmisibile esta indicación por exceder las ideas matrices del proyecto de ley. Además, trata una materia que incluía la reforma tributaria del año 2014, por lo que corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República reincorporarla. Adelantó que su voto sería contrario a la presente indicación.

El Honorable Senador señor Montes recordó que efectivamente existía la norma desde la reforma tributaria del año 2014 y se eliminó de forma poco transparente en el año 2020, debiendo nuevamente el SII pedir la información. Subrayó que es necesario que las 700 sociedades que operan con paraísos fiscales retomen la obligación de informar.

El **señor Saffie** suscribió lo expuesto por el Senador Montes y agregó que se cambió lo dispuesto por encontrarse dentro del artículo 14 de la LIR que fue reformado completamente, pero sin que existiese advertencia acerca de la modificación de la regla sobre la obligación de declarar.

Añadió que en la redacción de la indicación propuesta se corrigieron las posibles inadmisibilidades por iniciativa exclusiva y la única remisión que se hace es a una norma que ya existe y no se incorpora al ordenamiento.

La **Honorable Senadora señora Rincón** pidió que se reformule la redacción para evitar cualquier posible inadmisibilidad.

El **Honorable Senador señor Montes** solicitó, nuevamente, que el Ejecutivo reflexione sobre la materia para que la respalde, dado que se trata de evitar la evasión y elusión mediante la utilización de paraísos fiscales.

El **Honorable Senador señor Lagos** llamó a trabajar con el Ejecutivo para lograr una redacción y poder retomar la obligación de informar.

El **Honorable Senador señor Coloma** acotó que no se trata sólo de paraísos fiscales, porque se incluyen disposiciones sobre inversiones en el país.

El **Honorable Senador señor Montes** señaló que al aprobar la enmienda del año 2020 se pidió aprobar para avanzar en el entendido que se hacía con “juego limpio”, esto es, que si existía un algún error se corregiría.

En **sesión de 29 de noviembre**, el **Honorable Senador señor Montes** propuso que se eliminen las referencias a tributos y el término maliciosamente.

La **señora Suazo** observó que las obligaciones de información actualmente existen mediante dos declaraciones juradas, por lo que propuso que la indicación sea retirada.

El **señor Saffie** explicó que lo actualmente existente en el artículo 33 bis de Código Tributario es sólo una facultad y lo que existía en el artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta era una obligación. Agregó que no sería primera vez que se cambian las declaraciones juradas, tal como se hizo a propósito de la anterior reforma del año 2020.

Expresó que la eliminación de la referencia al artículo 21 de la LIR sólo tiene que ver con el respeto a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El **Honorable Senador señor Montes** subrayó que lo que se busca es que sea obligatorio informar las operaciones que se realicen con paraísos tributarios.

La **señora Suazo** reiteró que la declaración jurada es obligatoria.

El **señor Saffie** explicó que es diferente y que el objetivo es reforzar el estatus normativo que implica un deber y que no sea una mera facultad.

La **señora Suazo** señaló que no existía un marco jurídico para las declaraciones juradas y se pasaron al artículo 33 bis del Código Tributario sistematizándolo. Indicó que efectivamente coinciden en el objetivo de evitar la elusión.

--Puesta en votación la indicación número 1 bis, ésta fue aprobada, con enmiendas, por dos votos a favor de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Montes, y una abstención del Honorable Senador señor García.

o o o

La **indicación número 2, de Su Excelencia el Presidente de la República**, sustituye el artículo único por el que sigue:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62 bis del Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974:

1.- Agrégase en el inciso primero, a continuación de la frase “correspondiente al domicilio”, la siguiente: “de la matriz”.

2.- Para modificar su inciso segundo, del siguiente modo:

a) Agrégase la siguiente oración inicial: “El Servicio deberá presentar la solicitud de autorización judicial en todos los casos en que falte la autorización del titular a la solicitud de información, conforme al inciso tercero del artículo precedente.”.

b) Intercálase, a continuación de la frase “deberá ser presentada”, lo siguiente: “dentro del plazo de diez días contado desde recibida la información del banco de la falta de autorización por parte del titular,”

c) Intercálase, a continuación de la frase “efectuados desde el extranjero,”, el vocablo “solo”.

3.- Para modificar su inciso tercero, del siguiente modo:

a) Reemplázase la frase “el decimoquinto”, por la siguiente: “para el octavo”.

b) Elimínase la frase “o dentro del quinto día”.

c) Agrégase a continuación de la expresión “máximo de cinco días”, el siguiente texto: “, improrrogable y limitado a los puntos que el mismo tribunal designe. La prueba que rindan las partes se ponderará de conformidad con las reglas de la sana crítica, debiendo expresar la sentencia las circunstancias específicas que se han tenido en consideración para formar la convicción del tribunal. La sentencia deberá pronunciarse dentro del término de diez días, contado desde el vencimiento del término probatorio. En su caso, la sentencia señalará expresamente la información que el banco deba poner a disposición del Servicio.”.

4.- Para reemplazar en el inciso séptimo, la frase “, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contado desde el ingreso de los autos en la Secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos”, por la siguiente: “tan pronto se reciban los antecedentes”.

5.- Para agregar en el inciso octavo, a continuación de la expresión “del juicio”, la siguiente frase: “y será devuelto íntegramente al Servicio por el Tribunal Tributario y Aduanero una vez decretado el cumplimiento del fallo.”.

El referido artículo 62 bis se refiere al acceso a la información bancaria sujeta a reserva o secreto.

El Honorable Senador señor Montes expresó que esta sería una indicación sustitutiva que cambia lo fundamental del proyecto en cuanto a que los bancos deben proveer esta información bancaria en la forma que plantea al Servicio de Impuestos Internos. Con esta indicación lo que se dice es que se mantiene la norma en que caso a caso el Servicio debe solicitar autorización judicial para poder recabar la información, con lo cual el proyecto no se justifica.

Aseveró que, si bien es cierto que acorta el plazo que transcurre desde que se solicita la información hasta que se provee la autorización por parte de la autoridad judicial, lo que persigue el proyecto es que los sistemas bancarios entreguen señales de aquello que no esté funcionando bien, a partir de lo cual se generarán las investigaciones correspondientes, de modo que la indicación cambia completamente el carácter del proyecto de tal manera que éste no se justificaría si la idea fuera solamente perfeccionar la autorización judicial.

El **señor Guerrero** se manifestó de acuerdo con lo planteado por el Senador Montes en términos de que ésta sería una indicación sustitutiva que, efectivamente, deja sin efecto la idea principal del proyecto, sin perjuicio que si ésta fuera un elemento adicional sí mejoraría la segunda etapa de una posible futura investigación que pudiere iniciar el Servicio de Impuestos Internos en la medida que dados los antecedentes que recibe a propósito de la información que le entregarán los bancos se genere algún tipo de diferencia entre lo declarado por el contribuyente, por ejemplo, y la información entregada por el banco respecto de una cuenta corriente, haciendo procedente el inicio de una investigación o fiscalización y requiriendo el levantamiento del secreto bancario para tener acceso a los movimientos de la cuenta del contribuyente de acuerdo a las reglas que este artículo establece.

Agregó que, sin embargo, se propone con esta indicación algo distinto a que los bancos y otras instituciones financieras entreguen información al Servicio de Impuestos Internos para que éste pueda hacer cotejo de la información que posee con las declaraciones en conjunto con esta información nueva que les llegaría, a fin de que con esa información puedan iniciar procesos de fiscalización.

El **Honorable Senador señor Coloma** manifestó tener una discrepancia con el Senador Montes y los señores Saffie y Guerrero por cuanto lo que hace la indicación del Gobierno es hacerse cargo exactamente de la discusión del proyecto.

Agregó que cuando expusieron los profesores expertos en esta área, señalaron que en los casos en que se había solicitado a los jueces el levantamiento del secreto bancario éste nunca había sido rechazado y que la única objeción que se podía plantear era la referida a la velocidad de respuesta, y eso es precisamente de lo que se hace cargo esta indicación.

Destacó que lo que importa es que si hay un acto de evasión de impuestos o de elusión exista una capacidad de levantar el secreto bancario para ese efecto con autorización judicial, que en su opinión es un elemento de la esencia, y que se haga más rápidamente.

Expresó que cuando se hace un seguimiento de este debate se advierte que en ese punto precisamente se encuentra la materia que puede mejorarse y en ese sentido opinó que el Gobierno se hace cargo exactamente de lo señalado por los expertos.

Señaló que si bien en el tema de fondo existe una discrepancia, por cuanto no es partidario del mismo, reconoce que si hay algo que se podía mejorar en función del sistema actual, ello se hace posible a través de esta indicación del Ejecutivo, teniendo en cuenta que lo que se busca es que el sistema funcione, de manera tal que se tiene un sistema respecto del cual no ha habido objeciones en cuanto al funcionamiento, sino que incluso se dio una estadística de los pocos casos en que se había solicitado autorización y la cual nunca había sido negada.

Añadió que se leyeron en detalle los fallos del Tribunal Constitucional, razón por la cual consideró esta indicación plenamente pertinente y adecuada conforme a lo que se ha escuchado en el debate y si alguien hubiera dicho que no hay ninguna capacidad y que los jueces no acogen las solicitudes de autorización hubiera sido una situación distinta, sin embargo ocurrió a la inversa y si hubo una inquietud pudo haber estado referida a la velocidad del proceso y esta indicación se hace cargo de ello, lo que le parece correcto compartiendo el sentido exacto de ésta.

El **Honorable Senador señor García** hizo presente que fue el señor Silva uno de los académicos que planteó su opinión, con la cual coincidió, en cuanto a que resultaba mucho más efectivo una medida como esta de acortar plazos y que fuera analizado caso a caso, porque de lo contrario el Servicio de Impuestos Internos se encontraría con muchísima información que si no tiene cómo procesar podría terminar igualmente sin ser aprovechada.

El **Honorable Senador señor Montes** planteó que el objetivo del proyecto es preciso, por cuanto hoy en día existe gran cantidad de evasión y elusión tributaria y asimismo existe una importante necesidad de recursos para enfrentar el presente y el futuro del país y se trataría de un conjunto de medidas que ayuden a disminuir esa cantidad de evasión, sin perjuicio de que pueda discutirse respecto de la cifra, señaló que el estudio que tiene da cuenta de US\$22.000 millones por concepto de evasión y elusión.

Agregó que hay distintas medidas, siendo una de ellas la del denunciante anónimo que se presentará próximamente atendido que resulta fundamental y ha demostrado eficacia en otras materias.

Añadió que el punto principal del proyecto es que el Servicio de Impuestos Internos necesita señales sobre lo que pueda estar

ocurriendo para ahí recién comenzar una investigación, de manera que se trata de un conjunto de señales por la vía de la consistencia de la información a través de un sistema que le permita contrastar unas cosas con otras y determinar en qué casos es necesario investigar y ahí recién se dirige a la autoridad judicial para pedir autorización para iniciar el proceso de investigación correspondiente, por lo tanto son dos cosas absolutamente distintas.

Puntualizó que lo único que se está pidiendo con el proyecto es que el Servicio de Impuestos Internos pueda disponer de esta información.

Agregó que hubo una alternativa presentada por la Senadora Rincón en cuanto a terminar derechamente con el secreto bancario para efectos tributarios, sin embargo, lo que plantean los autores de la iniciativa no es eso, sino que se ponga a disposición del Servicio esa cantidad de información para que, a partir de eso, pueda decidir en qué casos solicitará autorización para investigar y en cuáles no.

Planteó que lo que se plantea con la indicación del Ejecutivo debe tomarse como lo que es, es decir se trata de una indicación sustitutiva de la anterior, toda vez que el Ejecutivo es del parecer que no hay que hacer esta entrega del conjunto de la información sino que hay que mantenerse caso a caso, dependiendo de la hipótesis investigativa que se tenga, cuando lo que se plantea con el proyecto es que antes de la hipótesis se pueda contar con la información y a partir de ahí determinar casos de investigación y solicitar autorización judicial, lo que tampoco es lo normal si se tiene en cuenta que en una gran cantidad de países los servicios de impuestos internos no piden autorización judicial sino que inician investigaciones, sin perjuicio de ello, resulta absurdo que se le pida autorización al investigado, tornando el procedimiento en uno extraño respecto de lo que es propiamente la investigación.

El Coordinador Legislativo del Ministerio de Hacienda, señor Riquelme, refirió que la idea del Ejecutivo es mejorar aquello que ya existe, teniendo presente que esta norma está vinculada con las normas de protección a la información de los contribuyentes, de tal manera que para el Ejecutivo no resulta posible separar esta discusión de las normas del secreto bancario, sin perjuicio de entender y compartir la preocupación que se plantea.

Recordó que durante la discusión en general que se dio en línea con los señores Saffie y Guerrero en términos de que el sistema requería cambios y perfeccionamientos, también se escuchó a varios expertos constitucionalistas y tributaristas, de los cuales no hubo uno que no hiciera algún reparo u observación respecto de las cuestiones constitucionales.

Agregó que entre la protección de los datos personales y la debida información con que debe contar la administración del Estado para poder cumplir con el objeto de su función, que en el caso del Servicio de Impuestos Internos es velar por el cumplimiento tributario el equilibrio es muy frágil.

Debido a ello el Ejecutivo perfeccionó lo que ya existe, no solamente acortando los plazos sino que además incluyó un cambio que, aunque parezca pequeño es sustantivo, toda vez que hoy en día el Servicio de Impuestos Internos cuando le solicita información al contribuyente y éste se niega, resulta facultativo para el Servicio acudir a los tribunales tributarios y aduaneros y lo que se pretende mediante estas indicaciones es establecer el deber legal del Servicio ante la oposición del contribuyente de recurrir al tribunal tributario y aduanero a solicitar esta información.

Destacó la importancia para el Ejecutivo de que un tercero imparcial resuelva y falle a fin de ir equilibrando este deber de la administración con el debido resguardo de la información de los contribuyentes de tal manera que con esta indicación se acortan los plazos y además se establece el deber legal del Servicio de Impuestos Internos para que cuente con más herramientas para poder ir por la información que requiere y comenzar las investigaciones que corresponda.

El Asesor Tributario del Ministerio de Hacienda, señor De Sarratea, señaló que desde el año 2013 a la fecha las acciones judiciales que se han presentado en el marco del artículo 62 bis del Código Tributario solo han sido cuatro, de las cuales dos fueron aprobadas, vale decir que el tribunal autorizó la entrega de información sin necesidad de una etapa probatoria resultando un proceso expedito.

Agregó que las otras dos acciones se encuentran con sus términos probatorios suspendidos, por lo tanto si bien el Servicio tiene hoy en día la facultad acudir al tribunal tributario y aduanero, en la práctica se ve que no lo hace o lo hace de manera escueta y por ello la modificación propuesta por el Ejecutivo acerca de la facultad del Servicio de Impuestos internos que se transforma en obligación de la autoridad tributaria de recurrir al tribunal tributario y aduanero a solicitar la información en caso de negativa del contribuyente.

El Honorable Senador señor García refirió que el hecho que el Servicio sólo en cuatro oportunidades haya recurrido a tribunales puede tener varias lecturas, siendo una de ellas que cada vez que le requirió a los contribuyentes la información bancaria ella fue puesta a disposición y no hubo mayores dificultades, toda vez que recurrir a tribunales para que el contribuyente tenga que mostrar su información bancaria en

cuatro oportunidades resulta estadísticamente muy poco en su opinión, de manera que preguntó al señor De Sarratea cuál es la lectura que debiera hacerse de ese dato.

El Asesor Tributario del Ministerio de Hacienda, señor De Sarratea, respondió señalando que desconoce la lectura porque si bien resulta positivo que los contribuyentes accedan de manera voluntaria a entregar información solamente puede conocerse como estadística, sin perjuicio de ello el dato de las cuatro acciones judiciales de levantamiento del secreto bancario han sido un dato aportado por las unidades administradoras de los tribunales tributarios y aduaneros, no obstante no contar con una interpretación de esa cifra.

El Honorable Senador señor Montes reiteró que no se está planteando una fiscalización o investigación, sino que un concepto totalmente distinto, que es que el sistema provea señales para que el Servicio de Impuestos Internos pueda contrastar la información y pueda determinar si hay alguna situación que no corresponda.

Observó que este sistema existe en otros lugares en que los bancos e instituciones financieras proveen la información y la investigación requerirá de todas formas un trámite ante la autoridad judicial, pero eso es posterior y será no solo para revisar los saldos, sino que las operaciones mismas, siendo una situación totalmente distinta, de manera que la mezcla de ambos temas produce confusión.

Precisó que no se busca que se investigue, sino que se entreguen las señales, el movimiento global sin especificar las operaciones mismas y en caso de que se quiera revisar las operaciones porque existen inconsistencias tendrá el Servicio que solicitar la autorización judicial que exige la legislación, lo que no se busca cambiar.

Apuntó que resulta difícil determinar una irregularidad si hay que solicitarle al contribuyente a quien se va a investigar, autorización primero y luego al juez.

Señaló que se persigue que la información esté disponible, lo cual resulta importante dada la coyuntura actual en que no se puede olvidar que se está en un período de restricción de recursos y una de las vertientes además de las exenciones tributarias va a ser la evasión que se tiene que disminuir, toda vez que el país no tendrá reservas y cuando se habla de cuarto retiro se hace en el marco de decir el efecto que tiene en una coyuntura determinada en la economía y de las previsiones y no en una coyuntura abstracta.

Aseveró que el hecho de generar más ingresos tributarios es parte de la ecuación para resolver el problema, por ello la

importancia del proyecto.

El Honorable Senador señor Coloma señaló que no entiende esta iniciativa de la coyuntura en virtud de la contracción económica, sino que entiende que es un proyecto que tiene mérito en sí mismo, y no se trata de que cuando hay un conjunto de políticas públicas que van a disminuir las finanzas se busque por otro lado, de modo que consideró este proyecto más general referido a cómo debiera funcionar mejor el sistema tributario.

Planteó que a su juicio eso es parte de la realidad y que tiene que ver con otros temas, como las garantías y los derechos de las personas, y eso es lo que se planteó originalmente y atendido que no ha habido ninguna evidencia de que haya habido dificultades cuando ha sido necesario conocer los saldos o movimientos de alguna cuenta bancaria es del parecer de insistir en esta línea en lugar de buscar otra que desde su perspectiva violenta otro tipo de garantías.

Expresó que existe una reflexión detrás que más bien apunta en un sentido distinto de lo propuesto, entendiendo que si hay además de eso oportunidades de mejorar lo que hay debiera aprovecharse, que es lo que plantea la indicación del Gobierno, sin que se trate, a su juicio, de momentos políticos.

Señaló que, sin perjuicio de concordar en que el momento actual es muy difícil, tiene dudas en cuanto a si esta es la fórmula de resolver el mal momento que vive el país, con decisiones que podrían afectar más las arcas fiscales o producir el alza de la inflación.

El Honorable Senador señor Montes expresó estar convencido de que el tema de la generación de ingresos fiscales es una materia de urgencia, y sostuvo que, teniendo en cuenta que a la iniciativa todavía le queda un largo recorrido en su tramitación, toda vez que debe ir luego a la Sala y posteriormente a la Cámara de Diputados, se requiere avanzar en la tramitación, porque hay que asumir los problemas y una de las cosas que tiene a la política debilitada es que no responde adecuadamente y en los momentos adecuados.

Hizo presente que esta materia debió haberse analizado muchos años antes y no se ha encontrado la fórmula, por lo que ahora se busca intentar con este proyecto y otras ideas y por otra parte el Gobierno llega con esta indicación que en su opinión es no hacer nada y frente a no hacer nada se plantea que el sistema tenga más información.

--Puesta en votación la indicación número 2, fue rechazada con tres votos en contra, de los Honorables Senadores

señora Rincón y señores Lagos y Montes, y dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Coloma y García.

o o o

El artículo 85 bis que incorpora el artículo único aprobado en general dispone textualmente lo siguiente:

“Artículo 85 bis. Los bancos y las instituciones financieras señaladas en este artículo, deberán proporcionar al Servicio información sobre los saldos de cuentas financieras y sumas de abonos que mantengan respecto de titulares que sean personas o patrimonios de afectación, que tengan domicilio o residencia en Chile o se hayan constituido o establecido en el país.

a) Instituciones financieras obligadas a reportar.

Estarán obligadas a reportar aquellas instituciones financieras sujetas a la fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero y por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

b) Cuentas Financieras a reportar.

Para los efectos de este artículo, son cuentas financieras las cuentas corrientes, de depósito, de custodia; contratos de seguro con o sin valor de rescate y los contratos de anualidades, todos mantenidos u ofrecidos por una institución financiera.

Son cuentas de depósito, toda cuenta comercial, cuenta corriente, cuenta de ahorro, o cuenta a plazo, u otra cuenta identificada mediante un certificado de depósito, de ahorro, de inversión o deuda, o un instrumento similar, mantenida por una institución financiera en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar. Las cuentas de depósito comprenden también los montos que posea una compañía de seguros con arreglo a un contrato de inversión garantizada o un acuerdo similar para el pago o anotación en cuenta de los correspondientes intereses.

Son cuentas de custodia, aquellas cuentas, distintas de un contrato de seguros o un contrato de anualidades, en la que se mantienen uno o varios activos financieros en beneficio de un tercero.

Son contratos de seguro, aquellos contratos, distintos de los contratos de anualidades, conforme al cual el emisor acuerda pagar un importe en caso de que se materialice una contingencia especificada que entrañe un fallecimiento, enfermedad, accidente,

responsabilidad o riesgo patrimonial.

Son contratos de seguro con valor de rescate, aquellos contratos de seguro (distinto de un contrato de reaseguro entre dos compañías aseguradoras) que tienen un valor en efectivo.

Son contratos de anualidades, aquellos en virtud del cual el emisor acuerda efectuar pagos durante un período determinado total o parcialmente por referencia a la expectativa de vida de una o varias personas naturales. El término también incluye un contrato que sea considerado un Contrato de Anualidades de conformidad con la legislación, regulación o práctica de la jurisdicción, donde se celebra el mismo y por el cual el emisor acuerda realizar pagos por un periodo de años.

c) Identificación de las cuentas financieras

Las instituciones financieras deberán informar el saldo o valor, así como la suma de los abonos efectuados a las cuentas financieras pertenecientes a los titulares de las mismas señalados en el literal d), únicamente cuando el saldo o suma de abonos efectuados a dichas cuentas, individualmente consideradas o en su conjunto, registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 Unidades de Fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan.

Por abono se entenderá la totalidad de transferencias, pagos o cualquier otra cantidad que implique un aumento del saldo diario, semanal o mensual de la referida cuenta, independientemente de quién lo haya efectuado. Por saldo, se entenderá el valor o situación final de la cuenta a un momento determinado, una vez efectuados los cargos y abonos con la periodicidad antes indicada.

Si se cancela o cierra una cuenta que con anterioridad ha sido informada al Servicio, se debe declarar la fecha en que se realizó la cancelación, junto con informar el saldo de esa cuenta a dicha fecha. En caso que se cancele o cierre una cuenta en el mismo período a informar en que se abrió, ésta debe ser informada si es que hasta la fecha de la cancelación o cierre el monto del saldo o valor de las cuentas financieras es igual o superior a las 1.500 Unidades de Fomento, según el valor de esta unidad el último día del mes al que corresponda al abono o saldo.

Para establecer el límite de 1.500 Unidades de Fomento, si la cuenta se encuentra expresada en dólares de los Estados Unidos de América, o en otra moneda distinta del peso chileno o pactada en un índice de reajustabilidad, se deberá realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, publicado el último día del mes calendario del período que se informa, o del

índice de reajustabilidad en su caso, y luego se convertirá a su valor en Unidades de Fomento, según el valor de ésta el último día del mes al que corresponda al abono o saldo que se informa.

d) Identificación del titular o titulares, controladores o beneficiarios finales.

Se entregará información sobre los titulares de cuentas financieras, controladores de dichos titulares, o beneficiarios finales, que sean contribuyentes personas naturales, jurídicas, patrimonios de afectación u otras entidades que tengan domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país. Tratándose de cuentas financieras abiertas por dos o más personas o entidades, se considerará como titulares a todas las personas o entidades registradas o identificadas como tales por la empresa del sistema financiero.

e) Periodo de entrega de la información.

La información que da cuenta este artículo deberá ser remitida al Servicio de manera anual, a más tardar dentro de los 15 primeros días del mes de marzo de cada año, respecto de los saldos y sumas de abonos efectuados en las cuentas financieras durante el año calendario anterior. El informe deberá indicar el saldo final que registre cada cuenta financiera en cada mes correspondiente al año calendario que se informa, y la suma de abonos de cada cuenta financiera efectuados en el mes.

f) Moneda a informar.

Los saldos y sumas de abonos antes señalados se informarán en pesos chilenos.

Si la cuenta se encuentra expresada en dólares de los Estados Unidos de América, en otra moneda distinta del peso chileno o pactada en un índice de reajustabilidad, se debe realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, publicado el último día del mes calendario que se informa, o del índice de reajustabilidad en su caso.

Tratándose de la cancelación de la cuenta, se debe realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, o del índice de reajustabilidad en su caso, en la fecha de la cancelación o cierre de la cuenta.

g) Obligaciones del Servicio.

La información a la que accederá el Servicio con

motivo de lo dispuesto en este artículo tendrá el carácter de reservada conforme las reglas establecidas en los artículos 35 y 206 y no podrá ser divulgada en forma alguna, pudiendo ser utilizada únicamente para cumplir con los objetivos de fiscalización que le son propios.

h) Sanciones.

El incumplimiento de entregar la información al Servicio de manera oportuna y completa por parte de una institución financiera, será sancionado con una multa equivalente a 1 unidad tributaria anual por cada una de las cuentas respecto de las cuales se infrinja cualquiera de los deberes señalados. Con todo, la multa total anual a pagar por cada institución no podrá exceder de 500 unidades tributarias anuales. Notificada la institución financiera de su incumplimiento total o parcial por parte del Servicio, y transcurrido el plazo de un mes desde dicha notificación sin que ésta haya entregado la información requerida, no será aplicable el límite a la multa antes señalada. La entrega de información maliciosamente falsa por parte del titular de la cuenta o sus controladores a la institución financiera será sancionada con la multa establecida en el párrafo final del número 4 del artículo 97.”.

En el artículo 85 bis recayeron las indicaciones números 2 bis, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater y 9:

o o o

La indicación número 2 bis, de los Honorables Senadores señores Lagos y Montes, sustituye el artículo 85 bis propuesto por el siguiente:

“Artículo 85 bis. Las entidades financieras señaladas en este artículo, deberán proporcionar al Servicio información sobre los saldos de productos o instrumentos de captación, inversión o servicio de custodia que se indican a continuación, así como las sumas de abonos que mantengan sus titulares que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile o se hayan constituido o establecido en el país.

a) Entidades financieras obligadas a reportar.

Estarán obligadas a reportar los Bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito sujetos a la fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, y las Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

También deberán reportar las compañías de

seguro y las entidades privadas de depósito y custodia de valores.

b) Productos e instrumentos a reportar.

Las entidades financieras deberán reportar información sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósito a la vista o vales vista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista, cuentas de ahorro a plazo para la vivienda, cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos, y cuentas de ahorro a plazo para la Educación Superior reguladas por el Banco Central de Chile conforme al artículo 35 N°1 de su ley orgánica.

Además, se entienden incluidas las cuentas de custodia reguladas en la Ley N°18.876 que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores.

También deberá reportarse información respecto de los contratos de seguros con cuenta de inversión o ahorro, o valor de rescate, o que garanticen un capital al término de un plazo, además de contratos de rentas privadas, ya sean vitalicias o temporales.

c) Información a reportar.

Las entidades financieras deberán realizar un reporte que contenga la siguiente información: identificación de la entidad financiera, identificación del titular, periodo de reporte, el tipo de producto, número de registro interno del producto, monto, estado de vigencia del producto, y fecha de cierre del producto, cuando corresponda.

Las entidades financieras deberán informar el saldo o valor, así como la suma de los abonos efectuados a los productos o instrumentos a reportar pertenecientes a los titulares de las mismas señalados en el literal d), únicamente cuando el saldo o suma de abonos efectuados a dichos productos o instrumentos, individualmente consideradas o en su conjunto, registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 Unidades de Fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan.

Para establecer el límite de 1.500 Unidades de Fomento, si el producto o instrumento a reportar se encuentra expresado en dólares de los Estados Unidos de América, o en otra moneda distinta del peso chileno o pactada en un índice de reajustabilidad, se deberá realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, publicado el último día del mes calendario del período que se informa, o del índice de reajustabilidad en su caso, y luego se convertirá a su valor en Unidades de Fomento, según el valor de ésta el

último día del mes al que corresponda al abono o saldo que se informa.

d) Identificación del titular o titulares, controladores y beneficiarios finales.

Se entregará información sobre los titulares de productos o instrumentos a reportar, incluyendo su rol único tributario. Además, se entregará información sobre los controladores de dichos titulares, y beneficiarios finales, que sean contribuyentes personas naturales o jurídicas, patrimonios de afectación u otras entidades que tengan domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país. Tratándose de productos o instrumentos suscritos por dos o más personas o entidades, se considerará como titulares a todas aquellas registradas o identificadas como tales por la entidad financiera. En este último caso, se repetirá la información reportada tantas veces como titulares tenga el producto o instrumento a reportar.

e) Periodo de entrega de la información.

La información que da cuenta este artículo deberá ser remitida al Servicio de manera anual, a más tardar dentro de los 15 primeros días del mes de marzo de cada año, respecto de los saldos y sumas de abonos efectuados en los productos e instrumentos a reportar durante el año calendario anterior. El informe deberá indicar el saldo final que registre cada producto e instrumento a reportar en cada día y en cada mes correspondiente al año calendario que se informa, y la suma de abonos de cada producto e instrumento a reportar efectuados en el mes.

f) Monto reportado.

El monto reportado incluirá saldos, valor, prima y sumas de abonos que corresponda según el producto o instrumento a reportar.

Por abono se entenderá la totalidad de transferencias, pagos o cualquier otra cantidad en favor del titular, independientemente de quién lo haya efectuado. Por saldo, se entenderá el valor o situación final de los productos o instrumentos a reportar al cierre de cada día, una vez efectuados los cargos y abonos.

g) Estado de vigencia del producto e instrumento a reportar.

Deberá consignarse la vigencia del producto o instrumento reportado. En caso de que el producto o instrumento a reportar no esté vigente, deberá informarse además la fecha de cierre de este, junto con informar el saldo de esa cuenta a dicha fecha. En caso que se cancele o

cierre una cuenta en el mismo período a informar en que se abrió, ésta debe ser informada si es que hasta la fecha de la cancelación o cierre el monto del saldo o valor de las cuentas financieras es igual o superior a las 1.500 Unidades de Fomento, según el valor de esta unidad el último día del mes al que corresponda al abono o saldo.

h) Moneda a informar.

El monto reportado se informará en pesos chilenos y corresponderá a un único valor por cada producto o instrumento a reportar del titular por cada periodo que se reporte.

Si el producto o instrumento a reportar se encuentra expresado en dólares de los Estados Unidos de América, en otra moneda distinta del peso chileno o pactada en un índice de reajustabilidad, se debe realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, publicado el último día del mes calendario que se informa, o del índice de reajustabilidad en su caso.

Tratándose de la cancelación de un producto o instrumento a reportar, se debe realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, o del índice de reajustabilidad en su caso, en la fecha de la cancelación o cierre del producto o instrumento a reportar.

i) Obligaciones del Servicio.

La información a la que accederá el Servicio con motivo de lo dispuesto en este artículo tendrá el carácter de reservada conforme las reglas establecidas en los artículos 35 y 206 y no podrá ser divulgada en forma alguna, pudiendo ser utilizada únicamente para cumplir con los objetivos de fiscalización que le son propios.

j) Sanciones.

El incumplimiento de entregar la información al Servicio de manera oportuna y completa por parte de una entidad financiera, será sancionado con una multa equivalente a 1 unidad tributaria anual por cada uno de los productos o instrumentos a reportar respecto de las cuales se infrinja cualquiera de los deberes señalados. Con todo, la multa total anual a pagar por cada institución no podrá exceder de 500 unidades tributarias anuales. Notificada la institución financiera de su incumplimiento total o parcial por parte del Servicio, y transcurrido el plazo de un mes desde dicha notificación sin que ésta haya entregado la información requerida, no será aplicable el límite a la multa antes señalada. La entrega de información maliciosamente falsa por parte del titular del producto o instrumento a reportar o sus controladores a la institución financiera será sancionada con la

multa establecida en el párrafo final del número 4 del artículo 97.”.

En **sesión de 23 de noviembre de 2021**, El **Honorable Senador señor Coloma** indicó que ha existido un largo debate sobre la materia, y si bien él no es partidario de la disposición, estima que ha llegado el momento de someterla a votación.

El **Honorable Senador señor García** expresó que buena parte de la información el SII la tiene y puede que resulte innecesaria en varios aspectos, por lo que se abstendría.

--Puesta en votación la indicación número 2 bis, ésta fue aprobada por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Rincón y señores Lagos y Montes, un voto en contra del Honorable Senador señor Coloma, y una abstención del Honorable Senador señor García, con enmiendas que se consignarán en su oportunidad originadas en la aprobación de otras indicaciones que modifican el texto del artículo 85 bis.

Inciso primero

La **indicación número 3, de la Honorable Senadora señora Rincón**, intercala, a continuación de la palabra “abonos”, la siguiente expresión: “y cargos”.

--La indicación número 3 fue retirada por su autora, quien anticipó el retiro de la indicación número 10, del mismo tenor, recaída en el artículo transitorio.

Letra c)

La **indicación número 4, de la Honorable Senadora señora Rincón**, reemplaza el guarismo “1.500” por “750”.

--La indicación número 4 fue retirada por su autora.

Párrafo primero

La **indicación número 5, del Honorable Senador señor Montes**, agrega, a continuación de la frase “1.500 Unidades de Fomento” y antes de la expresión “, sin atender”, lo siguiente: “cuando el

titular sea una persona jurídica, e igual o superior a 500 Unidades de Fomento cuando el titular sean personas naturales o patrimonios de afectación, en todos los casos”.

--La indicación número 5 fue retirada por su autor.

Párrafo tercero

La **indicación número 5 bis, del Honorable Senador señor Coloma**, elimina su oración inicial “Si se cancela o cierra una cuenta que con anterioridad ha sido informada al Servicio, se debe declarar la fecha en que se realizó la cancelación, junto con informar el saldo de esa cuenta a dicha fecha.”.

El **Honorable Senador señor Coloma** planteó que el objetivo es no tener que informar nuevamente algo que en su momento ya había sido informado.

El **Honorable Senador señor Montes** señaló que si se cierra una cuenta la información debe ser reportada. Estimó que lo anterior pertenece a la operatoria misma de las cuentas.

--Puesta en votación la indicación número 5 bis, ésta fue aprobada, con enmiendas derivadas de la aprobación de la indicación número 2 bis, sustitutiva del artículo 85 bis, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma, García, Lagos y Montes.

Párrafos tercero y cuarto

La **indicación número 6, del Honorable Senador señor Montes**, agrega, a continuación del número “1.500” y antes de las palabras “Unidades de Fomento”, lo siguiente: “o 500”.

--La indicación número 6 fue retirada por su autor.

o o o o o

La **indicación número 7, de la Honorable**

Senadora señora Rincón, incorpora un párrafo, nuevo, del siguiente tenor:

“En todo momento las instituciones obligadas son garantes del adecuado tratamiento de datos personales recabados y, conjuntamente con la información que remitan al Servicio, deberán comunicar a la persona o institución de quien se recaben los datos que le conciernan, a lo menos, la identidad del responsable del manejo de datos, el fin del tratamiento de que van a ser objeto los datos y el destinatario o destinación de los datos.”.

El **Honorable Senador señor Montes** señaló que el Servicio tendrá que definir cómo se establece la responsabilidad en el manejo de datos.

--Puesta en votación la indicación número 7, ésta fue aprobada con enmiendas, de la forma que se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma, García, Lagos y Montes.

o o o o o

La **indicación número 8, de la Honorable Senadora señora Rincón**, incorpora un párrafo, nuevo, del siguiente tenor:

“En los mismos términos y plazos, las instituciones indicadas en el literal a), deberán reportar al Servicio Nacional de Aduanas la información referida en el literal c) que corresponda, para los efectos que el Servicio determine de acuerdo a sus fines y competencias en materia tributaria de fiscalización y control del comercio exterior.”.

La **Honorable Senadora señora Rincón** expuso, como ejemplo, la situación de estafas que se producen en las regiones del Maule y O’Higgins, en que una supuesta empresa de Estados Unidos llega a acuerdo con productores agrícolas pagando el primer año de producción, pero al segundo año rechaza la fruta entregada que ya salió al exterior, y demanda al productor por el monto total del contrato, siendo que las facturas ya han sido emitidas y la producción se encuentra fuera del país.

Explicó que el ejemplo anterior muestra que debe involucrarse al Servicio Nacional de Aduanas en el combate del lavado de activos y tráfico.

El **Honorable Senador señor Coloma** planteó

que debe analizarse la materia en su mérito dentro de legislación específica de Aduanas.

La **Honorable Senadora señora Rincón** señaló que, en el entendido que debe legislarse sobre el punto, retira la indicación en este proyecto de ley a la espera de incorporarla específicamente en Aduanas.

El **Honorable Senador señor Montes** expresó que el tema de fondo es la coordinación que debe existir -y que falta- entre el SII y el Servicio Nacional de Aduanas. Recordó que en su momento el asunto fue propuesto por el entonces Director del SII, Javier Etcheberry, pero no fue aprobado ante las alegaciones que no se podía subordinar el SNA ante el SII.

--La indicación número 8 fue retirada por su autora.

o o o o o

o o o o o

La **indicación número 8 bis, del Honorable Senador señor Coloma**, agrega el siguiente párrafo, nuevo:

“Junto con remitir la información al Servicio, las instituciones financieras deberán comunicar a los respectivos titulares de las cuentas que hayan sido incluidas en el informe, acerca de la entrega de estos datos al Servicio, poniendo en su conocimiento tanto los datos entregados como los fundamentos legales por los cuales fueron informados.”.

La Comisión consideró apropiado contemplar en una sola disposición, del tenor que se señala en seguida, las ideas propuestas en las indicaciones números 7 y 8 bis, que tienen un fundamento similar:

“En todo momento las instituciones obligadas son garantes del adecuado tratamiento de datos personales recabados y, conjuntamente con la información que remitan al Servicio, deberán comunicar a la persona o institución de quien se recaben los datos que le conciernan, a lo menos, la identidad del responsable del manejo de datos, el fin del tratamiento de que van a ser objeto los datos, los fundamentos legales por los cuales fueron informados y el destinatario o destinación de los

datos.”.

--Puesta en votación la indicación número 8 bis, ésta fue aprobada con enmiendas, en la forma que se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma, García, Lagos y Montes.

o o o o o

La **indicación número 8 ter, del Honorable Senador señor Coloma**, consulta un párrafo final, nuevo, del tenor que se señala:

“La información recabada por el Servicio mediante las disposiciones de este artículo que no dé lugar a una gestión de auditoría, fiscalización o sanción posterior, deberá ser eliminada en el plazo máximo de 6 meses desde que fue recepcionada. Asimismo, las instituciones financieras deberán eliminar los informes que elaboren de conformidad a las disposiciones de este artículo al cumplirse 30 días desde que los hayan remitido al Servicio.”.

El **Honorable Senador señor Coloma** sostuvo que debe existir un plazo durante el cual la información debe mantenerse, pero debe llegar un momento en el que la misma se elimine.

El **Honorable Senador señor Montes** planteó que podría estar de acuerdo si el plazo se amplía a 1 año y siempre que el Servicio de Impuestos Internos manifieste su conformidad al respecto.

El **señor Guerrero** apuntó que debería hacerse el plazo que tiene el SII para fiscalizar las infracciones tributarias y su prescripción. Asimismo, observó que dependerá de la capacidad del SII para revisar.

La **Honorable Senadora señora Rincón** expresó que la información entregada es distinta a una infracción y su posible persecución. El objetivo es que el Servicio no se quede con la información como si fuese un banco de datos.

--Puesta en votación la indicación número 8 ter, ésta fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Rincón y

señores Coloma, García, Lagos y Montes.

o o o o o

Letra g)

La **indicación número 8 quater, del Honorable Senador señor Coloma**, agrega la siguiente oración final: “La infracción de la reserva de la información obtenida mediante las disposiciones de este artículo se sancionará con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a máximo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.”.

El **Honorable Senador señor Coloma** planteó que es la misma sanción que se aplica a los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero ante la misma infracción.

La **Honorable Senadora señora Rincón** preguntó qué ocurre en caso de reincidencia.

El **señor Riquelme** manifestó que parece muy razonable replicar la norma que existe para la UAF.

--Puesta en votación la indicación número 8 quater, ésta fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma, García, Lagos y Montes.

o o o o o

La **indicación número 9, de la Honorable Senadora señora Rincón**, intercala una letra, nueva, del siguiente tenor:

“...) Rectificación, ampliación, complementación o aclaración del Servicio.

El Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Nacional de Aduanas, podrán requerir de las instituciones obligadas a reportar, con audiencia del interesado si así fuere procedente, la rectificación, ampliación, complementación o aclaración de uno o más datos informados.”.

La **Honorable Senadora señora Rincón** propuso eliminar la referencia al SNA.

El **Honorable Senador señor García** consultó cuál es el alcance de la expresión “interesado” y si existe obligación de asistir.

El **señor Riquelme** refirió que el artículo 63 del Código Tributario contempla la citación para todos los efectos.

La **Honorable Senadora señora Rincón** señaló que no existe contradicción con la citada norma.

La **señora Suazo** planteó que se establece un procedimiento paralelo al general del Código Tributario, procedimiento este último que es mucho más amplio y resguarda de mejor modo los derechos del contribuyente.

La **Honorable Senadora señora Rincón** señaló que la presente disposición en nada obsta lo dispuesto por el artículo 63 del Código Tributario.

El **Honorable Senador señor García** expresó que le parece adecuado que se invite al interesado y, por lo mismo, lo que podría hacerse es incluir una referencia al artículo 63 del Código Tributario.

El **Honorable Senador señor Lagos** manifestó que el requerido es la institución financiera y, si se quiere, se puede invitar a la persona que corresponda pero que no está obligado por la norma.

El **señor Saffie** planteó entender lo mismo que expresó el Senador Lagos y expuso que resulta conveniente reforzar los derechos de las personas y en nada se pone en riesgo el sistema establecido por el artículo 63 del Código Tributario.

La **señora Suazo** sostuvo que si se entiende así la indicación sería innecesaria.

El **señor Saffie** respondió que la indicación da la posibilidad de concurrir ante una invitación del Servicio, pero sin que exista una citación propiamente tal, por lo que existe una diferencia y no hay un cambio respecto de las reglas del citado artículo 63, ni se trata de una nueva regla o una regla paralela.

El **señor Guerrero** concordó con lo expuesto por el señor Saffie, planteando que normalmente el Servicio interactúa y se comunica de esta forma con los contribuyentes y es diferente a una fiscalización, que es la que incluye citación.

--Puesta en votación la indicación número 9, ésta fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma, García, Lagos y Montes.

o o o o o

Artículo transitorio

Establece que la obligación de informar a que se refiere el artículo único de esta ley se aplicará respecto de los saldos y sumas de abonos identificados en las cuentas financieras a partir del tercer mes siguiente a la fecha de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

La indicación número A 10, de los Honorables Senadores señores Lagos y Montes, lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo transitorio.- La obligación de informar a que se refiere el artículo único de esta ley se aplicará respecto de los montos identificados a partir del tercer mes siguiente a la fecha de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.

El Honorable Senador señor Coloma observó que se debe aclarar los conceptos que se incluyen para alcanzar el monto que implica la obligación de informar.

--Puesta en votación la indicación número A 10, fue aprobada por dos votos a favor de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Montes, y una abstención del Honorable Senador señor García, con una enmienda formal de adecuación.

La indicación número 10, de la Honorable Senadora señora Rincón, intercala, a continuación de la palabra “abonos”, la expresión “y cargos”.

--La indicación número 10 fue retirada por su autora, en concordancia con el retiro de la indicación número 3.

- - -

MODIFICACIONES

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, con las siguientes modificaciones:

ARTÍCULO ÚNICO

Ha reemplazado su encabezamiento por el siguiente:

“Artículo único.- Modifícase el Código Tributario contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974, de la siguiente manera.”.

(Adecuación formal)

o o o o o

Ha consultado en el artículo único un numeral 1, del siguiente tenor:

“1.- Reemplázase el número 2 del artículo 33 bis por el siguiente:

“2. Normas especiales de información sobre determinadas inversiones.

A. Los contribuyentes acogidos a las disposiciones del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta deberán aplicar, respecto de las inversiones que hayan efectuado, las siguientes reglas:

a) Inversiones en el extranjero: deberán informar al Servicio, hasta el 30 de junio de cada año comercial, mediante la presentación de una declaración, las inversiones realizadas en el extranjero durante el año comercial anterior, con indicación del monto y tipo de inversión, del país o territorio en que se encuentre. En caso que estas inversiones fuesen en acciones, cuotas o derechos, se deberá informar el porcentaje de participación en el capital que representan de la sociedad o entidad constituida en el extranjero. Respecto de las inversiones en el extranjero, se deberá informar el destino de los fondos invertidos. Cuando las inversiones a que se refiere esta letra se hayan efectuado directa o indirectamente en países o territorios que califiquen como de baja o nula tributación conforme a lo dispuesto en el artículo 41 H, además de la

presentación de la declaración referida, deberán informar anualmente, en el plazo señalado, el estado de dichas inversiones, con indicación de sus aumentos o disminuciones, el destino que las entidades receptoras han dado a los fondos respectivos, así como cualquier otra información que requiera el Servicio sobre tales inversiones. La entrega de información incompleta o falsa en las declaraciones que establece esta letra, se sancionará en la forma prevista en el primer párrafo, del número 4 del artículo 97 del Código Tributario.

b) Inversiones en Chile: las empresas, entidades o sociedades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en Chile que obtengan rentas pasivas de acuerdo a los criterios que establece el artículo 41 G, no podrán ser utilizadas en forma abusiva para diferir o disminuir la tributación de los impuestos finales de sus propietarios, socios o accionistas. De acuerdo a lo anterior, cuando se haya determinado la existencia de abuso o simulación conforme a lo dispuesto en los artículos 4° bis y siguientes del Código Tributario, se aplicará respecto del monto de tales inversiones la tributación que corresponda a los beneficiarios de las rentas o cantidades respectivas y las sanciones que procedieren. En todo caso, el contribuyente podrá acreditar que las inversiones fueron realizadas con sumas que corresponden a su capital o a ingresos no constitutivos de renta, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que cuando el capital propio tributario del contribuyente excede de la suma de su capital y de los referidos ingresos no constitutivos de renta, tales inversiones se han efectuado, en el exceso, con cantidades que no han cumplido totalmente con los impuestos de la presente ley. No obstante lo anterior, cuando se determine que los actos, contratos y operaciones respectivos se han llevado a cabo maliciosamente con la finalidad de evitar, disminuir o postergar la aplicación de los impuestos global complementario o adicional, ello será sancionado conforme a lo dispuesto en el primer párrafo, del número 4 del artículo 97 del Código Tributario.

B. Los contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en el país, sean o no sujetos del impuesto a la renta, que tengan o adquieran en un año calendario cualquiera la calidad de constituyente o "settlor", beneficiario, "trustee" o administrador de un "trust" creado conforme a disposiciones de derecho extranjero, deberán informar anualmente al Servicio, mediante la presentación de una declaración, los siguientes antecedentes:

a) El nombre o denominación del "trust", fecha de creación, país de origen, entendiéndose por tal el país cuya legislación rige los efectos de las disposiciones del "trust"; país de residencia para efectos tributarios; número de identificación tributaria utilizado en el extranjero en los actos ejecutados en relación con los bienes del "trust", indicando el país que otorgó dicho número; número de identificación para fines tributarios del "trust"; y patrimonio del "trust".

b) El nombre, la razón social o la denominación del constituyente o “settlor”, del “trustee”, de los administradores y de los beneficiarios del mismo, sus respectivos domicilios, países de residencia para efectos tributarios; número de identificación para los mismos fines, indicando el país que otorgó dicho número.

c) Si la obtención de beneficios por parte de él o los beneficiarios del “trust” está sujeta a la voluntad del “trustee”, otra condición, un plazo o modalidad. Además, deberá informarse si existen clases o tipos distintos de beneficiarios. Cuando una determinada clase de beneficiarios pudiere incluir a personas que no sean conocidas o no hayan sido determinadas al tiempo de la declaración, por no haber nacido o porque la referida clase permite que nuevas personas o entidades se incorporen a ella, deberá indicarse dicha circunstancia en la declaración. Cuando los bienes del “trust” deban o puedan aplicarse a un fin determinado, deberá informarse detalladamente dicho fin. Cuando fuere el caso, deberá informarse el cambio del “trustee” o administrador del “trust”, de sus funciones como tal, o la revocación del “trust”. Además, deberá informarse el carácter revocable o irrevocable del “trust”, con la indicación de las causales de revocación. Sólo estarán obligados a la entrega de la información de que se trate aquellos beneficiarios que se encuentren ejerciendo su calidad de tales conforme a los términos del “trust” o acuerdo y quienes hayan tomado conocimiento de dicha calidad, aun cuando no se encuentren gozando de los beneficios por no haberse cumplido el plazo, condición o modalidad fijado en el acto o contrato.

Cuando la información proporcionada en la declaración respectiva haya variado, las personas o entidades obligadas deberán presentar, una nueva declaración detallando los nuevos antecedentes, ello hasta el 30 de junio del año siguiente a aquel en que los antecedentes proporcionados en la declaración previa hayan cambiado.

Para los fines de este número, el término “trust” se refiere a las relaciones jurídicas creadas de acuerdo a normas de derecho extranjero, sea por acto entre vivos o por causa de muerte, por una persona en calidad de constituyente o settlor, mediante la transmisión o transferencia de bienes, los cuales quedan bajo el control de un “trustee” o administrador, en interés de uno o más beneficiarios o con un fin determinado.

Se entenderá también por “trust” para estos fines, el conjunto de relaciones jurídicas que, independientemente de su denominación, cumplan con las siguientes características: i) Los bienes del “trust” constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio personal del “trustee” o administrador; ii) El título sobre los bienes del “trust” se establece en nombre del “trustee”, del administrador o de otra persona por cuenta del “trustee” o administrador; iii) El “trustee” o administrador tiene la

facultad y la obligación, de las que debe rendir cuenta, de administrar, gestionar o disponer de los bienes según las condiciones del “trust” y las obligaciones particulares que la ley extranjera le imponga. El hecho de que el constituyente o “settlor” conserve ciertas prerrogativas o que el “trustee” posea ciertos derechos como beneficiario no es incompatible necesariamente con la existencia de un “trust”.

El término “trust” también incluirá cualquier relación jurídica creada de acuerdo a normas de derecho extranjero, en la que una persona en calidad de constituyente, transmita o transfiera el dominio de bienes, los cuales quedan bajo el control de una o más personas o “trustees”, para el beneficio de una o más personas o entidades o con un fin determinado, y que constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio personal del “trustee” o administrador.

En caso de no presentarse la referida declaración por parte del constituyente del “trust”, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la constitución del “trust” constituye abuso o simulación conforme a lo dispuesto en los artículos 4° bis y siguientes del Código Tributario, aplicándose la tributación que corresponda de acuerdo a la calidad de los intervinientes y la naturaleza jurídica de las operaciones. La entrega de información incompleta o falsa en las declaraciones que establece esta letra, se sancionará en la forma prevista en el primer párrafo del número 4 del artículo 97, del Código Tributario.

C. Sanciones. El retardo u omisión en la presentación de las declaraciones que establece este número, o la presentación de declaraciones incompletas o con antecedentes erróneos, además de los efectos jurídicos a que se refieren las letras precedentes, será sancionada con multa de diez unidades tributarias anuales, incrementada con una unidad tributaria anual adicional por cada mes de retraso, con tope de cien unidades tributarias anuales. La referida multa se aplicará conforme al procedimiento establecido en el artículo 161 de este Código.”.

(Indicación 1 bis. Mayoría 2x1 abstención)

o o o o o

o o o o o

Ha contemplado en el artículo único un numeral 2 del tenor que se señala:

“2.- Incorpórase un artículo 85 bis del siguiente tenor:”.

(Adecuación formal)

o o o o o

Artículo 85 bis

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 85 bis. Las entidades financieras señaladas en este artículo deberán proporcionar al Servicio información sobre los saldos de productos o instrumentos de captación, inversión o servicio de custodia que se indican a continuación, así como las sumas de abonos que mantengan sus titulares que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país.

a) Entidades financieras obligadas a reportar.

Estarán obligados a reportar los Bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito sujetos a la fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, y las Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

También deberán reportar las compañías de seguro y las entidades privadas de depósito y custodia de valores.

b) Productos e instrumentos a reportar.

Las entidades financieras deberán reportar información sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista o vales vista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista, cuentas de ahorro a plazo para la vivienda, cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos, y cuentas de ahorro a plazo para la Educación Superior reguladas por el Banco Central de Chile conforme al artículo 35 N°1 de su ley orgánica.

Además, se entienden incluidas las cuentas de custodia reguladas en la ley N°18.876 que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores.

También deberá reportarse información respecto de los contratos de seguros con cuenta de inversión o ahorro, o valor de rescate, o que garanticen un capital al término de un plazo, además de contratos de rentas privadas, ya sean vitalicias o temporales.

c) Información a reportar.

Las entidades financieras deberán realizar un reporte que contenga la siguiente información: identificación de la entidad financiera, identificación del titular, periodo de reporte, el tipo de producto, número de registro interno del producto, monto, estado de vigencia del producto, y fecha de cierre del producto, cuando corresponda.

Las entidades financieras deberán informar el saldo o valor, así como la suma de los abonos efectuados a los productos o instrumentos a reportar pertenecientes a los titulares de las mismas señalados en el literal d), únicamente cuando el saldo o suma de abonos efectuados a dichos productos o instrumentos, individualmente considerados o en su conjunto, registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 unidades de fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan.

Para establecer el límite de 1.500 unidades de fomento, si el producto o instrumento a reportar se encuentra expresado en dólares de los Estados Unidos de América, o en otra moneda distinta del peso chileno o pactada en un índice de reajustabilidad, se deberá realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, publicado el último día del mes calendario del período que se informa, o del índice de reajustabilidad en su caso, y luego se convertirá a su valor en unidades de fomento, según el valor de ésta el último día del mes al que corresponda al abono o saldo que se informa.

d) Identificación del titular o titulares, controladores y beneficiarios finales.

Se entregará información sobre los titulares de productos o instrumentos a reportar, incluyendo su rol único tributario. Además, se entregará información sobre los controladores de dichos titulares y beneficiarios finales que sean contribuyentes personas naturales o jurídicas, patrimonios de afectación u otras entidades que tengan domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país. Tratándose de productos o instrumentos suscritos por dos o más personas o entidades, se considerará como titulares a todas aquellas registradas o identificadas como tales por la entidad financiera. En este último caso, se repetirá la información reportada tantas veces como titulares tenga el producto o instrumento a reportar.

e) Periodo de entrega de la información.

La información que da cuenta este artículo deberá ser remitida al Servicio de manera anual, a más tardar dentro de los 15 primeros días del mes de marzo de cada año, respecto de los saldos y sumas de abonos efectuados en los productos e instrumentos a reportar durante el año calendario anterior. El informe deberá indicar el saldo final que

registre cada producto e instrumento a reportar en cada día y en cada mes correspondiente al año calendario que se informa, y la suma de abonos de cada producto e instrumento a reportar efectuados en el mes.

En todo momento las instituciones obligadas son garantes del adecuado tratamiento de los datos personales recabados y, conjuntamente con la información que remitan al Servicio, deberán comunicar a la persona o institución de quien se recaben los datos que le conciernan, a lo menos, la identidad del responsable del manejo de datos, el fin del tratamiento de que van a ser objeto los datos, los fundamentos legales por los cuales fueron informados y el destinatario o destinación de los datos.

La información recabada por el Servicio mediante las disposiciones de este artículo que no dé lugar a una gestión de auditoría, fiscalización o sanción posterior, deberá ser eliminada en el plazo máximo de un año desde que fue recibida. Asimismo, las instituciones financieras deberán eliminar los informes que elaboren de conformidad a las disposiciones de este artículo al cumplirse 30 días desde que los hayan remitido al Servicio.

f) Monto reportado.

El monto reportado incluirá saldos, valor, prima y sumas de abonos que corresponda según el producto o instrumento a reportar.

Por abono se entenderá la totalidad de transferencias, pagos o cualquier otra cantidad en favor del titular, independientemente de quién lo haya efectuado. Por saldo, se entenderá el valor o situación final de los productos o instrumentos a reportar al cierre de cada día, una vez efectuados los cargos y abonos.

g) Estado de vigencia del producto e instrumento a reportar.

Deberá consignarse la vigencia del producto o instrumento reportado. En caso que se cancele o cierre una cuenta en el mismo período a informar en que se abrió, ésta debe ser informada si es que hasta la fecha de la cancelación o cierre el monto del saldo o valor de las cuentas financieras es igual o superior a las 1.500 unidades de fomento, según el valor de esta unidad el último día del mes al que corresponda al abono o saldo.

h) Moneda a informar.

El monto reportado se informará en pesos chilenos y corresponderá a un único valor por cada producto o instrumento a reportar

del titular por cada periodo que se reporte.

Si el producto o instrumento a reportar se encuentra expresado en dólares de los Estados Unidos de América, en otra moneda distinta del peso chileno o pactada en un índice de reajustabilidad, se debe realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, publicado el último día del mes calendario que se informa, o del índice de reajustabilidad en su caso.

Tratándose de la cancelación de un producto o instrumento a reportar, se debe realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, o del índice de reajustabilidad en su caso, en la fecha de la cancelación o cierre del producto o instrumento a reportar.

i) Rectificación, ampliación, complementación o aclaración del Servicio.

El Servicio de Impuestos Internos podrá requerir de las instituciones obligadas a reportar, con audiencia del interesado si así fuere procedente, la rectificación, ampliación, complementación o aclaración de uno o más datos informados.

j) Obligaciones del Servicio.

La información a la que accederá el Servicio con motivo de lo dispuesto en este artículo tendrá el carácter de reservada conforme las reglas establecidas en los artículos 35 y 206 y no podrá ser divulgada en forma alguna, pudiendo ser utilizada únicamente para cumplir con los objetivos de fiscalización que le son propios. La infracción de la reserva de la información obtenida mediante las disposiciones de este artículo se sancionará con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a máximo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

k) Sanciones.

El incumplimiento de entregar la información al Servicio de manera oportuna y completa por parte de una entidad financiera será sancionado con una multa equivalente a 1 unidad tributaria anual por cada uno de los productos o instrumentos a reportar respecto de los cuales se infrinja cualquiera de los deberes señalados. Con todo, la multa total anual a pagar por cada institución no podrá exceder de 500 unidades tributarias anuales. Notificada la institución financiera de su incumplimiento total o parcial por parte del Servicio, y transcurrido el plazo de un mes desde dicha notificación sin que ésta haya entregado la información requerida, no será aplicable el límite a la multa antes señalada. La entrega de información

maliciosamente falsa por parte del titular del producto o instrumento a reportar o sus controladores a la institución financiera será sancionada con la multa establecida en el párrafo final del número 4 del artículo 97.”.

(Indicaciones 2 bis, mayoría 3x1 en contra x1 abstención; 5 bis, 7, 8 bis, 8 ter, 8 quáter y 9, unanimidad 5x0).

Artículo transitorio

Lo ha sustituido por el que sigue:

“Artículo transitorio.- La obligación de informar a que se refiere el numeral 2 del artículo único de esta ley se aplicará respecto de los montos identificados a partir del tercer mes siguiente a la fecha de la publicación de la ley en el Diario Oficial.”.

(Indicación A 10. Mayoría 2x1 abstención)

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

De conformidad con las modificaciones precedentemente expuestas, el texto queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Modifícase el Código Tributario contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974, de la siguiente manera:

1.- Reemplázase el número 2 del artículo 33 bis por el siguiente:

“2. Normas especiales de información sobre determinadas inversiones.

A. Los contribuyentes acogidos a las disposiciones del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta deberán aplicar, respecto de las inversiones que hayan efectuado, las siguientes reglas:

a) Inversiones en el extranjero: deberán informar al Servicio, hasta el 30 de junio de cada año comercial, mediante la presentación de una declaración, las inversiones realizadas en el extranjero durante el año comercial anterior, con indicación del monto y tipo de inversión, del país o territorio en que se encuentre. En

caso que estas inversiones fuesen en acciones, cuotas o derechos, se deberá informar el porcentaje de participación en el capital que representan de la sociedad o entidad constituida en el extranjero. Respecto de las inversiones en el extranjero, se deberá informar el destino de los fondos invertidos. Cuando las inversiones a que se refiere esta letra se hayan efectuado directa o indirectamente en países o territorios que califiquen como de baja o nula tributación conforme a lo dispuesto en el artículo 41 H, además de la presentación de la declaración referida, deberán informar anualmente, en el plazo señalado, el estado de dichas inversiones, con indicación de sus aumentos o disminuciones, el destino que las entidades receptoras han dado a los fondos respectivos, así como cualquier otra información que requiera el Servicio sobre tales inversiones. La entrega de información incompleta o falsa en las declaraciones que establece esta letra, se sancionará en la forma prevista en el primer párrafo, del número 4 del artículo 97 del Código Tributario.

b) Inversiones en Chile: las empresas, entidades o sociedades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en Chile que obtengan rentas pasivas de acuerdo a los criterios que establece el artículo 41 G, no podrán ser utilizadas en forma abusiva para diferir o disminuir la tributación de los impuestos finales de sus propietarios, socios o accionistas. De acuerdo a lo anterior, cuando se haya determinado la existencia de abuso o simulación conforme a lo dispuesto en los artículos 4° bis y siguientes del Código Tributario, se aplicará respecto del monto de tales inversiones la tributación que corresponda a los beneficiarios de las rentas o cantidades respectivas y las sanciones que procedieren. En todo caso, el contribuyente podrá acreditar que las inversiones fueron realizadas con sumas que corresponden a su capital o a ingresos no constitutivos de renta, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que cuando el capital propio tributario del contribuyente excede de la suma de su capital y de los referidos ingresos no constitutivos de renta, tales inversiones se han efectuado, en el exceso, con cantidades que no han cumplido totalmente con los impuestos de la presente ley. No obstante lo anterior, cuando se determine que los actos, contratos y operaciones respectivos se han llevado a cabo maliciosamente con la finalidad de evitar, disminuir o postergar la aplicación de los impuestos global complementario o adicional, ello será sancionado conforme a lo dispuesto en el primer párrafo, del número 4 del artículo 97 del Código Tributario.

B. Los contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en el país, sean o no sujetos del impuesto a la renta, que tengan o adquieran en un año calendario cualquiera la calidad de constituyente o “settlor”, beneficiario, “trustee” o administrador de un “trust” creado conforme a

disposiciones de derecho extranjero, deberán informar anualmente al Servicio, mediante la presentación de una declaración, los siguientes antecedentes:

a) El nombre o denominación del “trust”, fecha de creación, país de origen, entendiéndose por tal el país cuya legislación rige los efectos de las disposiciones del “trust”; país de residencia para efectos tributarios; número de identificación tributaria utilizado en el extranjero en los actos ejecutados en relación con los bienes del “trust”, indicando el país que otorgó dicho número; número de identificación para fines tributarios del “trust”; y patrimonio del “trust”.

b) El nombre, la razón social o la denominación del constituyente o “settlor”, del “trustee”, de los administradores y de los beneficiarios del mismo, sus respectivos domicilios, países de residencia para efectos tributarios; número de identificación para los mismos fines, indicando el país que otorgó dicho número.

c) Si la obtención de beneficios por parte de él o los beneficiarios del “trust” está sujeta a la voluntad del “trustee”, otra condición, un plazo o modalidad. Además, deberá informarse si existen clases o tipos distintos de beneficiarios. Cuando una determinada clase de beneficiarios pudiere incluir a personas que no sean conocidas o no hayan sido determinadas al tiempo de la declaración, por no haber nacido o porque la referida clase permite que nuevas personas o entidades se incorporen a ella, deberá indicarse dicha circunstancia en la declaración. Cuando los bienes del “trust” deban o puedan aplicarse a un fin determinado, deberá informarse detalladamente dicho fin. Cuando fuere el caso, deberá informarse el cambio del “trustee” o administrador del “trust”, de sus funciones como tal, o la revocación del “trust”. Además, deberá informarse el carácter revocable o irrevocable del “trust”, con la indicación de las causales de revocación. Sólo estarán obligados a la entrega de la información de que se trate aquellos beneficiarios que se encuentren ejerciendo su calidad de tales conforme a los términos del “trust” o acuerdo y quienes hayan tomado conocimiento de dicha calidad, aun cuando no se encuentren gozando de los beneficios por no haberse cumplido el plazo, condición o modalidad fijado en el acto o contrato.

Cuando la información proporcionada en la declaración respectiva haya variado, las personas o entidades obligadas deberán presentar, una nueva declaración detallando los nuevos antecedentes, ello hasta el 30 de junio del año siguiente a aquel en que los antecedentes proporcionados en la declaración previa hayan cambiado.

Para los fines de este número, el término “trust” se refiere a las relaciones jurídicas creadas de acuerdo a normas de derecho extranjero, sea por acto entre vivos o por causa de muerte, por una persona en calidad de constituyente o settlor, mediante la transmisión o transferencia de bienes, los cuales quedan bajo el control de un “trustee” o administrador, en interés de uno o más beneficiarios o con un fin determinado.

Se entenderá también por “trust” para estos fines, el conjunto de relaciones jurídicas que, independientemente de su denominación, cumplan con las siguientes características: i) Los bienes del “trust” constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio personal del “trustee” o administrador; ii) El título sobre los bienes del “trust” se establece en nombre del “trustee”, del administrador o de otra persona por cuenta del “trustee” o administrador; iii) El “trustee” o administrador tiene la facultad y la obligación, de las que debe rendir cuenta, de administrar, gestionar o disponer de los bienes según las condiciones del “trust” y las obligaciones particulares que la ley extranjera le imponga. El hecho de que el constituyente o “settlor” conserve ciertas prerrogativas o que el “trustee” posea ciertos derechos como beneficiario no es incompatible necesariamente con la existencia de un “trust”.

El término “trust” también incluirá cualquier relación jurídica creada de acuerdo a normas de derecho extranjero, en la que una persona en calidad de constituyente, transmita o transfiera el dominio de bienes, los cuales quedan bajo el control de una o más personas o “trustees”, para el beneficio de una o más personas o entidades o con un fin determinado, y que constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio personal del “trustee” o administrador.

En caso de no presentarse la referida declaración por parte del constituyente del “trust”, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la constitución del “trust” constituye abuso o simulación conforme a lo dispuesto en los artículos 4° bis y siguientes del Código Tributario, aplicándose la tributación que corresponda de acuerdo a la calidad de los intervinientes y la naturaleza jurídica de las operaciones. La entrega de información incompleta o falsa en las declaraciones que establece esta letra, se sancionará en la forma prevista en el primer párrafo del número 4 del artículo 97, del Código Tributario.

C. Sanciones. El retardo u omisión en la presentación de las declaraciones que establece este número, o la presentación de declaraciones incompletas o con antecedentes erróneos, además de los efectos jurídicos a que se refieren las letras

precedentes, será sancionada con multa de diez unidades tributarias anuales, incrementada con una unidad tributaria anual adicional por cada mes de retraso, con tope de cien unidades tributarias anuales. La referida multa se aplicará conforme al procedimiento establecido en el artículo 161 de este Código.”.

2.- Incorporase un artículo 85 bis del siguiente tenor:

“Artículo 85 bis. Las entidades financieras señaladas en este artículo deberán proporcionar al Servicio información sobre los saldos de productos o instrumentos de captación, inversión o servicio de custodia que se indican a continuación, así como las sumas de abonos que mantengan sus titulares que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país.

a) Entidades financieras obligadas a reportar.

Estarán obligados a reportar los Bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito sujetos a la fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, y las Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

También deberán reportar las compañías de seguro y las entidades privadas de depósito y custodia de valores.

b) Productos e instrumentos a reportar.

Las entidades financieras deberán reportar información sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista o vales vista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista, cuentas de ahorro a plazo para la vivienda, cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos, y cuentas de ahorro a plazo para la Educación Superior reguladas por el Banco Central de Chile conforme al artículo 35 N°1 de su ley orgánica.

Además, se entienden incluidas las cuentas de custodia reguladas en la ley N°18.876 que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores.

También deberá reportarse información respecto de los contratos de seguros con cuenta de inversión o ahorro, o valor de rescate, o que garanticen un capital al término de un plazo, además de contratos de rentas privadas, ya sean vitalicias o

temporales.

c) Información a reportar.

Las entidades financieras deberán realizar un reporte que contenga la siguiente información: identificación de la entidad financiera, identificación del titular, periodo de reporte, el tipo de producto, número de registro interno del producto, monto, estado de vigencia del producto, y fecha de cierre del producto, cuando corresponda.

Las entidades financieras deberán informar el saldo o valor, así como la suma de los abonos efectuados a los productos o instrumentos a reportar pertenecientes a los titulares de las mismas señalados en el literal d), únicamente cuando el saldo o suma de abonos efectuados a dichos productos o instrumentos, individualmente considerados o en su conjunto, registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 unidades de fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan.

Para establecer el límite de 1.500 unidades de fomento, si el producto o instrumento a reportar se encuentra expresado en dólares de los Estados Unidos de América, o en otra moneda distinta del peso chileno o pactada en un índice de reajustabilidad, se deberá realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, publicado el último día del mes calendario del período que se informa, o del índice de reajustabilidad en su caso, y luego se convertirá a su valor en unidades de fomento, según el valor de ésta el último día del mes al que corresponda al abono o saldo que se informa.

d) Identificación del titular o titulares, controladores y beneficiarios finales.

Se entregará información sobre los titulares de productos o instrumentos a reportar, incluyendo su rol único tributario. Además, se entregará información sobre los controladores de dichos titulares y beneficiarios finales que sean contribuyentes personas naturales o jurídicas, patrimonios de afectación u otras entidades que tengan domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país. Tratándose de productos o instrumentos suscritos por dos o más personas o entidades, se considerará como titulares a todas aquellas registradas o identificadas como tales por la entidad financiera. En este último caso, se repetirá la información reportada tantas veces como titulares tenga el producto o instrumento a reportar.

e) Periodo de entrega de la información.

La información que da cuenta este artículo deberá ser remitida al Servicio de manera anual, a más tardar dentro de los 15 primeros días del mes de marzo de cada año, respecto de los saldos y sumas de abonos efectuados en los productos e instrumentos a reportar durante el año calendario anterior. El informe deberá indicar el saldo final que registre cada producto e instrumento a reportar en cada día y en cada mes correspondiente al año calendario que se informa, y la suma de abonos de cada producto e instrumento a reportar efectuados en el mes.

En todo momento las instituciones obligadas son garantes del adecuado tratamiento de los datos personales recabados y, conjuntamente con la información que remitan al Servicio, deberán comunicar a la persona o institución de quien se recaben los datos que le conciernan, a lo menos, la identidad del responsable del manejo de datos, el fin del tratamiento de que van a ser objeto los datos, los fundamentos legales por los cuales fueron informados y el destinatario o destinación de los datos.

La información recabada por el Servicio mediante las disposiciones de este artículo que no dé lugar a una gestión de auditoría, fiscalización o sanción posterior, deberá ser eliminada en el plazo máximo de un año desde que fue recibida. Asimismo, las instituciones financieras deberán eliminar los informes que elaboren de conformidad a las disposiciones de este artículo al cumplirse 30 días desde que los hayan remitido al Servicio.

f) Monto reportado.

El monto reportado incluirá saldos, valor, prima y sumas de abonos que corresponda según el producto o instrumento a reportar.

Por abono se entenderá la totalidad de transferencias, pagos o cualquier otra cantidad en favor del titular, independientemente de quién lo haya efectuado. Por saldo, se entenderá el valor o situación final de los productos o instrumentos a reportar al cierre de cada día, una vez efectuados los cargos y abonos.

g) Estado de vigencia del producto e instrumento a reportar.

Deberá consignarse la vigencia del producto o instrumento reportado. En caso que se cancele o cierre una cuenta en

el mismo período a informar en que se abrió, ésta debe ser informada si es que hasta la fecha de la cancelación o cierre el monto del saldo o valor de las cuentas financieras es igual o superior a las 1.500 unidades de fomento, según el valor de esta unidad el último día del mes al que corresponda al abono o saldo.

h) Moneda a informar.

El monto reportado se informará en pesos chilenos y corresponderá a un único valor por cada producto o instrumento a reportar del titular por cada periodo que se reporte.

Si el producto o instrumento a reportar se encuentra expresado en dólares de los Estados Unidos de América, en otra moneda distinta del peso chileno o pactada en un índice de reajustabilidad, se debe realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, publicado el último día del mes calendario que se informa, o del índice de reajustabilidad en su caso.

Tratándose de la cancelación de un producto o instrumento a reportar, se debe realizar la conversión a peso chileno, considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, o del índice de reajustabilidad en su caso, en la fecha de la cancelación o cierre del producto o instrumento a reportar.

i) Rectificación, ampliación, complementación o aclaración del Servicio.

El Servicio de Impuestos Internos podrá requerir de las instituciones obligadas a reportar, con audiencia del interesado si así fuere procedente, la rectificación, ampliación, complementación o aclaración de uno o más datos informados.

j) Obligaciones del Servicio.

La información a la que accederá el Servicio con motivo de lo dispuesto en este artículo tendrá el carácter de reservada conforme las reglas establecidas en los artículos 35 y 206 y no podrá ser divulgada en forma alguna, pudiendo ser utilizada únicamente para cumplir con los objetivos de fiscalización que le son propios. La infracción de la reserva de la información obtenida mediante las disposiciones de este artículo se sancionará con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a máximo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

k) Sanciones.

El incumplimiento de entregar la información al Servicio de manera oportuna y completa por parte de una entidad financiera será sancionado con una multa equivalente a 1 unidad tributaria anual por cada uno de los productos o instrumentos a reportar respecto de los cuales se infrinja cualquiera de los deberes señalados. Con todo, la multa total anual a pagar por cada institución no podrá exceder de 500 unidades tributarias anuales. Notificada la institución financiera de su incumplimiento total o parcial por parte del Servicio, y transcurrido el plazo de un mes desde dicha notificación sin que ésta haya entregado la información requerida, no será aplicable el límite a la multa antes señalada. La entrega de información maliciosamente falsa por parte del titular del producto o instrumento a reportar o sus controladores a la institución financiera será sancionada con la multa establecida en el párrafo final del número 4 del artículo 97.”.

Artículo transitorio.- La obligación de informar a que se refiere el numeral 2 del artículo único de esta ley se aplicará respecto de los montos identificados a partir del tercer mes siguiente a la fecha de la publicación de la ley en el Diario Oficial.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 4, 10 y 30 de agosto, 6 y 30 de septiembre, 23 y 29 de noviembre de 2021, con asistencia de los Honorables Senadores señora Ximena Rincón González (Presidenta) y señores Juan Antonio Coloma Correa (Alejandro García-Huidobro Sanfuentes), José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber (Presidente accidental) y Carlos Montes Cisternas (Presidente accidental).

Sala de la Comisión, a 30 de noviembre de 2021.



MARÍA SOLEDAD ARAVENA
Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO OBLIGANDO A BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE SALDOS Y SUMAS DE ABONOS EN CUENTAS FINANCIERAS AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

(BOLETÍN N° 14.111-05)

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: reemplazar el número 2 del artículo 33 bis del Código Tributario, para establecer normas especiales sobre información de determinadas inversiones e incorporar al Código Tributario un nuevo artículo 85 bis, por medio del cual se establece la obligación de bancos e instituciones financieras de entregar información al Servicio de Impuestos Internos respecto de los saldos de productos o instrumentos de captación; inversión o servicio de custodia que indica, así como las sumas de abonos que mantengan sus titulares que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile, o que se hayan constituido o establecido en el país.

II. ACUERDOS: Indicaciones:

Número 1: retirada.

Número 1 bis: aprobada con enmiendas mayoría 2 x1 abstención.

Número 2: rechazada por 3 votos en contra y 2 a favor.

Número 2 bis: aprobada con enmiendas por 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Número 3: retirada

Número 4: retirada

Número 5: retirada

Número 5 bis: aprobada con enmiendas unanimidad 5x0.

Número 6: retirada

Número 7: aprobada con enmiendas unanimidad 5x0.

Número 8: retirada

Número 8 bis: aprobada con enmiendas unanimidad 5x0.

Número 8 ter: aprobada con enmiendas unanimidad 5x0.

Número 8 quater: aprobada unanimidad 5x0.
Número 9: aprobada con enmiendas unanimidad 5x0.
Número A 10: aprobada mayoría 2 x1 abstención.
Número 10: retirada.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de un artículo único permanente, con dos numerales, y un artículo transitorio.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.

V. URGENCIA: no tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Moción de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 23 de marzo de 2021.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe de la Comisión de Hacienda.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: decreto ley N° 830, de 1974, que aprueba texto del Código Tributario.

Valparaíso, a 30 de noviembre de 2021.


MARÍA SOLEDAD ARAVENA
Secretaria de la Comisión

ÍNDICE

	Página
Suma y asistencia	1
Artículo 124 del Reglamento del Senado	3
Discusión en Particular	3
Sesión 4 de agosto 2021	3
Sesión 10 de agosto 2021	10
Sesión 30 de agosto 2021	36
Sesión 6 de septiembre de 2021	54
Indicaciones	64
Modificaciones	100
Texto del Proyecto	108
Acordado	117
Resumen ejecutivo	118
Índice	120